

**¿SE CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL
DEL ESTADO COLOMBIANO EN EL SIDH POR EL
RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES REALIZADO POR
LA GUERRILLA DE LAS FARC?**

Autora: María Isabel Meléndez Salamanca

Tutor: Dante Negro Alvarado

**XIII Máster Universitario en Protección Internacional de los Derechos
Humanos**

Universidad de Alcalá

INDICE DE MATERIAS

ABREVIATURAS.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
I. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO	7
1. Obligaciones del Estado Colombiano.....	12
A. Surgimiento	12
B. Obligaciones para con los niños en el contexto de un conflicto armado.....	14
2. La responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano	20
A. La interpretación de lo consagrado en la CADH	24
a. Complementariedad del DIH y los DDHH	25
II. EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES POR LAS FARC	31
1. El reclutamiento a lo largo de los años.	33
2. ¿Por qué los reclutan	37
3. ¿Cómo los reclutan?.....	38
4. Lo que viven los menores dentro de las FARC	39
5. Vulneraciones a los Derechos Humanos por el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC	42
A. Vulneración al derecho a la vida.....	42
B. Vulneración al derecho a la integridad personal.....	43
C. Vulneración al prohibición de la esclavitud y servidumbre	44
D. Vulneración al derecho a la libertad personal	45
E. Vulneración al derechos del niño	45
III. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO COLOMBIANO.....	46
1. Prevención y protección	48
A. Causas del Reclutamiento	52
B. Conocimiento del riesgo por parte del Estado.....	54
C. Medidas tomadas por el Estado.....	56
a. Medidas legislativas	56
b. Otras medidas Planes, Programas e Iniciativas	58
2. Recuperación y reintegración	60
3. Investigación, juzgamiento y sanción.....	65
A. Lo que incluye la obligación de investigar según la Corte IDH	70
B. Proceso de paz en Colombia.....	74
a. Antecedentes en Colombia	75
b. Acuerdo Final de para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.....	77
4. Adecuación	85
CONCLUSIONES.....	87
BIBLIOGRAFÍA.....	89
INDICE DE PRÁCTICA.....	90
ANEXOS	100

ABREVIATURAS

- CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- CDI: Comisión de Derecho Internacional.
- CDN: Convención de los Derechos del Niño.
- CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- CP: Constitución Política
- CPI: Corte Penal Internacional
- DDHH: Derechos Humanos
- DI: Derecho Internacional.
- DIDH: Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
- DIH: Derecho Internacional Humanitario.
- DIP: Derecho Internacional Público.
- DPI: Derecho Penal Internacional.
- FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
- GAOML: Grupo Armado Organizado al Margen de la Ley.
- ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
- JEP: Jurisdicción Especial para la Paz.
- OACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
- OIT: Organización Internacional del Trabajo.
- ONU: Organización de las Naciones Unidas
- ONG: Organización No Gubernamental
- OOII: Organizaciones Internacionales.
- NNA: Niños, niñas y adolescentes.
- SIDH: Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
- SIVJRNR: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
- UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
- Watchlist: Watchlist on Children and Armed Conflict

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo busca determinar cuándo y en qué circunstancias, se puede atribuir a un Estado responsabilidad internacional por hechos cometidos por particulares, como podría ser el caso de las FARC. Esta posibilidad ya ha sido recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante SIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) ha condenado a los Estados internacionalmente por actos de terceros, cuando dichos actos se hayan realizado con aquiescencia o complicidad del Estado, o por ser éste el generador directo del riesgo sin ser analizada la situación, en concreto, de un particular que no tenga una relación directa con el Estado, como lo es las FARC. Ahora bien, dentro de todas las atrocidades cometidas por este grupo guerrillero se eligió como marco de investigación el reclutamiento forzado de menores por ser un hecho que infringe las normas del Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH), por ser una grave vulneración a los Derechos Humanos y constituir a su vez un crimen internacional.

Se realiza una investigación descriptiva en la cual a partir de la recolección de información, se exponen y analizan minuciosamente las investigaciones, informes, y precedentes jurisprudenciales; se interpretan la diversidad de causas, situaciones, y medidas tomadas frente al hecho, describiendo el desarrollo de cada una de ellas. La metodología utilizada es deductiva pues se parte del análisis de normas generales del Derecho Internacional, buscando su debida aplicación en el caso colombiano; y analítica, ya que se examina independientemente cada uno de los elementos del hecho ilícito internacional para así poder determinar si se genera una responsabilidad internacional.

Las fuentes utilizadas en el trabajo son diversas, pues se toman tanto las fuentes principales como auxiliares del Derecho Internacional (en adelante DI), del derecho interno y otras fuentes de información.

Al indagar sobre una posible responsabilidad internacional en el SIDH se verifican tanto los instrumentos internacionales de ese sistema regional, como la jurisprudencia de su Tribunal, la Corte IDH, la cual para interpretar, a su vez, hace uso de otros instrumentos internacionales de carácter universal, principios, así como decisiones de diferentes Organizaciones Internacionales. Finalmente, se tiene en cuenta diferentes investigaciones realizadas por ONG así como los aportes de académicos que han tratado la temática del reclutamiento forzado.

Por otra parte, para determinar si las actuaciones de las autoridades estatales cumplen con la debida diligencia, se toman como referencia la normatividad interna, la jurisprudencia, así como otras fuentes de información, entre ellos: informes e

investigaciones de Instituciones estatales, proyectos y políticas públicas, artículos de investigación y de prensa. También se hizo uso de información aportada por diversas instituciones como respuesta a derechos de petición interpuestos, los cuales se anexan.

Debido a la cantidad de hechos atroces que se han cometido en el mundo y que a su vez han dejado grandes marcas en la historia, como las guerras, la comunidad internacional busca diferentes estrategias para comprometer a los actores internacionales, especialmente a los Estados, en obligaciones que garanticen la convivencia y cooperación entre sus miembros. Por ello, se crean instrumentos internacionales que regulen los comportamientos de los actores armados, es decir, que todo enfrentamiento internacional o interno tenga límites y cause los menores daños posibles.

Adicional a ello, se consideró que hay derechos que se deben proteger tanto en tiempos de guerra como de paz; garantías mínimas que debe tener cualquier persona por el hecho de serlo, ya que se basan únicamente en la dignidad humana, los cuales se regulan y se contemplan dentro de los denominados Derechos Humanos.

No obstante, en los diferentes contextos se pudo determinar que hay grupos más vulnerables, que sufren en mayor medida las consecuencias de los hechos y que requieren una mayor protección por parte de los Estados, como son los niños. De allí que se generen también normas que garanticen su protección.

Los Estados al haber ratificado estos instrumentos han adquirido una serie de obligaciones para garantizar el cumplimiento de los mismos. Entre ellas se destaca, que al presentarse una vulneración a lo estipulado en dichos instrumentos, los Estados deben tener la capacidad de resolverla en su jurisdicción interna; de no ser así, de manera subsidiaria o complementaria se han creado diferentes mecanismos internacionales para garantizar su protección, tanto a nivel regional como universal.

En el momento en que el Estado adquiere obligaciones, se entiende que son sus autoridades quienes únicamente deben respetarlas, y que en caso de incumplimiento generarán su responsabilidad internacional. Sin embargo, con la progresividad de los derechos se ha determinado que si bien las obligaciones las adquiere el Estado, estas van dirigidas a todas las personas que están bajo su jurisdicción. Por tanto, el Estado debe tomar todas las medidas que estén a su alcance para que no solo sus agentes, sino los particulares también respeten y cumplan estas disposiciones. Si el Estado no toma las medidas necesarias para garantizar el respeto de los instrumentos por parte de terceros para el cumplimiento de sus obligaciones, falta a la debida diligencia y podría ser declarado internacionalmente responsable, no por la conducta de dicho particular

directamente, sino, como se verá en este trabajo, precisamente por incumplimiento de dicho deber de diligencia.

El primer capítulo refiere la teoría del hecho ilícito internacional, el cual para que se configure requiere de un hecho de Estado y del incumplimiento de una obligación internacional, conllevando así a la responsabilidad internacional. Para esto, se analiza cómo se puede dar un hecho de Estado por actos de particulares y se revisan las diferentes obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado, específicamente en las que se involucran los derechos de los niños en medio de un conflicto armado.

Este apartado también incluye cómo en el sistema regional Interamericano se ha concebido y desarrollado la responsabilidad internacional, estableciendo que al ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), el instrumento fundamental en el SIDH, y contemplar en sus artículos 1.1 y 2 las obligaciones de los Estados Parte, es en caso de incumplimiento de las mismas que se genera la responsabilidad internacional, la cual debe ser declarada por el Corte IDH. Este Tribunal, a través de su jurisprudencia ha realizado diferentes interpretaciones respecto a las obligaciones de los Estados y concretamente frente a la de garantía, y ha determinado que se genera responsabilidad internacional por actos de terceros, cuando el Estado falta a la debida diligencia. Asimismo ha interpretado las obligaciones de la CADH integrándolas y complementándolas con disposiciones tanto de Derechos Humanos (en adelante DDHH) como de DIH, cuando los actos ocurren en medio de un conflicto armado interno, refiriéndolo específicamente al caso Colombiano.

El segundo capítulo muestra cómo se ha configurado el reclutamiento de menores y las vulneraciones que esto ha causado en los niños. Pues la magnitud y duración del conflicto en Colombia ha generado que los grupos guerrilleros tengan como estrategia incorporar niños en su organización armada de diversas maneras, desde espías y transportadores de bienes, hasta con su participación en las hostilidades; aun siendo esto prohibido en el Derecho Internacional. Según las diferentes fuentes consultadas el reclutamiento de menores se viene realizando desde 1975 y al año 2015 aún se registraban casos de niños incorporados a estas guerrillas. Esto, fue un hecho tan evidente y tan preocupante que a lo largo de su desarrollo diferentes ONG, organismos internacionales e instituciones nacionales se pusieron en la tarea de investigar, las causas, el modus operandi de estos grupos, lo vivido por los menores durante su permanencia y las formas de desvinculación, solicitando al gobierno Colombia que tomara medidas para su recuperación y la prevención de estos hechos.

El tercer capítulo busca puntualizar las obligaciones internacionales del Estado colombiano respecto al reclutamiento forzado que realizó las FARC. Después de analizar las disposiciones de la Corte IDH se determina que son: la obligación de prevención y protección de los menores; la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables; y la reparación o reintegración de los niños. Respecto de cada una se señala el conocimiento que tenía el Estado y las medidas tomadas por este, con el fin de determinar si cumplen o no con lo exigido por los instrumentos internacionales. Finalmente, como parte del cumplimiento de sus obligaciones se analiza lo estipulado en el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno Colombiano y las FARC, pues en este se incluyen todas las acciones perpetuadas por este grupo guerrillero en desarrollo del conflicto interno, entre ellas el reclutamiento forzado.

I. LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO

Los Estados como sujetos principales del DI tienen el deber de adecuar su comportamiento a los mandatos contenidos en dicho ordenamiento jurídico, con el consabido riesgo de incurrir, en caso de no hacerlo, en un ilícito internacional generador, entre otras consecuencias, de una relación de responsabilidad internacional¹.

La responsabilidad internacional presupone la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, esto es, un comportamiento contrario a una obligación internacional atribuible al Estado. Por ello, en este primer capítulo analizaremos los presupuestos del hecho internacionalmente ilícito, así como las diferentes obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado Colombiano respecto a la protección de los niños en el conflicto armado interno, específicamente las relacionadas con la prohibición del reclutamiento forzado.

No obstante, antes de analizar el hecho internacionalmente ilícito es importante repasar la funcionabilidad del DI en el sistema internacional según lo analiza el Prof. Jiménez Piernas, a saber:

El sistema internacional es un conjunto de relaciones entre un determinado número de actores, sobre todos los Estados, las OOI y las fuerzas transnacionales, que se desarrolla en un determinado entorno material y se somete a un determinado modo de regulación. Pues bien, el DIP es precisamente el modo de regulación propio de ese sistema internacional. Pero no es una simple recopilación de normas, sino que existen relaciones entre ellas; de tal modo que conviven en su seno norma de rango superior e inferior o generales y específicas, dentro de un conjunto unitario y suficientemente coherente².

¹ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea*. Ed Tecnos, Madrid, 2011, pág. 387.

² *Ibid.*, pág. 31.

Así, el ordenamiento internacional regula tanto las relaciones de coexistencia entre Estados soberanos como las relaciones de cooperación para el logro de objetivos comunes, pero también las relaciones entre los Estados derivadas de las obligaciones que el DI les impone para salvaguardar los intereses de la comunidad internacional en su conjunto y de ciertos derechos que se le atribuyen a la persona humana y a los pueblos³.

Como parte del ejercicio de su soberanía los Estados crean sus propias obligaciones a través de los tratados internacionales que ratifican y a su vez son ellos mismos quienes dan aplicación, regida por los principio de equidad y buena fe. Dejando en casos muy específicos como subsidiaria o complementaria la aplicación por parte un Órgano Internacional.

El artículo 2.2 de la Carta de las Naciones Unidas, así como el artículo 26 del Convenio de Viena sobre el derecho a los tratados establecen el cumplimiento de buena fe de las obligaciones contraídas por las partes, de allí se deriva uno de los principios del DI *-Pacta sunt servanda-* lo pactado obliga. No obstante, la Resolución A/RES/2625(XXV) extiende el deber de cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales contraídas en principios y normas y sean provenientes no solo de un tratado sino también de la costumbre.

Debido a que el cumplimiento de las obligaciones parte de la voluntad de los Estados, puede ocurrir que voluntariamente o por negligencia una conducta sea contraria a la obligación establecida por una norma internacional incurriendo en la violación de la misma, en cuyo caso estaríamos frente ante un hecho internacionalmente ilícito trayendo como consecuencia jurídica a su vez su responsabilidad internacional.

Hecho referido también por la CID en su proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos⁴.

Artículo 1: Todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional.

Artículo 2: Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión:

a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y

b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.

Artículo 3: La calificación del hecho del Estado como internacionalmente ilícito se rige por el derecho internacional. Tal calificación no es afectada por la calificación del mismo hecho como lícito por el derecho interno.

Por tanto, la conducta de un Estado se considera ilícita cuando constituye una violación de una obligación internacional, siendo irrelevante si esta se considera lícita o

³ ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Sistema de Derecho Internacional Público*, Madrid, 2011, págs. 29-30

⁴ ONU., A/RES/56/83 (2002), Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Resolución aprobada por la Asamblea General, 28 de enero de 2002.

ilícita en su orden interno, ni que la producción del daño o perjuicio material ni la culpa del autor han de concurrir para que surja el hecho internacionalmente ilícito⁵.

Por su parte, la Corte IDH ha referido que para establecer que se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno la culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos violatorios⁶. Es suficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infracción de los derechos reconocidos en la Convención⁷, u omisiones que hayan permitido la perpetración de esas violaciones.

Dentro de los elementos para determinar la existencia del hecho ilícito entonces se debe demostrar la atribución al Estado de un hecho según el DI, atribución que se considera consiste en una operación lógica-jurídica que permite identificar al autor de un determinado hecho al que el ordenamiento internacional vincula determinadas consecuencias jurídicas, con la condición de que éste sea catalogado como hecho de Estado⁸.

En concordancia con lo establecido en el proyecto la responsabilidad del Estado de la CDI por hechos internacionalmente ilícitos en relación a la atribución de un comportamiento al Estado, existen diferentes supuestos que son considerados hechos de Estado, y que han ampliado considerándose entre estos:

- a) Comportamiento de los órganos del Estado: todo aquel que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenecen al gobierno central como a una división territorial;
- b) Comportamiento de una persona o entidad que ejerce atribuciones del poder público;
- c) Comportamiento de un órgano puesto a disposición de un Estado por otro Estado;
- d) Extralimitación en la competencia o contravención de instrucciones;

⁵ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Óp. Cit.*, pág. 388.

⁶ Corte IDH. *Caso 19 Comerciante vs. Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 141; *Caso Maritza Urrutia vs Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103, párr. 41, y *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala*. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 75.

⁷ Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 44, y *Caso Cantos vs Argentina*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002, Serie C No. 97, párr. 28.

⁸ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Óp. cit.*, pág. 389.

- e) Comportamiento de una persona que actúa de hecho por instrucciones o bajo dirección o control del Estado;
- f) Comportamiento de una o varias personas cuando ejerce de hecho atribuciones del poder público en ausencia o defecto de las autoridades oficiales;
- g) Comportamiento de un movimiento insurreccional o de otra índole que se convierta en el nuevo gobierno;
- h) Comportamiento que el Estado reconoce y adopta como propia;
- i) Comportamiento llevado a cabo por particulares.

Este último comportamiento es el más debatido y el que más nos interesa, pues si bien en un inicio las conductas llevadas por particulares no son atribuibles al Estado, y por tanto, no constituyen hechos del Estado, un Estado podría llegar a ser declarado internacionalmente responsable si quedara demostrado que sus órganos o autoridades no actuaron con la debida diligencia.

Entendiendo la debida diligencia como:

el nivel de cuidado objetivo que, atendidas todas las circunstancias de cada caso, un Estado dotado de las infraestructuras mínimas exigidas por el DI tiene el deber de desplegar en el marco de su jurisdicción o en espacios libres de soberanía estatal, con el fin de salvaguardar, de las conductas que pudieran llevar a cabo particulares que no actúan por cuenta del Estado, un bien o interés protegido por una obligación internacional, ya sea previniendo su lesión ya sea persiguiendo a los autores de la misma. Todo ello con independencia de que dichas conductas puedan llegar a constituir per se un supuesto de responsabilidad internacional del individuo que las ha llevado a cabo⁹.

Así también lo ha referido la Corte Interamericana en su jurisprudencia.

[...]En efecto, un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por ese hecho en sí mismo, sino por falta de la *debida diligencia* para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención¹⁰.

Respecto a la responsabilidad internacional por actos de particulares igualmente se ha referido a la Teoría *Drittwirkung* en la opinión consultiva sobre *Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados*, donde declara que los derechos fundamentales son límites directos al actuar de los particulares al señalar que:

[...] se debe tener en cuenta que existe una obligación de respeto de los derechos humanos entre particulares. Esto es, de la obligación positiva de asegurar la efectividad de los

⁹ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Óp. Cit.*, págs. 394-395.

¹⁰ Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes vs Colombia*. *Óp. Cit.* párr. 140; *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia*, Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. b56; y *Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras*, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 172; *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras*. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 182.

derechos humanos protegidos, que existe en cabeza de los Estados, se derivan efectos en relación con terceros (*erga omnes*). Dicha obligación ha sido desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del *Drittwirkung*, según la cual los derechos fundamentales deben ser respetados tanto por los poderes públicos como por los particulares en relación con otros particulares¹¹.

[...]La responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. Los Estados Partes en la Convención tienen obligaciones *erga omnes* de respetar y hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones *erga omnes* contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención¹².

En relación con esta teoría, estudiada desde los pronunciamientos de la Corte IDH, se ha expresado que el deber de protección a cargo de los Estados es de carácter general, es decir, se aplica a todos los supuestos y todas las personas que se encuentren sujetas a su jurisdicción. Por tanto, una vez acreditada la tolerancia o inactividad de los poderes públicos el hecho se refuta como imputable al Estado, por violación a lo previsto en el artículo 1.1 de la Convención. De tal modo que si el aparato del Estado actúa de modo que la violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber previsto en el artículo 1.1[...] Esta apreciación es válida cualquiera que sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aún los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían en cierto modo auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad del Estado¹³.

Retomando, hay violación de una obligación internacional cuando un hecho del Estado no resulta conforme con lo que de él exige esa obligación sea cual fuere el origen o la naturaleza de la misma. La determinación de cómo y cuándo se produce la violación de una obligación internacional depende de su contenido, interpretación y aplicación así como de su objeto y finalidad a la vista de una de las circunstancias del caso¹⁴.

¹¹ Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-18/03*. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados., 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 140.

¹² Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Fondo, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 111.

¹³ MIJANGOS Y GONZÁLEZ. J., "La doctrina de la *Drittwirkung* Der Grundrechte en el jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", UNED, *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 20, 2007, págs. 590-591.

¹⁴ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Óp. Cit.*, pág. 395.

El comportamiento que impone una obligación puede consistir en una acción u omisión o en una combinación de ambas, en vigor al momento de la violación. Se ha considerado un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tal responsabilidad puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder, órgano o agente estatal, independientemente de su jerarquía, que violen los derechos internacionalmente consagrados¹⁵.

Si el hecho de Estado es ilícito conlleva a la responsabilidad internacional del Estado, naciendo con ello nuevas obligaciones entre ellas: la cesación y no repetición del comportamiento ilícito y la de reparar las consecuencias perjudiciales derivadas de ese hecho.

Conociendo los elementos que se deben dar para que un Estado incurra en un hecho internacionalmente y que a su vez genere su responsabilidad internacional es determinante revisar las obligaciones contraídas por el Estado en el DI, para poder establecer su incumplimiento y determinar que la acción u omisión que genere el incumplimiento sea atribuible a Estado.

1. Obligaciones del Estado Colombiano

A. Surgimiento

Terminada la Segunda Guerra Mundial los Estados fundados en la dignidad humana se ven en la necesidad de tomar medidas para regular los conflictos armados, buscando la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas. Todo ello a través de tratados internacionales, algunos de los cuales a su vez son constitutivos de Organizaciones Internacionales a las cuales les otorgan fines y funciones específicas.

Respecto a los conflictos armados desde 1864 se han venido creando instrumentos internacionales que regulan los enfrentamientos armados sin referirse a la protección de los civiles, de allí que en 1949 se consolidan los Cuatro Convenios de Ginebra. El I Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña. El II Convenio de Ginebra protege, durante la guerra, a los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar. El III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. El IV Convenio de Ginebra protege a las personas civiles, incluso en los territorios ocupados. Y Especialmente el artículo 3,

¹⁵ Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras*. Óp. Cit., párr. 142; *Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párr. 163; y *Caso de los "Niños de la Calle" (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala*. Óp. Cit., párr. 220.

común a los cuatro Convenios de Ginebra marca un gran avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales, que nunca antes habían sido incluidos en los tratados.

Pero al ver el aumento en el número de conflictos armados no internacionales y de guerras de liberación nacional. En 1977 se aprobaron dos Protocolos adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, reforzando la protección que se confiere a las víctimas de los conflictos internacionales (Protocolo I) y de los conflictos no internacionales (Protocolo II) y se fijan límites a la forma en que se libran las guerras. Siendo así el Protocolo II el primer tratado internacional dedicado exclusivamente a las situaciones de conflicto armado no internacional.

Frente a la protección de los Derechos Humanos, se puede decir que esta inicia con la Carta de San Francisco al establecer la Organización de Naciones Unidas como órgano universal con el propósito fundamental de garantizar la paz y la seguridad internacionales, y para conseguirlo se establecieron como principios básicos: la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza; el arreglo pacífico de controversias de conformidad con el derecho internacional; el respeto al derecho a la libre determinación y al desarrollo económico y social de los pueblos; y el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales de todos, sin discriminación.

Seguido de ello se adoptan las Declaraciones: La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá en 1948, la misma que dispuso la creación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948 en París.

Al observar la voluntad de los Estados para afianzar la protección de los Derechos Humanos es que las Organizaciones Internacionales impulsan la adaptación de diferentes tratados internacionales, tanto a nivel universal como a nivel regional, entre ellos: El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por su sigla en inglés) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 la cual reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su protección y garantía, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (también llamada Pacto de San José de Costa Rica) suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en Costa Rica y es una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos.

Pero a su vez se han adoptado instrumentos que protegen directamente a grupos específicos debido a su mayor vulnerabilidad como es el caso de los niños. Se inició con la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924, posteriormente la Declaración de los Derechos del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1959 y finalmente se complementó con la Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante CDN) tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren de protección especial.

Convención que se encuentra a su vez desarrollada o complementada por los siguiente Protocolos Facultativos : i) Relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, ii) Relativo a la participación de niños en los conflictos armados, Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, y iii) Relativo al procedimiento de comunicaciones; Resolución A/RES/66/138, entrada en vigor el 28 de mayo de 2012.

Si bien se han señalado los instrumentos más destacados sobre protección de los derechos de la persona humana, no son los únicos. Pues con el objetivo de poner fin a la impunidad de los autores de los crímenes más graves y a contribuir así a la prevención de los mismos se crea el Estatuto de Roma el 17 de julio de 1998, durante la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional". A su vez la OIT dentro de sus Convenios sancionados se ha referido a la protección de derechos fundamentales destacando el Convenio N° 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999.

B. Obligaciones para con los niños en el contexto de un conflicto armado

Son numerosos tratados los ratificados por Colombia, es decir, las obligaciones adquiridas por el Estado. No obstante, nos referiremos a aquellos a partir de los cuales Colombia se obliga en proteger a los niños, así como las relacionadas a su participación en el contexto de un conflicto armado.

<p>Convenios de Ginebra</p> <p>I. Para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña</p> <p>II. Para aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar.</p>	<p>Aprobados por la Conferencia Diplomática para elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger las víctimas de la guerras, el 12 de agosto de 1949, Entraron en vigor: 21 de octubre de 1950</p>	<p>Ley 5a. de 1960</p> <p>Decreto 1016/90</p> <p>08 de mayo de 1962 entra en vigor</p>
---	---	--

III. Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra. IV. Relativo a la Protección de la Población Civil.		
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)	Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en Vigor el 23 de marzo de 1976.	Ley 74 de 1968
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966)	Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en Vigor el 23 de marzo de 1976.	Ley 74 de 1968
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en Vigor 3/01/76	Ley 74 de 1968
Convención Americana sobre Derechos Humanos. “Pacto de San José”	Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969. Entró en vigor: 18 de julio de 1978.	Ley 16 de 1972
Protocolo Adicional (Protocolo II) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977)	Aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, el 8 de junio de 1977. Entró en vigor: 7 de diciembre de 1978	Ley 171 de 1994 Decreto 509/96 14 de Febrero de 1996 entra en vigor
Convención sobre los Derechos del Niño	Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entró en vigor: 2 de septiembre de 1990	Ley 12 de 1991
Convenio OIT No. 182 Sobre las peores formas de trabajo infantil.	Adoptado en la 87ª Conferencia Internacional del Trabajo, el 17 de junio de 1999. Entra en vigor internacional el 19 de noviembre de 2000.	Ley 704 de 2001 Decreto 1547/05 28 de enero de 2006 entra en vigor
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados	Aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo de 2000 mediante Resolución A/RES/54/263. Entró en vigor: 12 de febrero de 2002	Ley 833 de 2003 Decreto 3966/05 25 Junio 2005 entra en vigor.
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1988	Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000. Entra en vigor para crímenes de guerra el 01 de noviembre de 2009.	Ley 742 del 5 de junio de 2002

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores

Ahora entraremos a verificar las diferentes obligaciones que el Estado Colombiano ha adquirido en cada uno de estos instrumentos internacionales, relacionados con la protección de los menores y su participación en los conflictos armados.

Frente al Sistema Interamericano tomaremos como documento básico la CADH que en sus artículos 1 y 2 enumera los deberes del Estado y da protección al menor en el 19.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a **garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, [...]** (Subrayado fuera del texto)

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes **se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.**

Artículo 19. Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

La CADH desde el artículo 3 al 26 establece los derechos y libertades que debe tener todo ser humano que se encuentre dentro de la jurisdicción de un Estado Parte; Sin embargo, son los artículo 1.1 y 2 los que señalan las obligaciones a las que se somete el Estado y las cuales en caso de incumplimiento conllevarían a determinar su responsabilidad internacional.

Respecto a las obligaciones del Estado frente a un conflicto armado no internacional, refrendando los principios humanitarios del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 se crea el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977 que establece:

Artículo 4. Garantías fundamentales

3. Se proporcionarán **a los niños** los cuidados y la ayuda que necesiten y, en particular:
 - a) recibirán una educación, incluida la educación religiosa o moral, conforme a los deseos de los padres o, a falta de éstos, de las personas que tengan la guarda de ellos;
 - b) se tomarán las medidas oportunas para facilitar la reunión de las familias temporalmente separadas;
 - c) **los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades;**
 - d) la protección especial prevista en este artículo para los niños menores de quince años seguirá aplicándose a ellos sí, no obstante las disposiciones del apartado c), han participado directamente en las hostilidades y han sido capturados;
 - e) se tomarán medidas, si procede, y siempre que sea posible con el consentimiento de los padres o de las personas que, en virtud de la ley o la costumbre, tengan en primer lugar la guarda de ellos, **para trasladar temporalmente a los niños de la zona en que tengan lugar las hostilidades a una zona del país más segura** y para que vayan acompañados de personas que velen por su seguridad y bienestar.

Este Protocolo como parte del DIH es el primer instrumento que regula directamente; y por tanto, pone límites a los conflictos armados internos, prohibiendo expresamente que por grupos armados recluten niños para que participen en las hostilidades. Sin embargo, por la fecha de expedición y el contexto la edad la fija en los 15 años.

La Convención sobre los Derechos del Niño tiene sus apartes específicos referentes a los conflictos armados así:

Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. [...]

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: [...] tortura u otra forma de malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.

Esta Convención impone al Estado velar para que todos los actores del conflicto armado cumplan con el DIH aún más cuando se vean afectados los menores, le exige que tome medidas para protección y la recuperación de los menores afectados por el conflicto.

Por otra parte, con el objetivo de que los crímenes más graves no queden impunes y recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales en el Estatuto de Roma de 1998 se consagran y desarrollan los delitos más graves, dentro del cual se encuentra el reclutamiento forzado de menores como un crimen de guerra.

Artículo 8 Crímenes de guerra

1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de guerra":

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;

Esta disposición exige que estos crímenes no queden impunes; es decir, que se investigue, enjuicie y condene a los responsables, inicialmente en el ámbito interno, sino lo conocerá de manera subsidiaria la Corte Penal Internacional.

Durante las negociaciones sobre el Estatuto de Roma, se aceptó que la «participación» incluiría la participación directa en combates y las actividades militares vinculadas a combates como servir de guías, labores de espionaje y sabotaje y utilización de niños menores de 15 años como señuelos, mensajeros y en los puntos de control militar, así como el uso de niños para cualquier actividad (incluso el transporte de alimentos) en el frente¹⁶.

La Organización Internacional del Trabajo al momento de analizar las peores formas de trabajo infantil, se percató del reclutamiento forzado menores y lo incluye en su Convenio 182 de 1999, imponiéndole obligaciones a los Estados así:

Artículo 1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgencia.

Artículo 3. A los efectos del presente Convenio, la expresión "las peores formas de trabajo infantil" abarca:

(a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados;

Artículo 6.

1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil.

Artículo 7

1. Todo Miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole.
2. Todo Miembro deberá adoptar, teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de:
 - (a) impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil;
 - (b) prestar la asistencia directa necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social;
 - (c) asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil el acceso a la enseñanza básica gratuita y, cuando sea posible y adecuado, a la formación profesional;
 - (d) identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y
 - (e) tener en cuenta la situación particular de las niñas.
3. Todo Miembro deberá designar la autoridad competente encargada de la aplicación de las disposiciones por las que se dé efecto al presente Convenio.

¹⁶ ONU. *Borrador final del Estatuto*., Comité Preparatorio sobre el Establecimiento de la CPI. pág. 21; LEE, R., *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results* (1999, Kluwer Law International), p. 117, y nota 8 de este documento.

El Convenio hace una interpretación del reclutamiento y lo incluye entre las peores formas de trabajo que sufren los menores. Además trae consigo obligaciones muy específicas al Estado de tomar medidas tanto para prohibir, como para prevenir, proteger, investigar, recuperar y rehabilitar a los menores que sufran el reclutamiento forzado. Entre ellas alternativas de desarrollo para los menores.

Por otro lado, es a partir del incremento de la participación de los menores en los conflictos armados que se crea el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, en el cual se reafirma que los derechos del niño requieren de una protección especial y preocupados por los efectos que los conflictos generan a los menores, se retoman los diferentes instrumentos que se han pronunciado al respecto y se establece.

Artículo 4

1. Los grupos armados distintos de las fuerzas armadas de un **Estado no deben en ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a menores de 18 años.**
2. Los Estados Partes adoptarán **todas las medidas posibles** para impedir ese reclutamiento y utilización, con inclusión de la adopción de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas.

Artículo 6

1. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del presente Protocolo dentro de su jurisdicción.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las **medidas posibles** para que las personas que estén bajo su jurisdicción y hayan sido reclutadas o utilizadas en hostilidades en contradicción con el presente Protocolo sean desmovilizadas o separadas del servicio de otro modo. De ser necesario, los Estados Partes prestarán a esas personas toda la asistencia conveniente para su recuperación física y psicológica y su reintegración social.

Artículo 7

1. Los Estados Partes cooperarán en la aplicación del presente Protocolo, en particular en la prevención de cualquier actividad contraria al mismo y la rehabilitación y reintegración social de las personas que sean víctimas de actos contrarios al presente Protocolo.

Finalmente, se puede observar como este instrumento recoge todo lo establecido por los anteriormente referidos, con ello ratifica todos los compromisos de los Estados frente a los menores que participan en el conflicto armado. Obligándole a tomar TODAS las medidas POSIBLES para la recuperación de los menores reclutados, pero también para prohibir y tipificar esta práctica, exigiéndole prestarle asistencia a las víctimas.

El Estado Colombiano por tanto se encuentra obligado conforme al principio *pacta sunt servanda* a dar cumplimiento a las obligaciones aquí descritas a través de sus políticas públicas y demás medidas necesarias, pues de lo contrario, al incumplir una obligación puede incurrir en responsabilidad internacional.

Adicional a ello en el DIH se diseñaron los “*Los Principios y Directrices Sobre Niñez Vinculada Con Fuerzas o Grupo Armados*” – Declaración de París 2007, la cual UNICEF complementa con una guía para los principios, denominándolos los “*Principios y Guías sobre Niñez vinculada a Grupos y Fuerzas Armadas*”. Instrumentos que ayudan a que los Estados otorguen la debida protección a los menores.

2. La responsabilidad internacional del Estado en el Sistema Interamericano

La Corte IDH ha sido enfática al establecer que las obligaciones contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención constituyen en definitiva la base para la determinación de responsabilidad internacional a un Estado por violaciones a la misma. De tal manera, dicho instrumento constituye en efecto *lex specialis* en materia de responsabilidad estatal, en razón de su especial naturaleza de tratado internacional de derechos humanos *vis-à-vis* el Derecho Internacional general¹⁷.

Ha referido que la responsabilidad internacional de los Estados, en el marco de la CADH, surge en el momento de la violación de las obligaciones generales, de carácter *erga omnes*, de respetar y hacer respetar –garantizar– las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona, recogidas en los artículos 1.1 y 2 de dicho tratado¹⁸. Y al mismo tiempo que de esas obligaciones generales se derivan deberes especiales, determinables en función de las necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre. En este sentido, el artículo 1.1 impone a los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y garantía de los derechos, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad internacional.

En conclusión, la responsabilidad internacional del Estado se funda en “actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la CADH”¹⁹, y se genera en forma inmediata con el ilícito internacional atribuido

¹⁷ Corte IDH, *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 107.

¹⁸ Corte IDH., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp Cit., párr. 111; *Opinión Consultiva OC-18/03*, Óp Cit., párr. 140.

¹⁹ Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp Cit., párr. 110; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párr. 71, y *Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras*, Óp Cit., párr. 142.

al Estado. [...] Siendo suficiente que exista una obligación del Estado que haya sido incumplida por éste²⁰.

En lo que se refiere a las obligaciones el artículo 1.1 establece la de respeto y la de garantía. La de respeto implica necesariamente la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal²¹. Por otro lado, la de garantía cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de “prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”²².

Dentro de la obligación de *garantizar* el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción, contemplada en el apartado 1.1, se indica que esta a su vez implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras mediante las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, previniendo, investigando y, si es del caso, juzgando y sancionando toda violación de los derechos reconocidos por la CADH, así como procurando el restablecimiento el derecho vulnerado (de ser posible) y reparando los daños producidos por la violación de los derechos humanos²³.

El Tribunal también reitera que la obligación de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. De tal manera, de

²⁰ Corte IDH., *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 112.

²¹ Corte IDH., *Opinión Consultiva OC-6/86.* La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.

²² Corte IDH., *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.* *Óp Cit.*, párr. 174; *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay.* Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 73; *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252. párr. 144; *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párr. 189; *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270, párr. 223.

²³ MEDINA ARDILA, F. *La responsabilidad Internacional del Estado por actos de particulares: análisis jurisprudencial interamericano*, (Colombia: Ministerio de Relaciones Exteriores), págs. 94-95.

esa obligación general de garantía deriva la obligación de investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 1.1 de la Convención en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado.²⁴

Respecto a la obligación de adecuar contemplada en el artículo 2 de la CADH. La Corte ha sido enfática al señalar que es competente para decidir si cualquier norma del derecho interno o internacional aplicada por un Estado, en tiempos de paz o de conflicto armado, es compatible o no con la Convención Americana. En dicha función no tiene ningún límite normativo: toda norma jurídica es susceptible de ser sometida a este examen de compatibilidad²⁵.

Asimismo, señala que el artículo 2 de la Convención obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención²⁶.

Sin embargo, es importante recordar el carácter subsidiario y complementario de las Cortes Internacionales. A este respecto, la Corte también ha sido clara al establecer que la responsabilidad estatal bajo la CADH sólo puede ser exigida a nivel internacional después de que el Estado haya tenido la oportunidad de reparar el daño ocasionado por sus propios medios, y la atribución de la misma a un Estado por actos de agentes estatales o de particulares deberá determinarse atendiendo a las particularidades y circunstancias de cada caso²⁷, así como a los correlativos deberes especiales de prevención y protección aplicables al mismo. Si bien esa atribución se realiza con base en el Derecho Internacional, las diversas formas y modalidades que pueden asumir los hechos en situaciones violatorias de derechos humanos hacen poco menos que ilusoria la pretensión de que el DI defina en forma taxativa –o cerrada o *numerus clausus*– todas las hipótesis o situaciones –o estructuras– de atribuibilidad o imputabilidad al Estado de cada una de las posibles y eventuales acciones u omisiones de agentes estatales o de particulares²⁸.

Ahora bien, como ya se había mencionado la Corte²⁹ también ha reconocido que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos

²⁴ Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 142.

²⁵ Corte IDH. *Caso Las Palmeras Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de febrero de 2000, Serie C No. 67, párr. 32.

²⁶ Corte IDH. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua.* Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 51; *Caso Furlán y familiares Vs. Argentina.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 300; *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 245.

²⁷ Corte IDH, *Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 113.

²⁸ Corte IDH, *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 116.

²⁹ *Ibídem.*, párr. 113-114.

violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre individuos. Pues lo ha referido tanto en ejercicio de sus funciones contenciosa³⁰ y consultiva³¹, así como al haber ordenado medidas provisionales para proteger a miembros de grupos o comunidades de actos y amenazas causados por agentes estatales y por terceros particulares³².

Específicamente ha indicado que puede generarse responsabilidad internacional del Estado por atribución a éste de actos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares cuando aquél incumple, por acción u omisión de sus agentes que se encuentren en posición de garantes, sus obligaciones de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales, contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención³³. Lo cual implica valorar si el Estado ha adoptado las medidas necesarias y efectivas de prevención y protección ante el conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y las posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo³⁴.

Al respecto Víctor Abramovich se ha referido a una *Teoría de responsabilidad del Estado por actos de terceros*, la cual expone se puede determinar de tres maneras: i) la *doctrina de la complicidad*, la cual refiere a la aquiescencia del Estado al ejecutarse los actos y por tanto, le atribuye responsabilidad objetiva al Estado como si la acción del particular hubiese sido ejecutada por un agente estatal de manera directa; ii) la *doctrina*

³⁰ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 112; *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 211; *Caso Tibi. Vs. Ecuador*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 108; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, Óp. Cit., párr. 91; *Caso 19 Comerciantes vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 183; *Caso Maritza Urrutia*, Óp. Cit., párr. 71; *Caso Bulacio Vs. Argentina*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 111; *Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras*, Óp. Cit., párr. 81.

³¹ Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-18/03*, Óp. Cit., párr. 140.

³² Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 112; *Asunto de las Penitenciarias de Mendoza*. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2005; *Caso del Pueblo Indígena Sarayaku*. Medidas Provisionales. Resolución de 6 de julio de 2004; *Asunto de la Comunidad Kankuamo*. Medidas Provisionales. Resolución de 5 de julio de 2004; *Asunto de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó*. Medidas Provisionales. Resolución de 6 de marzo de 2003. Serie E No. 4, párr. 169; *Asunto de la Comunidad de Paz de San José Apartadó*. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2002. Serie E No. 4, párr. 141; *Asunto de la Cárcel de Urso Branco*. Medidas Provisionales. Resolución de 18 de junio de 2002. Serie E No. 4, párr. 53.

³³ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 111; *Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 113.

³⁴ Corte IDH. *Caso Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 123; *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 78; *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 224.

del riesgo, la cual desarrolla la idea del deber estatal de debida diligencia para la protección de los derechos frente a ciertas situaciones de riesgo para su ejercicio, que apunta a una responsabilidad estatal indirecta por incumplimiento del deber de garantía, debido a que incluye la obligación específica de previsión y protección frente a actos de particulares, y iii) una teoría intermedia para aquellos casos en que, si bien no es posible afirmar que agentes públicos han sido cómplices de un acto violatorio de derechos humanos, la participación del Estado no se limita a un incumplimiento de deberes de protección e incluye acciones públicas, normas, prácticas o políticas que han creado objetivamente la situación de riesgo³⁵.

La doctrina del riesgo sería la que más se acerca a la situación en particular, pues no se ha demostrado que el reclutamiento de menores realizado por las FARC se haya efectuado con complicidad del Estado o que haya creado una situación, práctica o política para propiciar el mismo. Teniendo entonces que determinar si el Estado cumplió o no con la debida diligencia. No obstante, antes de ello es importante hacer una interpretación más amplia de la CADH para dar un mayor contenido y alcance a las obligaciones establecidas.

A. La interpretación de lo consagrado en la CADH

En diversos casos la Corte ha expresado la naturaleza especial de algunos tratados internacionales y su mecanismo de implementación colectiva³⁶, que conllevan la necesidad de aplicar e interpretar sus disposiciones, de acuerdo con su objeto y fin, asegurando que los Estados Partes garanticen su cumplimiento y sus efectos propios *-effet utile-* en el plano de sus respectivos derechos internos³⁷. Este principio se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con

³⁵ ABRAMOVICH, V. “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, *Doctrina Corte IDH*, Buenos Aires, marzo 6 de 2013 - JA 2013-I, fascículo n. 10, págs. 9-10.

³⁶ Corte IDH., *Caso Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador. Excepciones Preliminares*. Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, párr. 69; *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá.*, Competencia, Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, párr. 99; *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, párr. 83.

³⁷ Corte IDH., *Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.*, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 101; *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 220; *Caso Hermanas Serrano Cruz. Excepciones Preliminares. Óp. Cit.*, párr. 69; *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago, Óp. Cit.*, párr. 83.

las normas procesales³⁸. Así lo pone de manifiesto en el Caso Mapiripán³⁹, en el cual señala que al momento de interpretar la CADH siempre debe elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado, según el principio de la norma más favorable al ser humano – *Pro homine*-⁴⁰.

En el caso de la CADH, ésta hace expresa referencia a las normas del Derecho Internacional general para su interpretación y aplicación desde su preámbulo, el cual se refiere expresamente a los principios reafirmados y desarrollados en instrumentos internacionales, "tanto de ámbito universal como regional" (párr. 3) y en su artículo 29 que obliga a interpretarla en atención a la Declaración Americana "y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

Por el reclutamiento forzado desarrollarse en un contexto de conflicto armado, entraremos a exponer las diferentes acepciones sobre la complementariedad del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos y así dar un mayor alcance a la protección de los derechos de niños.

a. Complementariedad del DIH y los DDHH

En los diferentes casos Colombianos en los que la Corte IDH ha analizado hechos bajo el contexto del conflicto armado, ha determinado que las obligaciones del Estado se deben analizar contemplando tanto en el DIDH como en el DIH, pues ambos cuerpos jurídicos son complementarios y sirven para hacer un análisis más amplio de las obligaciones del Estado respecto a las posibles vulneraciones en medio del conflicto.

Se puede decir que tal complementariedad se debe a que ambas normativas se basan en los principios del respeto por la vida, el bienestar y la dignidad humana de la persona⁴¹.

³⁸ Corte IDH., *Caso Hermanas Serrano Cruz vs El Salvador*, *Excepciones Preliminares*, *Óp. Cit.*, párr. 69; *Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay*, *Excepciones Preliminares*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 205; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, *Óp. Cit.*, párrs. 150 a 151. Asimismo, ECHR., *Case Klass and others v. Germany*, Judgment of 6 September 1978, Series A no. 28, p. 34; Permanent Court of Arbitration, *Dutch Portuguese Boundaries on the Island of Timor* (Arbitral Award of 25 June 1914), *The American Journal of International Law*, vol. 9, 1915, pp. 250 and 266.

³⁹ Corte IDH., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 105.

⁴⁰ Corte IDH., *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 181; *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica*, *Excepciones Preliminares*, Fondo, Reparaciones y Costas., Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 184; *Caso Baena Ricardo y otros. Vs. Panamá*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.

⁴¹ TPIY. *Causa Prosecutor v. Anto Furundžija*, Causa N° IT-95-17/1-T, fallo de 10 de diciembre de 1998, párr. 183. La Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia hizo hincapié en que el principio general del respeto por la dignidad humana era la "base fundamental" de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. CIDH., *Caso Juan Carlos Abella c. la Argentina*, caso 11.137, Informe N° 55/97, 18 de noviembre de 1997, nota 19. Estableció: que su autoridad para aplicar el derecho internacional humanitario podría derivarse de la superposición entre las normas de la CADH y las de los Convenios de Ginebra. La Comisión señaló que "las disposiciones del artículo 3

Al examinar el Caso de las Masacres de Mapiripán, la Corte señaló que al momento de determinar la responsabilidad internacional del Estado en casos de desarrollo de un conflicto armado interno, no puede obviar la existencia de deberes generales y especiales de protección de la población civil a cargo del Estado, derivados del DIH, en particular del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y las normas del Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados de carácter no internacional (Protocolo II). El respeto debido a las personas protegidas [...] implica obligaciones positivas de impedir que terceros perpetren violaciones contra dichas personas. La observancia de dichas obligaciones resulta de relevancia en un caso donde hay una situación de evidente desprotección de civiles en un conflicto armado de carácter no internacional⁴².

La Corte IDH a su vez ha citado a la Corte Constitucional de Colombia, quien también desarrolla e interpreta las obligaciones de los Convenios de Ginebra cual ha considerado que:

[e]l artículo 4º del [Protocolo II] no sólo ordena una protección general a los no combatientes sino que, en desarrollo al artículo 3º común a los Convenios de Ginebra de 1949, consagra una serie de prohibiciones absolutas, que pueden ser consideradas el núcleo esencial de las garantías brindadas por el derecho internacional humanitario. [...] ⁴³.

Así lo ha seguido manteniendo el Tribunal⁴⁴, al considerar útil y apropiado interpretar el alcance de las normas de las obligaciones convencionales en forma complementaria con la normativa del DIH, cuando los hechos ocurren en el contexto de un conflicto armado interno y se evidencian afectaciones interrelacionadas a diversos derechos impidiendo un análisis fragmentado, habida consideración de su especificidad en la materia.

El Estado Colombiano por su parte, en el Caso Las Palmera, también fue claro al manifestar la importancia que tiene el principio del consentimiento en el derecho internacional, recalcando que sin el consentimiento del Estado, la Corte no podría aplicar normas frente a las cuales no le ha otorgado competencia, específicamente se refirió a los Convenios de Ginebra. El Estado sostuvo, que ni el artículo 25 ni el artículo 27.1 de la

común son, de hecho, normas puras sobre derechos humanos [...] Básicamente, el artículo 3 requiere que el Estado haga, en gran medida, lo que ya está obligado a hacer legalmente en el marco de la Convención Americana”.

⁴² Corte IDH, *Caso de la Masacre de Mapiripán Vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 114.

⁴³ Corte Constitucional Colombiana. *Sentencia C-225/95*, de 18 de mayo de 1995, párrs. 35 y 30.

⁴⁴ Corte IDH., *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148, párr. 179; *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.*, *Óp. Cit.*, párr. 187; *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 221.

CADH pueden ser interpretados como normas que autorizan a la Corte IDH a aplicar los Convenios de Ginebra. En este sentido insistió en la distinción entre “interpretación” y “aplicación”, estableciendo que la Corte podría interpretar los Convenios de Ginebra al igual que otros tratados internacionales, pero sólo podría **aplicar** la CADH, pues fue sobre esta última que ha dado consentimiento y por tanto ha atribuido competencia a la Corte para determinar su responsabilidad⁴⁵.

De allí que la Corte también le dedicó un apartado en el Caso Mapiripán a desarrollar la interpretación de la CADH basándose en el artículo 29 de la misma, estableciendo: las obligaciones derivadas de dicha normativa internacional (DIH) deben ser tomadas en cuenta, según lo dispuesto en el artículo 29.b) de la Convención, pues quienes se hallan protegidos por el régimen de dicho instrumento no pierden por ello los derechos o facultades que ya tengan conforme a la legislación del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentran, sino se **complementan o integran para precisar su alcance o determinar su contenido**. Siempre haciendo la aclaración que la atribución de responsabilidad internacional bajo las normas de DIH no puede ser declarada, como tal, por ese Tribunal⁴⁶, sino que dichas normas son útiles para la interpretación de la Convención⁴⁷. Otro elemento importante que destacó es que las normas deben **estar vigentes** para Estado al momento de la ocurrencia de los hechos, como normativa internacional de la que el Estado es parte. En el caso particular de Colombia, recordó que conforme a lo que ha indicado la Corte Constitucional en Sentencia C-225/95, tal normativa hace parte del “bloque de constitucionalidad” y por tanto, son obligatorias para el Estado y para todos los actores armados, estatales o no estatales, que participen en un conflicto armado⁴⁸ (Subrayado fuera de texto).

Finalmente, la Corte considera que además de estipular la complementariedad entre dichas normas; determina que los actos cometidos por particulares vinculados con conductas activas y omisivas de funcionarios estatales, genera la atribución de responsabilidad debido al incumplimiento de sus obligaciones convencionales *erga omnes* de asegurar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones inter-individuales⁴⁹.

⁴⁵ Corte IDH, *Caso Las Palmeras. Vs. Colombia*, Excepciones Preliminares, *Óp. Cit.*, párrs. 30 y 33.

⁴⁶ Corte IDH. *Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Excepciones Preliminares, *Óp. Cit.*, párr. 108; *Caso Las Palmeras vs Colombia*. Excepciones Preliminares. *Óp. Cit.*, párr. 33.

⁴⁷ Corte IDH. *Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Excepciones Preliminares, *Óp. Cit.*, párr. 119; *Caso Las Palmeras vs Colombia*. Excepciones Preliminares. *Óp. Cit.*, párrs. 32 a 34; *Caso Bámaca Velásquez. Vs. Guatemala.*, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 208 a 209.

⁴⁸ Corte IDH, *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 115.

⁴⁹ *Ibidem.*, párr. 123.

No obstante, no ha sido únicamente la Corte IDH quién ha establecido la complementariedad de los dos cuerpos normativos, pues diversos órganos de Naciones Unidas asimismo lo han referido y así ha sido consignado en un documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos del 2011, que desarrolla y establece la *Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*⁵⁰, y el cual tomaremos como base para mencionar los diferentes pronunciamiento de los diferentes Órganos, como por ejemplo: El Comité de Derechos Humanos, en sus Observaciones generales N° 29 (2001) y N° 31 (2004), recordó que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se aplicaba también en situaciones de conflicto armado en que eran de aplicación las normas del derecho internacional humanitario⁵¹. El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 9/9, reconoció además que las normativas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eran complementarios y se reforzaban mutuamente.

Por su parte, la Alta Comisionada ha recordado que, a lo largo de los años, la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y, ahora, el Consejo de Derechos Humanos han manifestado que en las situaciones de conflicto armado, las partes en el conflicto tienen obligaciones jurídicamente vinculantes en relación con los derechos de las personas afectadas por el conflicto⁵². El Consejo reconoció que la normativa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario eran complementarios y se reforzaban mutuamente⁵³

Los órganos de tratados, también contribuyen a este desarrollo de la teoría de la complementariedad de derecho internacional de los derechos humanos y el DIH, lo cual se refleja en los informes de los procedimientos especiales de derechos humanos, así como las declaraciones, los principios rectores y otros instrumentos legales no vinculantes que contribuyen a aclarar, materializar y establecer principios directivos sobre normas y criterios mínimos de derechos humanos, incluso si no contienen obligaciones

⁵⁰ ONU. HR/PUB/11/01., *Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2011.

⁵¹ ONU. Comité de Derechos Humanos. *Observación general N° 29*, sobre los estados de excepción, (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001 durante la 1950ª reunión.), párr. 3; *Observación general N° 31*, sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004 durante la 2187ª sesión. párr. 11.

⁵² ONU. HR/PUB/11/01. *Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, *Óp. Cit.*, pág. 8.

⁵³ ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/11/31, *Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General*. Resultados de la consulta de expertos sobre la cuestión de la protección de los derechos humanos de la población civil en los conflictos armados, 4 de junio de 2009, párr. 5.

jurídicamente vinculantes *per se*, de no ser las que constituyen normas en los usos internacionales⁵⁴.

Por ejemplo, en los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas del derecho internacional de los derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados en la Resolución 60/147 de 2005 la Asamblea General reconoció que el alcance de la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario comprende el deber de “investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial y, en su caso, adoptar medidas contra los presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional” (párr. 3 b). La Asamblea General reconoció además esta obligación dimanada además de los tratados ratificados por el Estado del **derecho consuetudinario** señalando que los Principios y directrices básicos “no entrañan nuevas obligaciones jurídicas internacionales o nacionales, sino que indican mecanismos, modalidades, procedimientos y métodos para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas existentes conforme a las normas internacionales de derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que son complementarios, aunque diferentes en su contenido”(preámbulo).

La jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, reconocida por su Estatuto como medio subsidiario para determinar las normas de derecho, se refiere cada vez más a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos en situaciones de conflicto armado⁵⁵. Estas decisiones han proporcionado aclaraciones adicionales sobre cuestiones como la aplicación continua del derecho internacional de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado. Este mismo Tribunal refiere que en la relación entre el DIH y las normas internacionales de derechos humanos, pueden presentarse tres situaciones posibles: “algunos derechos pueden estar contemplados exclusivamente en el DIH, otros pueden estarlo exclusivamente en el DIDH y otros en ambas ramas del DI⁵⁶.

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja también ha determinado la existencia de ciertas “garantías fundamentales” y observado que existen instrumentos

⁵⁴ ONU. *HR/PUB/11/01. Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, Óp. Cit., pág. 10.

⁵⁵ ICJ., Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 1996; Advisory Opinion, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Reports 2004; Judgment Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Reports 2005.

⁵⁶ ONU. *HR/PUB/11/01. Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, Óp. Cit., pág.12.

jurídicos, documentos y jurisprudencia de derechos humanos que amplían, refuerzan y aclaran algunos principios análogos del derecho internacional humanitario⁵⁷.

Al respecto del contenido de las obligaciones en ambos cuerpos normativos, la diversidad de los órganos vinculados a las Naciones Unidas también coinciden en que las obligaciones de los Estados en ambos cuerpos normativos son: de respetar y proteger los derechos humanos y garantizar su cumplimiento. Entendiendo por la obligación de respetar que los Estados deben abstenerse de interferir o de menoscabar el disfrute de los derechos humanos; la obligación de proteger exige que los Estados protejan a los individuos y los grupos contra las violaciones de los derechos humanos, como parte de la obligación de proteger, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, y garantizar medidas de reparación para las víctimas; y la obligación de garantizar el cumplimiento significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos.

Los Estados tienen la obligación de hacer algo (obligaciones positivas) o de abstenerse de hacer algo (obligaciones negativas), pueden ser responsables de una violación del DIDH o del DIH mediante acción, omisión o acción inadecuada. Y en el DIH, los Estados tienen la obligación explícita de respetar y hacer respetar.

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha recordado que “las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los derechos del Pacto solo se cumplirán plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no solo contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas o entidades privadas”⁵⁸. De conformidad con la obligación de tomar precauciones contra los efectos de los ataques del enemigo, deben incluso tomar medidas, en la mayor medida posible, para proteger a su propia población civil, entre otras cosas, procurando mantener los objetivos militares y a los combatientes alejados de las zonas densamente pobladas⁵⁹. El Consejo de Seguridad ha instado a grupos armados estatales y no estatales a que respeten el DIH y las obligaciones internacionales de derechos humanos, al mismo tiempo que les exige adoptar todas las medidas posibles para asegurar la protección de los civiles⁶⁰.

⁵⁷ *Ibíd.*, ver nota 84.

⁵⁸ ONU. Comité de Derechos Humanos. *Observación general N° 31*, *Óp. Cit.*, párr. 8.

⁵⁹ ONU. *HR/PUB/11/01. Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, *Óp. Cit.*, pág.19.

⁶⁰ ONU. S/RES/1894 (2009), Resolución 1894. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6216ª sesión, celebrada el 11 de noviembre de 2009.

Al mismo tiempo se ha observado que determinadas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario constituyen a su vez delitos en virtud del derecho penal internacional, por consiguiente se puede dar un mayor alcance con otros cuerpos normativos, como el Estatuto de Roma de la CPI. Pues el derecho penal internacional y la justicia penal internacional sobre crímenes de guerra aplican el derecho internacional humanitario, pero también aclaran y desarrollan sus normas.

Después de verificar la complementariedad de las normas de DIH y DDHH para la interpretación y alcance de las obligaciones de Estado Colombiano, entraremos a analizar cómo se ha efectuado el reclutamiento forzado de menores por las FARC y las vulneraciones que esto implica.

II. EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES POR LAS FARC

Como vimos anteriormente, la responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares, en principio no atribuibles al Estado, por las obligaciones *erga omnes* de hacer respetar las normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona⁶¹.

En razón a este planteamiento se mostrará cómo se ha desarrollado el reclutamiento forzado de menores por las FARC para posteriormente entrar a determinar los diferentes derechos de la CADH afectados por ese acto sistemático; elementos que ayudarán a determinar si conforme a la obligación del Estado de hacer respetar y garantizar los derechos consagrados en la CADH se puede dar una responsabilidad internacional del Estado Colombiano.

El reclutamiento forzado de menores es una práctica prohibida por el derecho internacional, y diversos instrumentos ratificados por Colombia así lo señalan: el apartado 4.3.c del II Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional -en vigor para Colombia desde 1996- contempla que, los niños menores de 15 años no deben ser reclutados ni en las fuerzas o grupos armado y no se permitirá su participación en las hostilidades; el Estatuto de Roma⁶² en su apartado 8. 2. e. vii., establece como crimen de guerra el reclutar

⁶¹ Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-18/03, Óp. Cit.*, párr. 140.

⁶² Si bien Colombia hizo uso de la cláusula de inhibirse de que lo investiguen por crímenes de guerra los primeros 7 años de vigencia de este tratado, la obligación proveniente del preámbulo del mismo, este es, que los crímenes más graves no queden impunes.

o alistar niños menores de 15 años⁶³ en las fuerzas armadas o grupos o utilizarlos para participar activamente en hostilidades; por su parte, el artículo 4.1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados –entrado en vigor en Junio de 2005- se reitera que los grupos distintos a las fuerzas armadas del Estado no deben bajo ninguna circunstancia reclutar o utilizar en hostilidades a los menores de 18 años.

Estas disposiciones prohíben que los menores sean reclutados para participar en los conflictos armados en ningún grupo armado, sea estatal o no; pero las mismas han sido incumplidas continuamente por los Grupos Organizados al Margen de la Ley, especialmente las FARC, alegando que su calidad de grupo insurgente no los obliga. Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la Corte Constitucional Colombiana, en su sentencia C-225 de 1995⁶⁴ si les son exigibles:

La obligatoriedad del DIH es de todas las partes del conflicto, y no únicamente a las fuerzas armadas estatales. Considerando que no es legítimo que un actor considere que no tiene que respetar las normas mínimas de humanidad en el conflicto por no haber suscrito ellos los Convenios internacionales, puesto que la fuerza normativa del DIH se deriva de la universal aceptación de su contenido por los pueblos civilizados, y de la evidencia de los valores de humanidad que estos instrumentos recogen. Todos los actores armados están entonces obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las peores situaciones de conflicto armado.

En concordancia con lo anteriormente señalado, se mostrará como las FARC desde sus inicios, con sus actos y políticas ha cometido infracciones al DIH, a las que por ser uno de los actores del conflicto se encuentra obligado, pero también ha vulnerado los DDHH de la población, los cuales se encuentran protegidos en el ordenamiento interno colombiano en concordancia con las disposiciones del DI, específicamente con el reclutamiento forzado de menores.

Para poder comprender las implicaciones de este fenómeno del reclutamiento es importante conocer la estructura y manera de operar que este grupo guerrillero. Las FARC-EP, están compuestas por dos tipos de estructuras: milicias bolivarianas y milicias populares. Las bolivarianas alternan el uniforme militar con el atuendo civil y reciben entrenamiento militar, mientras que los miembros de las milicias populares visten de civil, suelen vivir en su casa, y participan en actividades civiles mientras reúnen inteligencia, cometen sabotajes, asesinatos y secuestros, recaudan “impuestos”, obtienen suministros

⁶³ El Estado Colombiano presentó una reserva ampliando la protección de 15 a 18 años. En efecto, invocó la prevalencia del derecho interno, que señala la prohibición de reclutar menores de 18 años.

⁶⁴ Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-225 de 1995, *Op. Cit.*

y reclutan. Según el informe de Human Rights Watch⁶⁵, las milicias populares se componían por personas cuya edad o estado físico, les impide la participación directa militar con el enemigo. Por ejemplo, los ancianos, niños, etc.

La estructura de mando es centralizada, cuya máxima autoridad, el Secretariado General, dicta su política y sus actuaciones, y está integrada por seis miembros y con un líder que desde su creación en 1966, y por muchos años, fue Manuel Marulanda alias “Tirofijo”.

1. El reclutamiento a lo largo de los años

En la Séptima Conferencia Nacional de guerrilleros de 1982 se ratificó lo establecido en el reglamento oficial de las FARC-EP, que señala “el ingreso a las FARC-EP es personal, voluntario y consciente **entre los 15 y 30 años**”. Disposición que ha generado discusiones, en razón a que si bien es conforme a algunos instrumentos internacionales que ponen como límite los 15 años, a nivel interno esta protección es más amplia de acuerdo con el concepto de “niño” de la CDN, esta es, todo menor de 18 años; y por tanto, se alega dar la protección más amplia y garantista al menor concibiendo la prohibición de la reclutamiento y participación de los menores hasta los 18 años. No obstante, se demostrará que las FARC incluso efectuaron reclutamientos a menores de 15 años incumpliendo así todo tipo de regulación.

Una de las políticas en la cual se demuestra que uno de los objetivos de este grupo guerrillero era involucrar a los niños en el conflicto, se creó en 1989, y la cual está dirigida a vincular, a como dé lugar, a los menores ejerciendo una presión ideológica desde una temprana edad, recurriendo a colaboradores “externos” como profesores y adoctrinamiento de sus padres. La política se denominó “Guía para el Trabajo de los Clubes Infantiles Bolivarianos”, como técnica del reclutamiento, una estrategia a través de la cual las FARC pretendían generar, en los niños desde los 5 hasta los 12 años, un estilo de pensamiento en beneficio de la organización criminal, como “Pioneros”, afectando el libre desarrollo de la personalidad de estos pequeños.



⁶⁵ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”: Niños Combatientes en Colombia. 17 de septiembre de 2003. pág. 18.

Entre los objetivos del proceso de entrenamiento que reciben los menores reclutados se encuentra la generación de estructuras de pensamiento con ideologías marxista y leninista; con una visión parcial de la realidad colombiana, y que la razón de las armas era: “la lucha del pueblo contra la oligarquía, contra las fuerzas armadas y el imperialismo yanqui”⁶⁶.

Paralelamente, durante el desarrollo del conflicto, por ser tan evidente el reclutamiento de menores, se genera una preocupación a nivel internacional que conllevo a tener acercamientos con estos grupos armados para que no siguieran efectuando estos actos. De allí, que en 1999 las FARC-EP se comprometieron públicamente a poner fin al reclutamiento de los menores de 15 años, cuando la Representante Especial del Secretario General de la ONU sobre el asunto de los niños y el conflicto armado, se reunió con Raúl Reyes, miembro del Secretariado General de las FARC-EP. No obstante, en junio de 2000, el Comandante Carlos Antonio Lozada en la entrevista con Human Rights Watch señaló que: en 1996, las FARC-EP habían marcado la edad mínima de reclutamiento en 15 años, pero que “hasta hace poco, esta norma no se ha aplicado”, y que a partir de abril de 2000, por declaraciones de Briceño, se había convertido en una “norma de obligatorio cumplimiento” y sería respetada en el futuro⁶⁷. Ninguna de las declaraciones fue cumplida por este grupo guerrillero durante el conflicto.

En 1999, el Presidente de Colombia Andrés Pastrana inició conversaciones formales con la guerrilla con el fin de negociar la paz. Conversaciones que tuvieron lugar en una zona especial conocida como “zona de distensión” o “zona de despeje” con una extensión de más de 35.000 kilómetros cuadrados, que englobaba a cuatro municipalidades del departamento de Meta, y el municipio de San Vicente de Caguán, en el departamento de Caquetá; la cual fue cedida completamente al control de la guerrilla.

Como se señala en el texto de Fajardo, se dieron una serie de abusos en esta zona de despeje, en concordancia con lo revelado en el libro “Juguetes de Guerra” del Centro de Análisis Sociopolíticos, en el cual se incluyen testimonios que aseguran que la guerrilla reunía a personas entre 13 a 60 años obligándole a elegir irse o quedarse, claro está, que el quedarse implicaba incorporarse a la guerrilla ya fueran informantes o militantes⁶⁸.

Desde la zona de despeje, medio millar de insurgentes había sido enviado al norte del país, para recuperar el terreno perdido en el Catatumbo a manos de los paramilitares

⁶⁶ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las Farc en Colombia*, Ed Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 2014., pág. 40, 41 y 128.

⁶⁷ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”, *Óp. Cit.*, págs. 24 y 25.

⁶⁸ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas...* *Óp. Cit.*, pág. 114-117.

y simultáneamente golpear al Ejército. Teniendo conocimiento de ello, se lleva a cabo la Operación Berlín, gestada por las Fuerzas Militares de Colombia en contra de la columna Arturo Ruíz de las FARC. Operación que generó un gran impacto, pues al terminar los enfrentamientos se rescatan 57 menores y se establece que 23 mueren en combate, lo que reveló la alta proporción de menores reclutados, alarmando a las autoridades y atrayendo la atención de diferentes agencias humanitarias sobre el problema de los niños combatientes en Colombia, realizando Informes que se describirán a continuación.

La Defensoría del Pueblo de Colombia desarrollo el programa “Sistema de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos Humanos de la Niñez en Colombia” en cooperación con UNICEF con el cual realizo investigaciones de campo para a verificar el grado de realización de los derechos humanos de los NNA vinculados con los GAOML que participan del conflicto armado interno y emite en 2002 un informe denominado “La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano”⁶⁹. Del cual se resalta que, los niños entrevistados provenían de un total de 43 frentes de grupos guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (81%), al Ejército de Liberación Nacional (16%), al Ejército Popular de Liberación (2%) y al Ejército Revolucionario del Pueblo (1%), que las edades de vinculación en general oscilan entre los 7 y los 17 años, con un promedio de edad de ingreso de 13.8 años. De los cuales el 61% se encontraban entre los 7 y los 14 años en el momento de su vinculación y de los cuales el 20% ingresó antes de los 12 años.

Human Rights Watch en su informe de 2003, intentando hacer un cálculo aproximado del número de niños combatientes, con base las entrevistas de los menores y otras fuentes considero que, las cifras varían, desde un mínimo del 10 por ciento hasta un máximo de la mitad según cada unidad de las fuerzas guerrilleras, pero que en general su fuerza regular estimada supone alrededor de 4.125 niños combatientes, y añadiéndoles los de las milicias urbanas, el número total de niños combatientes alistados a esa fecha en las FARC-EP podía superar los 7.400⁷⁰.

Por su parte, la oficina del ACNUDH en Colombia desde 1998 ha anunciado su preocupación por el reclutamiento forzado de menores por las guerrillas, hecho que siguió observando y denunciando hasta el año 2015, pues en los diferentes informes anuales⁷¹

⁶⁹ Defensoría del Pueblo Colombia. *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano*. Informe 2002, pág. 7.

⁷⁰ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”, *Óp. Cit.*, pág. 18 y 19.

⁷¹ ONU, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición Situación de los derechos humanos en Colombia 2013. A/HRC/25/19/Add.3, 24 de enero de 2014, pág. 10; Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2008, A/HRC/10/032, 19 de febrero de 2009, pág. 11-12 y 33., Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2006., A/HRC/4/48 5 de marzo de 2007, pág. 18, Informe

señaló que las FARC-EP continúa rechazando estar obligados a respetar el DIH y por tanto, sigue cometiendo graves infracciones: como el reclutar niños y niñas para labores de inteligencia y apoyo logístico, así como involucrándolos en hostilidades en varios departamentos, entre ellos Antioquia, Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca, con un aumentos en años 2012-2013.

De acuerdo con la información del Grupo de Atención Humanitaria del Desmovilizado (GAHD) en el 2012 las FARC fue la organización que más generó reclutamiento forzado⁷².

En el informe de “Como corderos entre lobos” de 2012⁷³, se señaló que el 69% de los reclutados son menores de 15 años, y que se reclutan niños y niñas desde los ocho años. Respecto a cuantos niños pueden estar vinculados a estos grupos armados en ese momento, se concluyó que aproximadamente cuatro de cada diez combatientes de las FARC actualmente son niños, niñas o adolescentes, es decir, el 42% del pie de fuerza en combate.

El Informe de Watchlist⁷⁴ refiere que pesar de que no había estadísticas oficiales fidedignas sobre el número de niños soldado en Colombia, se estima que oscilan entre 5.000 y 14.000 niños; sin embargo, estas cifras no reflejaban los numerosos casos de familias que han tuvieron que dejar sus hogares por amenazas de reclutamiento. Que entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de abril de 2011, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de Colombia reportó 158 casos de riesgo de reclutamientos forzados de niños en 178 municipios en 20 departamentos, de los cuales 127 casos fueron atribuidos a las FARC; y que la edad promedio de reclutamiento ha disminuido desde 13.8 años en el 2002 hasta 11.8 años en el 2009.

Los anuncios de prensa se ven apoyados por el estudio de Natalia Springer, pues en ese informe se manifiesta que revisaron las bases de datos de 10.732 desmovilizados adultos pertenecientes al ELN, las FARC y las AUC, y se comparó la edad avalada por la Registraduría General del Estado Civil con el tiempo de militancia al interior del grupo armado, y se determinó que el 50,14% de los combatientes adultos en las FARC ingresó a las filas de este grupo armado siendo niño⁷⁵.

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia 1999., E/CN.4/2000/11, 9 de marzo de 2000, pág. 21.

⁷² FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas...* Óp. Cit., pág. 110.

⁷³ *Ibidem.*, párr. 77.

⁷⁴ WATCHLIST. *nadie en quien confiar. Los niños y el conflicto armado en Colombia*, abril de 2012, pág.16.

⁷⁵ SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia*. Springer Consulting Services, Bogotá, 2012. párr. 72.

En el 2014, la Defensoría del Pueblo⁷⁶ registró para solo ese año un total de **119 casos de niños, niñas y adolescentes que fueron víctimas de reclutamiento ilícito**, perpetrados por grupos armados al margen de la ley. Determinando a su vez que entre la población vulnerable los niños pertenecientes a los grupos étnicos son de los más afectados por el reclutamiento; así quedó evidenciado a través de dos informes defensoriales: **“Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: análisis de la política pública con enfoque étnico”⁷⁷** y **“Reclutamiento ilícito en Buenaventura: caracterización de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes e indígenas, víctimas de reclutamiento ilícito”⁷⁸**, los cuales ofrecen una visión de la vulneración de esta población en el marco del conflicto armado.

En el 2012 que se inician las conversaciones para los acuerdo de paz, si bien las FARC manifestaron iban a restringir algunas prácticas más crueles hasta el año 2015 hay evidencias del reclutamiento forzado de menores por este grupo guerrillero.

En el informe anual 2016⁷⁹ de Unicef Colombia, de acuerdo con el tercer informe específico sobre Colombia en materia de niñez y conflicto armado del Secretario General de Naciones Unidas de 2016, se manifiesta que entre septiembre de 2011 y junio de 2016, se registró un total de 1.556 casos de reclutamiento y utilización de niños en 29 departamentos del país.



Fuente: UNICEF Informe anual 2016.

2. ¿Por qué los reclutan?

Según Springer⁸⁰, la mano de obra infantil y adolescente es fundamental en el cumplimiento de cada objetivo y actividad estratégica de los grupos armados ilegales. Pues los NNA aparecen en la primera línea de combate; soportan mejor los rigores de las largas caminatas, el esfuerzo físico intenso, del desgaste de huir y la mala alimentación

⁷⁶ Defensoría del Pueblo de Colombia., *Cada mes 10 niños, niñas y adolescentes son reclutados por los grupos armados ilegales*. 15 de diciembre de 2014.

⁷⁷ DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA., *Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico*., Informe Defensorial. Bogotá, 2014.

⁷⁸ DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. *Reclutamiento ilícito en Buenaventura: caracterización de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes e indígenas, víctimas de reclutamiento ilícito*. Informe Defensorial., Bogotá, marzo 2014.

⁷⁹ UNICEF, *Informe anual 2016*., pág. 10.

⁸⁰ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. Óp. Cit., párrs. 6, 82, 83, 98, 99 y 105.

que reciben; tienen mejor alcance visual, mejores reflejos, se enferman con menos frecuencia y representan la base más amplia de la mano de obra en la economía ilegal. Haciendo del reclutamiento de NNA una violación masiva, intencional y desproporcionada parte de una política deliberada de estas organizaciones para el cumplimiento de sus propósitos estratégicos.

A su vez se menciona que, a partir del éxito de algunas operaciones de las Fuerzas Armadas que consiguieron infiltrar los círculos de la jerarquía máxima de los grupos armados ilegales, se pudo determinar que el reclutamiento de niños y niñas se considera una opción segura, para evadir los controles de seguridad y el transporte de información y bienes, por cuanto se sabe que las Fuerzas Armadas no pueden usar niños y niñas para infiltrarlos y entre más jóvenes, son menos sospechosos.

Asimismo, se toma el reclutamiento de menores como política dirigida contra los más vulnerables, sacando ventaja de su condición de pobreza aumentando la responsabilidad de sus reclutadores.

3. ¿Cómo los reclutan?⁸¹

Según los relatos de los menores el proceso de vinculación es gradual, metódico y selectivo, debido a que el 71% de los niños y niñas reporta haber realizado tareas para el grupo armado antes de vincularse como combatiente, pues los grupos armados ilegales, no son percibidos como fuerzas oscuras, que amenazan el orden y la convivencia de la comunidad, sino como miembros habituales de la cotidianidad. Adicional a ello, las comunidades de apoyo a donde se dirigen están situadas en zonas periféricas, relativamente aisladas, caracterizadas por un bajo nivel educativo, altos niveles de pobreza y desinstitucionalización.

Se reportó que los niños y las niñas son contactados a través de sus familias (39%), los buscan directamente (33%) o se los lleva un familiar vinculado al grupo armado (9%), lo que significa que 81% son aproximados por personas conocidas que operan como autoridad de facto en las regiones. Sin embargo, algunos menores (el 8%) reportaron haberse vinculado con el fin de ‘cobrar una venganza’ o porque consideraba el ingreso a un grupo armado ilegal como la mejor opción laboral disponible; finalmente, se encontró que algunos NNA son sustraídos de sus familias como un “impuesto de guerra” que se impone en las comunidades a las que someten bajo la dictadura del miedo, con el fin de convertirlas en cómplices y obligarlas a guardar silencio.

⁸¹ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos.*, Óp. Cit., párrs. 4, 108-114.

Es importante resaltar que en ningún caso en el reclutamiento media la voluntad de los NNA, ya que si bien algunos se vincularon por su decisión, después de ingresar y vivir el horror de la guerra no podían retirarse; y por tanto, buscaban la primera oportunidad para escaparse, aprovechando un cambio o movilización cerca de una zona urbana. Además esa vinculación, es un acto de fuerza, facilitado por la vulnerabilidad social y económica de los afectados, que, de ninguna manera, tendría lugar sin la existencia de un conflicto armado, cuya violencia produce dinámicas que perturban todos los derechos y las libertades de las comunidades sometidas y arrastra consigo, especialmente, a los más vulnerables.

La Oficina del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados también considera que el reclutamiento voluntario no existe, ya que, incluso en el caso de que los niños se sumen “voluntariamente”, se trata de un desesperado intento por sobrevivir y que en última instancia, la decisión de reclutar a niños corresponde a comandantes adultos, quienes tendrán que rendir cuentas de sus actos⁸².

Por otra parte, el reclutamiento es una función específica en la distribución de los rangos de los grupos armados ilegales. Los reclutadores reciben incentivos por cada recluta y por aumentar y mantener bajo control las bases de apoyo que se distribuyen en su zona de operación. Por ello, es que según lo considere el reclutador se aumenta el nivel de responsabilidad en las tareas impuestas a los menores: se les ordena hacer mandados, bajar remesas, llevar razones y hacer llamadas. Con el tiempo, adquieren más responsabilidades que se concentran en el manejo y transporte de minas y explosivos, el ensamblaje e instalación de minas antipersona, labores de inteligencia, logística, milicia y transporte de víveres y alimentos. Los alumnos más “sobresalientes”, se convirtieron más tarde en entrenadores y reclutadores profesionales⁸³.

4. Lo que viven los menores dentro de las FARC

Las FARC-EP a los NNA les asignan las mismas tareas y castigos que a los adultos. Son espías, cocineros, portadores, mensajeros o esclavos sexuales⁸⁴; les imponen cavar trincheras o letrinas, despejar el bosque, cortar y llevar leña; si pierden el arma, pueden ser obligados a entrar en combate sin ella hasta que puedan recuperar otra del enemigo. Las violaciones graves a los reglamentos se tratan en consejo de guerra, en el

⁸² Oficina del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados. Disponible en: <https://childrenandarmedconflict.un.org/es/efectos-del-conflicto/causas-fundamentales-del-reclutamiento-de-ninos/>

⁸³ SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos*. Óp. Cit., párrs. 114 y 116.

⁸⁴ *Ibíd.* párrs. 6.

que se presentan los cargos y se puede dictar una sentencia a muerte por alzamiento de manos; se dispara contra los niños que desertan, los sospechosos de informar al enemigo, los infiltrados, o los que se quedan dormidos durante la guardia⁸⁵.

Después de reclutados, los niños solo tienen unos cuantos días, como mucho, para adaptarse antes de que empiece el entrenamiento. Una vez admitidos, se les entrega habitualmente un uniforme y equipo, se les atribuye un nombre de guerra y, a veces, se les asigna un mentor para que los supervise, algunos menores manifestaron que tuvieron que jurar su lealtad a la guerrilla⁸⁶.

En el informe de Human Rights Watch, casi todos los niños comentan que una de las partes más duras de la vida guerrillera son las largas marchas, cuando los guerrilleros trasladan su campamento y tienen que caminar a veces durante varios días y noches con escasa o ninguna comida. Ellos tenían que cargar todo su equipo, incluidas las caletas y los utensilios de cocina, a hombros, así como de su rifle de asalto y munición; que tenían que hacer guardia durante largas horas, combatiendo el sueño pues si los descubrían durmiendo podrían ser fusilados. También comentaron que una vez admitidos en la guerrilla, el contacto con su familia es casi nulo, apenas ven a sus padres, hermanos o familiares cercanos, y muchas veces no les dan permiso para visitarlos, si no que les dicen que mejor los olviden⁸⁷.

En sus zonas de habitación, los niños y niñas padecen restricción en el ingreso de alimentos, están expuestos a los combates permanentes, las bombas, las minas antipersona, los atentados, las amenazas, los secuestros, la extorsión y a la destrucción de sus escuelas, de los centros de salud y de la infraestructura asistencial y de servicios básica⁸⁸.

De acuerdo con la Defensoría, en su investigación el 35% de los entrevistados manifestó haberse sentido obligado a realizar actividades que no deseaba, dentro de las cuales identificaron las siguientes: el entrenamiento militar, oficios varios, combatir-matar. El 55% desertó del grupo. Las principales razones para hacerlo se encuentran relacionadas con el desacuerdo con las labores que realiza la guerrilla, seguida por la imposibilidad de ver a su familia y el incumplimiento al reglamento⁸⁹.

Frente a la ejecución de la sentencia el comandante elige al azar a un grupo para que se encargue de ella, a la mayoría se seleccionan porque la víctima era su amigo. El

⁸⁵ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”, *Óp. Cit.*, pág. 7.

⁸⁶ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR” *Óp. Cit.*, pág. 37.

⁸⁷ *Ibidem.* pág. 38.

⁸⁸ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. *Óp. Cit.*, párr. 41.

⁸⁹ Defensoría del Pueblo Colombia. *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano*. *Óp. Cit.*, pág. 10 y 11.

niño, con las manos atadas con una cuerda de nylon, es llevado fuera del perímetro del campamento donde tiene que esperar a que caven su tumba. Es posible que después de la ejecución, normalmente por disparo de revólver, se destripe el cuerpo antes de enterrarlo. Rara vez se notifica a la familia del niño ejecutado⁹⁰.

El 98% de los niños y niñas desvinculados reportan haber sido maltratados permanentemente, forzados a presenciar atrocidades o a ejecutarlas con particular sevicia como parte del entrenamiento, y el 76% experimentó o presenció ‘castigos ejemplares’ que erradicaron, por la vía del terror, cualquier voluntad de escapar, disentir o resistirse al proceso al que estaban siendo sometidos⁹¹.

Algunos niños manifestaron que habían echado mucho de menos su casa y pasado graves depresiones, especialmente los que no se había incorporado voluntariamente. La compasión fue escasa en dichos casos. Los niños podían ser castigados por el simple hecho de no poder salir de una depresión⁹².

En el proceso de desvinculación y reintegración la mayoría de NNA reportan muy serios problemas de salud mental, expresados en cambios negativos en el comportamiento, síntomas que afectan su calidad de vida y crean incertidumbre sobre sus posibilidades de reintegrarse plenamente, tales como: trastornos del sueño, consumo de por lo menos una sustancia psicoactiva, ansiedad, cansancio crónico, llanto efusivo, entumecimiento emocional, episodios de ira incontrolable, visiones, pensamiento irracional recurrente, episodios psicóticos, pensamiento suicida, entre otros⁹³.

Estos actos reflejan la crueldad con la que se trataba a los menores de edad, quienes pierden toda inocencia, pues solo se les proporciona violencia. Todos los derechos fundamentales de los niños se ven violentados, sin conciencia alguna del daño que se causa a la sociedad.

Por ello se ha considerado que el reclutamiento de NNA se trata de un crimen colectivo, en el marco de una política explícita de las organizaciones ilegales, orientada a consolidar el pie de fuerza y la mano de obra que les permita mantener el control sobre territorios y recursos estratégicos, y a su vez de una práctica que compromete múltiples violaciones graves a los derechos humanos, ejecutada de manera sistemática y consumada con la clara intención de someter a una población especialmente vulnerable⁹⁴.

⁹⁰ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR” *Óp. Cit.*, pág. 7.

⁹¹ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. *Óp. Cit.*, párr. 129.

⁹² HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR” *Óp. Cit.*, pág. 39.

⁹³ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. *Óp. Cit.*, párr. 150.

⁹⁴ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. *Óp. Cit.*, párrs. 120 y 121

5. Vulneraciones a los Derechos Humanos por el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC

Desde 1978 la CADH hace parte integrante de la normatividad colombiana y por tanto, debe ser respetada por todas las personas de su jurisdicción. En el presente apartado se analizarán las vulneraciones a los Derechos Humanos que se genera con el reclutamiento forzado por parte de este grupo guerrillero, conforme al criterio de interpretación desarrollado en el SIDH del DIH, así como de los diferentes instrumentos internacionales de DDHH acordes con ordenamiento interno de Colombia.

A. Vulneración al derecho a la vida

La Corte ha sido enfática al establecer que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos⁹⁵, el cual al no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo⁹⁶. Asimismo, de conformidad con el artículo 27.2 de la Convención este derecho forma parte del núcleo inderogable que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de los Estados Partes⁹⁷. Por tanto, debe ser respetado por todas las personas en todo momento.

La utilización de niños y adolescentes en conflictos armados pone a los menores en situaciones de alto peligro para su vida e integridad, pues hace que los mismos deban: usar armas de alto calibre, coloquen explosivos, asesinar a otros niños; participen en secuestros de personas, en vigilancias, tareas de inteligencia; se someten a los riesgos propios del combate, a abusos sexuales, al maltrato. Paralelamente se les involucra en una cultura de violencia y se les cercena su derecho a la educación y a una inserción normal en la sociedad⁹⁸.

Por el constante riesgo de muerte que sufren los menores que se ven involucrados en el conflicto armado se hace evidente la vulneración al derecho a la vida de los menores que son reclutados por los grupos armados ilegales, en este caso, las FARC.

⁹⁵ Corte IDH., *Caso Baldeón García Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, párr. 82; *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146, párr. 150; y *Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 120.

⁹⁶ Corte IDH. *Caso Baldeón García Vs. Perú*, *Óp. Cit.*, párr. 82; *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay*, *Óp. Cit.*, párr. 150; y *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala.*, párr. 144. En el mismo sentido, ECHR., *Case Nachova and others v. Bulgaria* [GC], *Applications* nos. 43577/98 and 43579/98., Judgment of 6 July 2005, párr. 94.

⁹⁷ Corte IDH. *Caso Ituango vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 128; *Caso Baldeón García vs Perú*, *Óp. Cit.*, párr. 82; y *Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 119.

⁹⁸ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR” *Óp. Cit.*, pág. 47.

B. Vulneración al derecho a la integridad personal

Respecto de este derecho la Corte IDH, ha manifestado en el Caso Santo Domingo⁹⁹ que la infracción a la integridad personal, física y psíquica, “es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”¹⁰⁰. Además, ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la CADH, cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con el derecho a la integridad personal¹⁰¹. Y que crear una situación amenazante o amenazar a un individuo con torturarlo puede constituir, en algunas circunstancias, al menos, tratamiento inhumano¹⁰².

El Tribunal a su vez reitera que reviste de especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niñas y niños¹⁰³, quienes tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Como se demostró anteriormente los niños reclutados muchas veces se vieron enfrentados a maltratos y castigos durante su permanencia en las FARC, además de falta de alimentación, obligarlos a caminar enfermos, privarlos de ver a sus familias entre otras cosas, las cuales son una evidente vulneración a la integridad personal de estos menores por parte de las FARC.

A su vez, en el Caso de Santo Domingo, la Corte refiere que los actos u atrocidades presenciadas por una persona, y en especial los niños, generan efectos como: a) pensamientos recurrentes de los hechos; recuerdos perturbadores que se aparecen espontáneamente; b) reacción de ansiedad extrema a esos pensamientos y recuerdos; c) pesadillas y otros sueños que evocan los hechos; d) reacciones espontáneas físicas y emocionales ante elementos de la vida cotidiana que se asocian con los hechos, reacciones tales como taquicardia, sudor, miedo intenso al ruido de un helicóptero o avión, o de un

⁹⁹ Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 191-192.

¹⁰⁰ Corte IDH., *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú*. Fondo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 57; y *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*, Óp. Cit., párr. 147.

¹⁰¹ Corte IDH., *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala*. Fondo, párr. 165, y *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela*, párr. 82.

¹⁰² Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 255; *Caso Baldeón García vs Perú*, Óp. Cit., párr. 119; *Caso Tibi vs Ecuador*, Óp. Cit., párr. 147; y *Caso 19 Comerciantes vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 149. Véase también: ECHR., *Case Campbell and Cosans v. The United Kingdom*, Application no. 7511/76; 7743/76, Judgment of 25 February 1982, Series A, No. 48, párr. 12.

¹⁰³ Corte IDH., *Opinión Consultiva OC-17/02*, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17. Véase también: artículo 1 de la Convención sobre los Derechos de los Niños de 20 de noviembre de 1989, entrada en vigor el 2 de septiembre de 1990 y ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991.

tiroteo; e) tristeza y sentimientos de dolor al evocar los hechos; f) insomnio, y g) percepción del daño como irreparable, impotencia, sentimiento que la vida ha cambiado su curso, percepción de futuro incierto y angustioso. Los cuales son muestras evidentes de la vulneración a la integridad personal¹⁰⁴.

Muchas de estos síntomas son padecidos por los niños víctimas del reclutamiento forzado, como lo señalaron las diferentes investigaciones de la Defensoría del Pueblo, de UNICEF, así como según lo revela el ICBF en su Programa de atención a los desvinculados, lo cual también genera un afectación directa a su integridad personal.

C. Vulneración a la prohibición de la esclavitud y servidumbre

Como se ha referido en el Convenio No 182 de la OIT se ha considerado el reclutamiento forzado como una de las peores formas de trabajo infantil; a su vez, el artículo 6.2 de la CADH dispone que “nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. [...]”. Conforme a las interpretaciones de la Corte IDH en relación con el artículo 2.1 del Convenio No 49 la definición de trabajo forzoso u obligatorio, consta de dos elementos básicos: en primer lugar, el trabajo o el servicio se exige “bajo amenaza de una pena”; en segundo lugar, estos se llevan a cabo de forma involuntaria. Respecto a la “amenaza de una pena”, esta puede consistir en la presencia real y actual de una intimidación, que puede asumir formas y graduaciones heterogéneas, de las cuales las más extremas son aquellas que implican coacción, violencia física, aislamiento o confinación, así como la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares. Y la “falta de voluntad para realizar el trabajo o servicio” consiste en la ausencia de consentimiento o de libre elección en el momento del comienzo o continuación de la situación de trabajo forzoso. Esta puede darse por distintas causas, tales como la privación ilegal de libertad, el engaño o la coacción psicológica¹⁰⁵.

Por todo lo anterior, y conociendo las circunstancias en las que se efectúa el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC, esté en sí mismo es una vulneración a la prohibición de la esclavitud y servidumbre conforme al ordenamiento interno de Colombia al imponer un trabajo forzado a NNA.

D. Vulneración al derecho a la libertad personal

El artículo 7 de la Convención es muy concreto al determinar: 1. “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”, y 2. Nadie puede ser privado de

¹⁰⁴ Corte IDH, *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 242.

¹⁰⁵ Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia*. Óp. Cit., párrs. 158-164.

su libertad física, **salvo** por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. La Corte respecto al mismo ha determinado que este artículo protege exclusivamente el derecho a la libertad física y cubre los comportamientos corporales que presuponen la presencia física del titular del derecho y que se expresan normalmente en el movimiento físico. La seguridad también debe entenderse como la protección contra toda interferencia ilegal o arbitraria de la libertad física¹⁰⁶.

Al estar reclutados y su movilidad estar determinada por el grupo armado ilegal, que no pueden abandonar, los menores sufren una vulneración a su derecho a la libertad personal.

E. Vulneración a los derechos del niño

La Corte IDH ha considerado que revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas, quienes “tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”¹⁰⁷. De allí que el artículo 19 de la CADH debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por su desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial¹⁰⁸.

Las diferentes estadísticas e investigaciones revelan como menores de entre 8 y 17 años eran reclutados por las FARC sufriendo diversidad de vejámenes, y además que desde los 5 años les hostigaban con su política criminal, atentando con ello la protección especial que por su condición requieren los niños.

El reclutamiento forzado y otras formas de utilización de los menores en los grupos armados en medio de un conflicto, es una de las prácticas más atroces y lesivas que se puedan cometer. Pues no solo atenta contra sus derechos fundamentales arriesgando su vida, vulnerando su integridad y libertad, sino que también les limita sus derechos a la educación, a la salud y demás que hacen parte de su proyecto de vida. Una persona que ha sido víctima de la violencia desde su niñez, y su desarrollo ha sido en

¹⁰⁶ Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador*. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 53. ECHR, *Case of Engel and others v. The Netherlands*, Judgment of 8 June 1976, Applications Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72, párr. 57.

¹⁰⁷ Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-17/02, Óp. Cit.*, párr. 54; *Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay, Óp. Cit.*, párr. 147.

¹⁰⁸ Corte IDH, *Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia.*, *Óp. Cit.*, párr. 152. *Caso “Instituto de Reeducción del Menor” Vs. Paraguay, Óp. Cit.*, párr. 147; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri*, párr. 164; *Opinión Consultiva OC-17/02, Óp. Cit.*, párr. 54.

medio de la guerra, tiene dificultad en superar y olvidar las atrocidades vividas y necesita de una atención especializada para lograr superar las afectaciones psíquicas causadas¹⁰⁹.

“Los niños son el futuro de la sociedad” El daño generado por el reclutamiento forzado de menores trasciende el daño del niño, pues incide también en la sociedad. Coincido con Fajardo, al considerar que una marca de violencia y odio toma muchos años en borrarse, además que valores básicos como el respeto por los demás, y por las reglas sociales se desdibuja para ser reemplazado por el poder de las armas y la violencia¹¹⁰.

Por todo lo anteriormente expuesto, se concluye que las FARC con el reclutamiento forzado han vulnerado los derechos a la vida, integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre y libertad personal en relación con los derechos del niño establecidos en la CADH y protegidos por el ordenamiento interno colombiano.

Adicionalmente, respecto a estos derechos la Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades¹¹¹, que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas. En esta línea, ha considerado violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas con motivo del sufrimiento propio que éstos han padecido como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos¹¹².

Por ello las FARC ha continuamente vulnerado no solo los derechos de los menores sino también los de los familiares y en este caso en específico los de la toda la sociedad Colombiana.

III. RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO COLOMBIANO

Teniendo conocimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Colombiano, la interpretación conjunta que se debe hacer de las normas de DIDH y el DIH por ser complementarias, y habiendo establecido en el capítulo anterior las

¹⁰⁹ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas...*, Óp. Cit., pág. 6.

¹¹⁰ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas* Óp. Cit., pág. 7.

¹¹¹ Corte IDH., *Caso de la Masacre Pueblo Bello vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 154; *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163., párr. 137; *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136, párr. 60; *Caso de la “Masacre de Mapiripán”*, Óp. Cit., párrs. 144 y 146; *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*, Óp. Cit., párrs. 113 y 114.

¹¹² Corte IDH., *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 137; *Caso Gómez Palomino*, Óp. Cit., párr. 60; *Caso de la “Masacre de Mapiripán”*, Óp. Cit., párrs. 144 y 146; y *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*, Óp. Cit., párr. 113 y 114.

graves violaciones cometidas por las FARC mediante el reclutamiento forzado, ahora entraremos a analizar qué obligaciones internacionales adquiridas internacionalmente por el Estado han sido cumplidas, frente a cuales el Estado ha establecido medidas que no han sido efectivas y frente a cuales de estas obligaciones no ha actuado. Con este podremos concluir si se da o no un hecho internacionalmente ilícito que conlleve a la responsabilidad internacional del Estado Colombiano.

Como bien se ha establecido con anterioridad, la CADH exige a los Estados Parte el respeto y garantía de todos los derechos y libertades contenidas en ella, así como le impone adoptar disposiciones legislativas y de otros caracteres a nivel interno acorde a estas obligaciones. Dentro de sus disposiciones, el artículo 19 establece que todo niño tiene medidas de especial protección; sin embargo, por ser su contenido tan genérico ha sido interpretada y desarrollada por la Corte IDH, a partir de otros instrumentos jurídicos más específicos por considerarlos parte del *Corpus Iuris*¹¹³ y dar un mayor alcance a su protección, como la CDN y sus protocolos, así como por normas del DIH.

Partiendo de esta protección especial que el Estado debió brindar a los menores dentro de su jurisdicción, es que se entra a analizar la posible responsabilidad del Estado por el reclutamiento forzado en el que se vieron afectados miles de niños colombianos. Es importante aclarar que no se pretende determinar que el Estado tenga una responsabilidad directa por la comisión de los diferentes hechos atroces efectuados por las FARC a lo largo del conflicto armado interno, como el reclutamiento forzado de menores, pues como se ha referido un Estado no puede ser declarado responsable internacionalmente por actos cometidos por un tercero o particular como tal, pero también se ha señalado que puede ser declarado internacionalmente responsable cuando no actuar con la **debida diligencia** respecto a los actos realizados por esos particulares. Por ello, lo que se pretenden analizar es si los órganos y autoridades del Estado han actuado, prevenido o tratado la violación del particular conforme a sus obligaciones internacionales, y así poder determinar la atribución o no de responsabilidad internacional.

Ahora bien, como la responsabilidad del Estado que se pretende analizar es bajo el SIDH, las obligaciones se tomarán conforme a las ha interpretado su órgano

¹¹³ La Corte ha señalado que el *corpus juris* del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bajo sus respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, debe adoptar un criterio adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo. Corte IDH., *Opinión Consultiva OC-18/03, Óp. Cit.*, párr. 115.

jurisdiccional, este es, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según las interpretaciones de los artículos 1.1 y 2 de la CADH, entre estos se encuentran las obligaciones de: respeto, garantía y adecuación. Dentro de la obligación de garantía se desprenden: la prevención y protección; la investigación, juzgamiento y sanción; y la reparación, que para este caso nos referiremos a la reintegración.

Como ya se ha referido no se puede establecer una responsabilidad directa del Estado debido a que el reclutamiento forzado de menores no ha sido ejecutado por agentes del estado si no por Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, en el caso analizado por las FARC. Por ello, se entrará a analizar el cumplimiento el Estado falto a la debida diligencia incumpliendo sus obligaciones de garantía y de adecuación.

Frente a la obligación de garantía la Corte IDH ha establecido:

[...] La obligación de garantizar (artículo 1.1) comprende el deber jurídico de “**prevenir**, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de **investigar** seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponer a los responsables las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada **reparación**”. Lo decisivo es dilucidar “si una determinada violación ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente”¹¹⁴. La obligación de investigar debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad y que este tipo de hechos vuelvan a repetirse¹¹⁵.

En concordancia con lo referido, la obligación de garantía se analizará respecto a cada deber jurídico de manera independiente: la prevención, la investigación y la reparación. Señalando tanto el conocimiento como las actuaciones del Estado, para lo cual se toma como base los diferentes informes de Instituciones nacionales e internacionales que han estudiado los hechos y las correspondientes afectaciones.

1. Prevención y protección

El Estado colombiano ha adquirido por medio de diferentes instrumentos internacionales la obligación de prevenir y proteger de las vulneraciones a los NNA, aún más en el desarrollo de un conflicto armado, exigiéndole tomar las medidas necesarias para evitar, en este caso, su reclutamiento forzado. Por ejemplo, el Estado conforme al artículo 38 de la CDN, se compromete no solo a respetar el DIH por parte de sus agentes, sino también a velar porque los demás actores lo respeten y de manera más concreta, las

¹¹⁴ Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras*. Óp. Cit., párr. 173; *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas*. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237, párr. 47.

¹¹⁵ Corte IDH, *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 156; *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 319; y *Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240. párr. 203.

acciones en las cuales se vean afectados los niños. Todo ello, adoptando todas las medidas posibles para la protección y cuidado de los niños afectados por el conflicto armado.

Por otra parte, el Convenio 182 de la OIT le obliga a adoptar medidas para la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, entre las cuales se incluye el reclutamiento forzoso u obligatorio de los niños para utilizarlos en los conflictos armados. Imponiéndole que estas medidas tengan el carácter de **inmediatas y eficaces**, que los programas de acción sean una medida prioritaria, y además garantizar la aplicación y cumplimiento efectivo de las disposiciones del Convenio incluida la aplicación de sanciones penales correspondientes. Finalmente, le exige identificar a los niños que se encuentren particularmente expuestos a riesgos; teniendo en cuenta la situación particular en cada caso.

A su vez, el artículo 4.2 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos le impone al Estado tomar **todas** las medidas para impedir el reclutamiento, con inclusión específicamente de las medidas legales necesarias para prohibir y tipificar esas prácticas. Y la Resolución 1379 del 20 de noviembre de 2001, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, expresa la determinación que los Estados deben brindar a los niños en los conflictos armados la máxima atención¹¹⁶.

La misma Constitución Política de Colombia en su artículo 44 señala que los derechos de los niños son de aplicación inmediata y no progresiva o programática. Al mismo tiempo dispone que la responsabilidad de su protección está en cabeza de la familia, de la sociedad y del Estado y les otorga prevalencia sobre los derechos de los demás.

En cuanto a la especial gravedad que revisten los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niños y niñas, la Corte IDH ya se ha pronunciado, específicamente en los casos colombianos¹¹⁷, señalando:

El contenido y alcances de esta disposición se deben precisar tomando en consideración las disposiciones pertinentes de la Convención sobre los Derechos del Niño¹¹⁸, en particular de sus artículos 6, 37, 38 y 39, y del Protocolo II a los Convenios de Ginebra, ya que estos instrumentos y la Convención Americana forman parte de un muy comprensivo *corpus juris* internacional de protección de los niños que los Estados deben respetar¹¹⁹. Aunado a lo anterior, en aplicación del artículo 29 de la CADH, es

¹¹⁶ ONU. S/RES/1379 (2001), Resolución 1379. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4423a sesión, celebrada el 20 de noviembre de 2001.

¹¹⁷ Corte IDH., *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 238; *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 153.

¹¹⁸ Ratificada por Colombia el 28 de enero de 1991 y que entró en vigor el 27 de febrero de 1991.

¹¹⁹ Corte IDH., *Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay*, Óp. Cit., párr. 148; *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Vs. Perú*, Óp. Cit., párr. 166; *Caso de "los Niños de la Calle." vs Guatemala*, Óp. Cit., párr. 194; *Opinión Consultiva OC-17/02*, Óp. Cit., párr. 24.

considerable lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Colombia¹²⁰.

Al respecto, cita a la Corte Constitucional de Colombia, quien ha determinado:

El numeral 3° del artículo 4° del [Protocolo II] confiere un tratamiento privilegiado a los niños, con el fin de darles el cuidado y la ayuda que éstos necesitan, sobre todo en relación con la educación y la unidad familiar. Igualmente se señala que los menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades. La Corte considera que esa protección especial a los niños se armoniza plenamente con la Constitución, puesto que no sólo ellos se encuentran en situación de debilidad manifiesta (CP art. 13) frente a los conflictos armados sino que, además, la Carta confiere prevalencia a los derechos de los niños (CP art. 44) [...] ¹²¹.

La especial vulnerabilidad por su condición de niños y niñas se hace aún más evidente en una situación de conflicto armado interno, como en el presente caso, pues son los menos preparados para adaptarse o responder a dicha situación y, tristemente, quienes padecen sus excesos de forma desmesurada¹²².

La misma Corte resalta que no ha sido la única que ha manifestado esto pues en Mapiripán¹²³ citó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos quien ha sostenido “la población infantil colombiana padece con mayor rigor las consecuencias del conflicto armado interno”¹²⁴. Al Comité de los Derechos del Niño de la ONU que ha manifestado su preocupación debido a que “los efectos directos del conflicto armado en Colombia tienen consecuencias negativas muy importantes en el desarrollo de los niños y obstaculizan grandemente el ejercicio de muchos de los derechos de la mayoría de éstos en el Estado Parte”¹²⁵. Finalmente, al Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados quien ha considerado que los niños y las niñas que han sido expuestos

¹²⁰ Artículo 44 de la Constitución Política de la República de Colombia: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”.

¹²¹ Corte Constitucional Colombiana., Sentencia C-225/95, *Óp. Cit.*, párr. 37.

¹²² Corte IDH, *Caso Operación Génesis Vs. Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 327; *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 239; *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 246; y *Caso de la “Masacre de Mapiripán”*, *Óp. Cit.*, párr. 156.

¹²³ Corte IDH., *Caso de la “Masacre de Mapiripán”*, *Óp. Cit.*, párr. 157.

¹²⁴ ONU. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2001/15. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 20 de marzo de 2001.

¹²⁵ ONU. Comité de los Derechos del Niño. *Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia.*, CRC/C/15/Add.137, 16 de octubre de 2000, 25° periodo de sesiones. párr. 10.

a “violencia y matanzas, desplazamiento, violación o la pérdida de seres queridos llevan consigo las cicatrices del miedo y el odio”¹²⁶.

Al conocer de su vulnerabilidad, la Corte es clara al establecer que la obligación del Estado de respetar el derecho a la vida en el caso de los niños y niñas, se transforma en una obligación de “prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u omisión, a la afectación de aquél”¹²⁷. La violencia afecta el derecho a una vida digna de los niños y las niñas. En consecuencia, la Corte considera que cuando el Estado no crea las condiciones, ni toma las medidas necesarias para que los niños y las niñas tengan y desarrollen una vida digna, sino más bien se les expone a un clima de violencia e inseguridad. Esta desprotección genera una violación del artículo 19 en conexión de con los artículos 4.1, 5.1 y 1.1 de la CADH¹²⁸.

Con base a ello, el Tribunal ya ha determinado que el Estado incumplió con su deber de protección especial de las niñas y niños afectados, al no cumplir con su obligación especial de protegerles en el marco de un conflicto armado no internacional. Considerándolo responsable por la violación a los derechos a la integridad personal de los niños y niñas, en relación con los artículos 1.1 y 19 de la CADH¹²⁹.

Bajo esta misma línea, la Corte IDH en los casos como Mapiripán¹³⁰ y Operación Génesis¹³¹ ha determinado que el Estado tenía pleno conocimiento de que la región donde ocurrieron los hechos se caracterizaba por altos grados de violencia dentro del marco del conflicto armado interno, y a pesar de ello omitió proteger a la población, particularmente a sus niños y niñas. De lo cual se infiere que por tanto, en todas las zonas donde el Estado tenía conocimiento que se efectuaba el reclutamiento forzado tenía la obligación de proteger a los menores, hecho que no se efectuó, lo que lo puede conllevar a su responsabilidad internacional.

Sin embargo, para determinar la debida diligencia del Estado respecto a la prevención del reclutamiento forzado de menores y establecer el incumplimiento del DIH y los DDHH por parte de las FARC, se hace necesario analizar los datos sobre el contexto en que se desarrolló este hecho. Según lo ha considerado la Corte IDH, pues el entorno político e histórico es determinante para el establecimiento de las consecuencias jurídicas

¹²⁶ Informe del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados. Doc. de la Asamblea General de Naciones Unidas A/54/430 de 1 de octubre de 1999, párr. 25.

¹²⁷ Corte IDH., *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, Óp. Cit., párrs. 124 y 171; y *Caso Bulacio Vs. Argentina*, Óp. Cit., párr. 138.

¹²⁸ Corte IDH., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 162 y 16.

¹²⁹ Corte IDH., *Caso Operación Génesis Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 331.

¹³⁰ Corte IDH., *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 159.

¹³¹ Corte IDH., *Caso Operación Génesis Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 331.

en el caso¹³². Se señalará entonces el Estado sobre qué hechos tenía conocimiento, respecto a los cuales debió tomar las medidas de prevención conforme a sus obligaciones.

A. Causas del Reclutamiento

Según la investigación de Springer¹³³, se repiten una serie de factores en los cuales se ven afectados los NNA que son reclutados por estos grupos guerrilleros. La primera es la violencia en las regiones en las que habitan, lo que convierte el reclutamiento en una estrategia de supervivencia para muchos jóvenes y en una obligación para sus familias. En estos lugares suele haber una relación entre conflicto y zonas de explotación de recursos, regalías, desarrollo económico, pues los menores manifestaron que en las zonas en las que vivían antes del reclutamiento había presencia de cultivos ilícitos (79%), venta ilegal de gasolina (44%), comercio de drogas (43%) y, en todos los casos, presencia de uno o más grupos armados ilegales.

El segundo factor es un patrón migratorio previo al reclutamiento, pues los niños han cambiado de municipio en más de 4 oportunidades en compañía de su familia y evadiendo las presiones económicas y sociales, o de violencia. Finalmente, la mayoría, de NNA víctimas del reclutamiento son de origen rural y sus padres son campesinos, provienen de familias de composición atípica y hacen parte de la fracción más pobre de la población colombiana. Y en departamentos como Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Choco, Caquetá, Guaviare y Putumayo, el reclutamiento de NNA sigue un patrón concluyente y es que el 29% son indígenas.

Si bien ese informe se publica en el año 2012, estas causas ya habían sido determinadas en el 2002 según lo dispuesto por la Defensoría del Pueblo de Colombia en el informe *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano*¹³⁴ en cual señala:

1. Los niños y niñas colombianos han tenido que convivir con el fenómeno de la violencia y la presencia de grupos armados. En algunos casos sus únicos referentes de país, justicia social y mejoramiento de la calidad de vida han sido los grupos armados, lo cual ha facilitado procesos de identificación positiva a ellos y a sus medios bélicos y coercitivos.
2. El 57% de los menores entrevistados trabajaba antes de vincularse al grupo y el 30% de estos lo hacía en el raspado y procesamiento de la hoja de coca, actividad de alto riesgo físico y social. Otro 35.21% de los adolescentes que trabajaba realizaba labores propias del campo: recoger cosechas y otras labores de finca.
3. No están presentes en la mayoría de las zonas rurales del país alternativas como: la educación, la capacitación para el trabajo, el trabajo digno y bien remunerado para

¹³² Corte IDH., *Caso Masacre de la Rochela vs Colombia.*, Óp. Cit., párr. 76; *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160. párr. 202; y *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, párrs. 53, 54 y 63.

¹³³ SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos.* Óp. Cit., párr. 39, 43, 46, 54, 55, 91,

¹³⁴ Defensoría Pueblo de Colombia, *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano*, Óp. Cit., págs. 12, 16-18.

adolescentes mayores de 14 años, espacios para el adecuado aprovechamiento del tiempo libre, el ejercicio de la participación y construcción de la ciudadanía, entre otras; predomina el trabajo mal remunerado como única alternativa, en condiciones irregulares o ilícitas, como en el caso de los raspachines. La vinculación "voluntaria" de niños y adolescentes se constituye, prácticamente, en una opción única.

4. Los altos niveles de pobreza, desempleo, desigualdad e injusticia social en las zonas rurales permite que la vida en los grupos al margen de la ley aparezca como un proyecto de vida acorde con la dinámica local.

Dicho informe contó con las cifras del Departamento Nacional de Estadística, del mes de septiembre de 2000, las cuales arrojaron que el 59.8% de la población infantil tenía necesidades básicas insatisfechas, es decir, vive por debajo de la línea de pobreza y, el 9%, está en condición de miseria, lo cual genera como consecuencia el menoscabo de las condiciones de vida de la niñez y de sus familias, situación que agrava aún más la crisis de derechos humanos por la que atraviesa la infancia. Y a su vez conlleva a que por tratarse del grupo poblacional más vulnerable, es candidato óptimo para convertirse en víctima del reclutamiento forzado u obligatorio de los grupos alzados en armas que participan del conflicto armado interno colombiano¹³⁵.

Por otra parte, en ese mismo estudio al preguntar a los menores ¿Cuál fue la motivación para ingresar al grupo armado? Se encontraron varias causas, entre esas familiares, pero sobre todo marcadas por la violencia, veamos¹³⁶:

- *"Mi papá es guerrillero"*, joven de 15 años.
- *"Yo estaba aburrida por el maltrato que me daban en mi casa"*, joven de 16 años.
- *"Pensé que la vida con ellos era bonita, y yo tenía problemas con mi mamá y en la escuela"*, joven de 17 años.
- *"Tuve problemas con los paracos, así que para mí era mejor entrar a la guerrilla"*, joven de 16 años.
- *"Sentía que mi familia y amigos se estaban alejando de mí, me sentía solo"*, joven de 16 años.
- *"Quería saber quién había matado a mi hermano y a mi tío"*, joven de 16 años.
- *"Desde pequeño, para uno un tiroteo es normal, cuando matan a alguien es común y corriente"*, joven de 16 años.
- *"A mí me gustaba la guerrilla porque yo veía que ellos eran admirados por la gente"*, joven de 16 años.

Entre las justificaciones de la guerrilla de reclutar menores, estos han indicado que son los propios niños quienes suelen suplicar insistentemente que les permitan alistarse, o sus madres les llevan a la guerrilla desesperadas porque no pueden alimentarlos. Lo cual evidencia que este problema de falta de satisfacción en las necesidades básicas es una causa importante para la participación de los menores en el conflicto, pues así mismo lo relata un menor, Peter, del departamento de Chocó, que se unió al Frente "Aurelio Rodríguez" de las FARC-EP cuando tenía siete años:

¹³⁵ *Ibidem.*, pág. 22.

¹³⁶ *Ibidem.*, pág. 9.

Nunca conocí a mi padre dicen que lo mataron, vi poco a mi mamá también. No tenía comida para mí. Vivía en la calle, en hogares. Tenía un tío que vivía en la vereda y había un grupo de las FARC que iba a su casa. No era de las FARC, era un campesino, hablaba con todos pero no estaba metido con ningún grupo. Y allá conocí la guerrilla. Uno se mete allá porque la mayoría de la gente allá es pobre, no tiene el estado económico para estar con la mamá de uno, yo no tenía como para vivir con mi mamá, no podía, pues, porque aguantaba mucha hambre, yo pensé que faltando yo en mi casa tal vez mi mamá y mis hermanos, como eran menos, iban a comer mejor¹³⁷.

Al respecto ACNUR¹³⁸ manifestó: Los países con más desigualdad o aquellos en los que el Estado es incapaz de garantizar la prestación de servicios básicos son más propensos a sufrir el reclutamiento. Al no existir políticas educativas sólidas ni programas de protección, las opciones de supervivencia de los niños y los jóvenes que crecen en estos contextos se limitan considerablemente.

Por tanto, es fundamental aceptar que una de las causas de esta situación es la débil o nula presencia del Estado en las zonas marginales donde las FARC poseen control militar, social, económico y político. Este descuido se evidencia en el escaso acceso a la educación, los malos servicios de salud, las precarias condiciones de vida de los pobladores pues carecen de vivienda digna, y servicios básicos como el agua potable, electricidad, y no hay políticas de desarrollo rural y comunitario¹³⁹.

B. Conocimiento del riesgo por parte del Estado

La oficina ACNUDH en Colombia desde 1998¹⁴⁰ ha anunciado su preocupación por el reclutamiento forzado de menores por las guerrillas, indicando muchas veces los departamentos o municipios con más riesgo, al igual que lo hizo la Defensoría en su informe de 2002.

Adicionalmente, en 2012 se determinó que se reclutaban activamente en 22 de los 32 departamentos del país, que 15 de los 22 departamentos presentaban una evolución especialmente desfavorable; y por tanto, se clasificaron como departamentos en situación de alto riesgo. Se identificaron un total de 123 municipios en situación de alto riesgo, 108 en situación de riesgo, 59 municipios altamente vulnerables y 106 vulnerables para un total de 231 municipios en riesgo y 165 vulnerables. Se aseguró también que todas las fronteras continentales constituían zonas de alto riesgo¹⁴¹. Véase el gráfico.

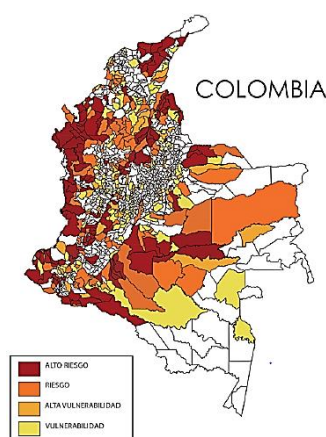
¹³⁷ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”, *Óp. Cit.*, págs. 24 y 30.

¹³⁸ ACNUR. *Pobreza infantil y reclutamiento forzado*. Comité Español. Derechos y valores. Disponible en: <https://eacnur.org/blog/pobreza-infantil-reclutamiento-forzado/>

¹³⁹ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas*, *Óp. Cit.*, pág. 33.

¹⁴⁰ ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/25/19/Add.3, *Óp. Cit.*, pág. 10; A/HRC/10/032, *Óp. Cit.* pág. 11-12 y 33; A/HRC/4/48, *Óp. Cit.* pág. 18; E/CN.4/2000/11, *Óp. Cit.*, pág. 21.

¹⁴¹ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. *Óp. Cit.*, párr. 104, 105, 109.



Tomado de: SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos*.

La vulnerabilidad anteriormente mencionada se debe a las características económicas, sociales y geográficas de estos municipios, situación que hace tendiente un futuro riesgo; asimismo se determinó que la misma variaría según el progreso de los siguientes factores¹⁴²:

- **Económico:** equidad en la distribución de los recursos; porcentaje de necesidades básicas insatisfechas; indicadores de desarrollo del municipio; regalías; cobertura de servicios públicos; desempleo, entre otros.
- **Social:** presencia de grupos armados ilegales, mafias, bandas criminales; movilidad humana y flujos de desplazamiento; restricción de las libertades públicas; militarización de zonas; registro de casos de reclutamiento; reporte de presencia de campos minados, entre otros.
- **Político:** gobernabilidad y presencia institucional; mecanismos de protección de derechos y ejercicio de los deberes; micro dinámicas regionales y fronteras; inestabilidad política, entre otros.
- **Ambiental y Geográfica:** degradación ambiental; presencia de cultivos ilícitos; explotación legal/ilegal de madera; explotación legal/ilegal de minerales; corredores o zonas de influencia estratégica; afectación por causa del fenómeno de la niña, entre otros.

La Defensoría después de analizar las causas y riesgos en su informe realiza una serie de recomendaciones al Estado entre ellas: primero, que debe reconocer la magnitud de los problemas y dar prioridad a las políticas públicas en beneficio de la infancia desde los planes de desarrollo local, en los diferentes municipios del país afectados por el conflicto armado -con especial énfasis en las zonas rurales-, hasta afectar las políticas nacionales relacionadas, que involucren en todo caso la protección de los derechos de los niños por parte de la familia, la sociedad y el Estado; y segundo, que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Justicia en su calidad de entidad rectora de la política criminal, debe coordinar con la Fiscalía General de la Nación y la rama judicial todas las gestiones necesarias para que el delito de reclutamiento ilícito de menores de edad consagrado en el artículo 162 del Código Penal sea combatido eficaz y eficientemente y sus autores sean sancionados conforme a la ley. E informar permanentemente a la comunidad nacional e

¹⁴² SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos*. Óp. Cit., párr. 232-137

internacional sobre los resultados de los procedimientos judiciales adelantados en contra de los autores de tales conductas¹⁴³.

En razón a ello, teniendo conocimiento de los lugares más afectados por la violencia y donde se han realizado continuamente el reclutamiento forzado de menores, el Estado en cumplimiento de sus obligaciones debió tomar todas las medidas posibles para evitar se siguiera efectuando este fenómeno y proteger a los menores. Los artículos de prensa también nos ayudarán a demostrar que el Estado contaba con información del riesgo del reclutamiento a partir de la cual debió tomar medidas.

Para la Defensoría resulta alarmante que 10 niños, niñas y adolescentes sean reclutados ilegalmente cada mes, teniendo en cuenta que la cifra puede ser más alta debido a que la mayoría de estos hechos son perpetrados en zonas rurales, donde las víctimas no tienen oportunidad ni garantía de acceso a la justicia ni a las autoridades de investigación para poder denunciar estos actos.

Según los reportes del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, los departamentos más afectados por esta problemática son: Cauca, Arauca, Antioquia y Huila, donde se han identificado casos aberrantes en los cuales se utiliza a niños y niñas desde los 8 años de edad, lo cual resulta una grave violación a los DDHH y al DIH. A través del SAT, durante 2014, la Defensoría del Pueblo emitió 16 informes de riesgo y 17 notas de seguimiento, para 18 departamentos, en los cuales se advierte la ocurrencia del fenómeno del reclutamiento forzado de menores de 18 años. Estas cifras se suman a los 55 informes de riesgo y 36 notas de seguimiento emitidas en 2012 y 2013¹⁴⁴.

Así entonces se demuestra que a través de investigaciones, informes, prensa y entre otros, el Estado tenía conocimiento de las zonas donde se realizaba el reclutamiento forzado de menores y de acuerdo a las características del fenómeno, qué lugares se encontraban en riesgo de seguir efectuándose.

C. Medidas tomadas por el Estado

A continuación se verificará entonces qué medidas legislativas como administrativas y demás carácter ha tomado el Estado Colombiano a lo largo de los años para prevenir y proteger a los menores del reclutamiento forzado.

a. Medidas legislativas

- **Ley N° 12/1991.** Ley que aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño.

¹⁴³ Defensoría del Pueblo Colombia. *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano... Óp. Cit.*, pág. 39-40.

¹⁴⁴ Defensoría del Pueblo de Colombia., *Cada mes 10 niños, niñas.*, Óp. Cit.

- **Ley N° 418/1997**, prorrogada por la **Ley N°548/1999**, en la cual se incluye sanción penal a quien reclute menores al GAOML.
- **Ley N° 599/2000**. Con la cual se expide el Nuevo Código Penal, que incluye en su Título II los delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH, en su artículo 162 contempla el reclutamiento ilícito de menores.
- **Ley 704/2001**. Acoge el Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil.
- **Ley N° 833/2003**. Por medio de la cual se Aprueba el "Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados".
- **Decreto 1547/2005**. Con el cual se promulga el "Convenio 182 sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación".
- **Ley N° 1.098/2006**. Se expide el Código de la Infancia y Adolescencia, en el cual su artículo 41 punto 30 de *Obligaciones del Estado*, señala que el Estado es el contexto institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes y en cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal; y por tanto, deberá protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la ley.
- **Decreto 4690/2007**. Crea la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por Grupos Organizados al Margen de la Ley.
- **Ley N° 1450/2011**. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ‘Prosperidad para Todos’, en el cual, se plantea la priorización de los jóvenes para evitar su vinculación o reincidencia en la delincuencia, así como para fomentar su resocialización, lo cual, dará impulso al logro de los objetivos propuestos en el documento CONPES 3673 y fomentará espacios y prácticas protectoras para niños, niñas y adolescentes en zonas de riesgo de utilización y reclutamiento.
- **Decreto 1649 de 2014**. Modifica la estructura del DAPRE, artículo 26, entrega las funciones del antiguo Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Así mismo, se estipula que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial

b. Otras medidas Planes, Programas e Iniciativas¹⁴⁵

- **Mesas de Prevención del Reclutamiento.** Agencias del Sistema de Naciones Unidas, la cooperación internacional, la Comisión Intersectorial, la ACR, algunas gobernaciones, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y las entidades territoriales, entre otros actores, han participado, apoyado, acompañado y/o facilitado tales mesas. Se realizaron mesas departamentales en Antioquia, Atlántico, Cesar, Chocó, Nariño y Tolima.
- **Auto 251 de 2008:** Obligación del Estado de actuar sobre las causas de reclutamiento forzado de menores, como mecanismos de prevención y evitar la repetición de esa violación a las normas internacionales de los conflictos armados.
- En 2008 Colombia acoge el Mecanismo de Supervisión y Presentación de Informes de la Resolución 1612 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ocupa de seis violaciones de los derechos de los niños, entre ellas, la vinculación de niños, niñas y adolescentes a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados que participen en hostilidades.
- **CONPES N° 3673/2010.** Define la Política de Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley y de Grupos Delictivos Organizados.
- **Presidencia de la República – Programa Presidencial de DDHH y DIH Ministerio del Interior - Dirección de Derechos Humanos:** Avanzan en la formulación e implementación de planes para la protección y prevención de violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad y la conformación de mesas de prevención de violaciones a los DDHH, en el marco de la política de descentralización de DDHH. En algunos de estos planes se han realizado acciones para prevenir el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes.
- **Procuraduría General de la Nación (PGN):** Estableció una serie de protocolos de actuación preventiva dentro de los cuales está: el Protocolo para el Seguimiento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en los Planes de Desarrollo de los Departamentos, Distritos y Municipios, a cargo de la Delegada para Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia.
- **Defensoría del Pueblo:** Desarrolló, con el apoyo de OIM y UNICEF, un ejercicio preliminar de Análisis de Riesgo para la Prevención del Reclutamiento y

¹⁴⁵ USAID., OIM. *Abc sobre la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados*. 2007, pág.24.

utilización de NNA lo cual permitió un balance del marco normativo y un avance en los conceptos relacionados.

- **ICBF, Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional y Departamento Nacional de Planeación (DNP):** Desarrollaron un documento Marco de Políticas Públicas y Lineamientos para la Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia para los municipios con un enfoque de ciclo de vida, de garantía y de restablecimiento de derechos de conformidad con la Ley.
- **Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador 2008-2015:** Comprende un conjunto de acciones o pasos: i) identificar la situación de los niños, niñas y adolescentes; ii) gestionar el restablecimiento urgente de los derechos de aquellos vinculados a las peores formas de trabajo infantil; iii) coordinar y complementar acciones de política pública; iv) fortalecer la escuela; v) registrar la permanencia en los servicios y vi) evaluar de manera constante.
- **Plan Integral de Prevención PIP 20+, Ministerio de Relaciones Exteriores con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Colombia:** Estrategia que tiene el propósito de desarrollar un modelo de gestión integral para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de 29 municipios en especial situación de vulnerabilidad, a través de la prevención del reclutamiento y desplazamiento, y de la generación de iniciativas de desarrollo socio económico.

Lo anterior refleja el Estado ha tomado medidas legislativas, administrativas y demás ordenes, pero las cuales se producen pasado mucho tiempo de efectuarse continuamente este fenómeno y que además no han sido efectivas, pues su objetivo de prevenir y proteger a los menores del reclutamiento forzado, no se vio reflejado debido que las cifras continuaban y en algunos años incrementaron.

Respecto a las medidas a tomar, en los diferentes acercamientos con los menores ya desmovilizados estos en su mayoría manifestaron que la mejor manera de prevenir el reclutamiento de otros niños y niñas es dando a conocer lo dura que es esta experiencia a través de los medios, de talleres de educación y sobre todo generando oportunidades¹⁴⁶.

Evidenciamos entonces como también se le indicó al Estado que las medidas que ha tomado no son suficientes, que su obligación no es tomar medidas de manera formal o infructuosas si no que efectivamente cumplan el objeto para el cual ha sido creadas.

¹⁴⁶ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. Óp. Cit., párr. 148.

A parte de allí, con el Decreto 1569 de 2016 que modifica el Decreto 4690 de 2007, se otorga más funciones a la Comisión Intersectorial y establece:

“Artículo 4.10. Impulsar mecanismos e instrumentos de acceso a la justicia como estrategia de prevención de los delitos relacionados con reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, que conduzca a la efectiva gestión de los casos remitidos, al cumplimiento de las sentencias relacionadas y facilite a la Fiscalía General de la Nación adelantar las acciones en investigación y judicialización que le competen a esta entidad judicial”.

Con ello, la Comisión Intersectorial a través de un periodo de observación, ha identificado que entre 2013 y 2016 las entidades han reportado un total de 85 planes, estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas orientadas a la prevención del reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. De lo cual también se destaca que durante cuatro años en 40 municipios, no se reportó alguna estrategia para la prevención del reclutamiento, la utilización y/o la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en lugares donde se encuentran los niveles más altos de probabilidad de ocurrencia de casos de reclutamiento y utilización, a saber: Concepción (Santander), La Victoria (Amazonas) y Tenza (Boyacá)¹⁴⁷.

Dejando claro que si bien hay una buena voluntad por las diversas entidades estatales para adoptar programas de prevención del reclutamiento, hay que resaltar que en su mayoría son recientes, a pesar de que la problemática sea lleve tantos años; que en lugares de alto riesgo aún no se toman medidas y que a su vez hay una falta de efectividad de las mismas.

2. Recuperación y reintegración.

El artículo 39 de la CDN exige a los Estados promover la recuperación y reintegración de todo niño víctima del conflicto armado a través de todas las medidas que respeten la dignidad del niño. Obligación apoyada por el artículo 7.2 del Convenio 182 de la OIT, el cual establece que el Estado debe prestar la asistencia necesaria para asegurar la rehabilitación e inserción social de los niños. Así como, por los artículos 6.3 y 7.1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos, los cuales consagran el deber del Estado de tomar medidas para que estas personas se desmovilicen o se separen de esta situación y de prestar asistencia para su recuperación, rehabilitación y reintegración social.

¹⁴⁷ Ver Anexo No 5. Respuesta a derecho de petición de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Secretaría Técnica Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.

Los estudios revelan que el éxito de los procesos de resocialización son ambiguos y no siempre optimistas, pues las tasas de recuperación no son absolutas y las secuelas del síndrome de estrés post trauma pueden afectar a estas personas durante toda su vida¹⁴⁸. Lo que hace fundamental que este proceso de reincorporación tomado por el Estado sea especializado, integral y efectivo.

En 1996, las Naciones Unidas publicaron un informe emblemático de la Experta del Secretario General, Graça Machel, sobre las repercusiones de los conflictos armados en los niños, entre cuyas recomendaciones estaba “desarrollar programas de recuperación psicosocial de los niños afectados, su rehabilitación y cuidado. El acceso a esos servicios debe afirmarse como un derecho básico de todos los niños, de acuerdo a la CDN”¹⁴⁹.

En razón a ello, en la Ley 418 de 1997 se dispone que el ICBF será la institución encargada para la atención de los menores víctimas del conflicto y en 1999 con el Decreto 1137 se inicia un plan de atención especializada para los menores desvinculados, los cuales son ubicados en Centros de observación y diagnóstico. Finalmente con la Ley 78 2 de 2002 se crea el Programa de Atención Especializada para la asistencia de todos los casos de menores de edad que hayan tomado parte en las hostilidades o hayan sido víctimas de la violencia política, en el marco del conflicto armado interno.

En 2011 con el Decreto 4138 crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas ahora denominada la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-, la cual se encarga de coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales, que de acuerdo a su competencia, desarrollen actividades o funciones tendientes a facilitar los procesos de reintegración de los menores desvinculados del conflicto, así como acompañar y asesorar a las entidades competentes en la definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento y la desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes menores de edad de grupos armados organizados al margen de la ley.

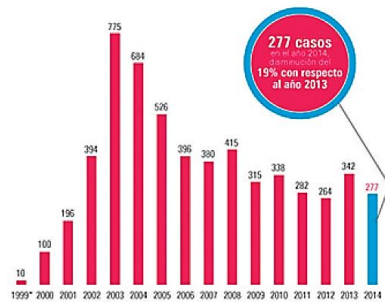
El ICBF como entidad encargada, en sus informes denominados Observatorio del bienestar de la niñez¹⁵⁰ de 2014 y 2016 ha determinado que entre noviembre de 1999 a 2015 han ingresado al Programa 5.923 NNA de los cuales el 70% provienen de las FARC.

¹⁴⁸ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*. Óp. Cit., párr. 132 y 133.

¹⁴⁹ HUMAN RIGHTS WATCH. “APRENDERÁS A NO LLORAR”, Óp. Cit., pág. 82.

¹⁵⁰ ICBF., *Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de los Grupos Armados Organizadas al Margen de la Ley.*, Observatorio del Bienestar de la Niñez. 2014., y. *Programa de atención para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de Grupos Armados Organizadas al Margen de la Ley (GAOML) Julio-Diciembre 2015*. Observatorio del Bienestar de la Niñez. Septiembre 2016.

Gráfico No. 1
Número anual de niños, niñas y adolescentes que se desvincularon y que han ingresado al programa, 1999*2014

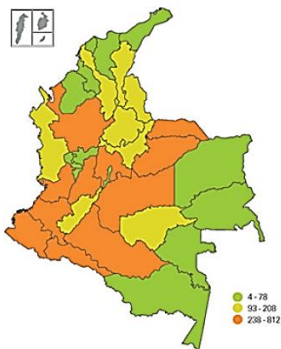


AÑO POR GAOML

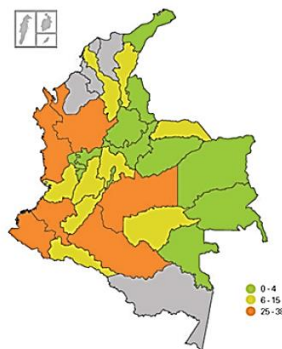
Año	AUC	BACRIM	ELN	Grupo Armado legal				FARC	Por Estal
				EPL	ERG	ERP			
2016		7	61	2				73	
2015		22	53	1				138	1
2014		21	52					186	1
2013		16	64	1				255	6
2012		34	36	4				187	3
2011	3	24	44	1	1			206	3
2010	4	20	61	1				246	6
2009	1	20	74	1				219	
2008	1	22	65		13			312	2
2007	11	22	65		4	3		275	
2006	95		69	3		4		225	
2005	277		68	4		1		176	
2004	332		73	4	1	9		263	2
2003	259		94	7	5	2		404	4
2002	58		66	3		3		257	7
2001	12		27	3		2		140	12
2000	2		8					84	6
1999			2					7	1

Fuente: <http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Observatorio1/datos/tablero1>

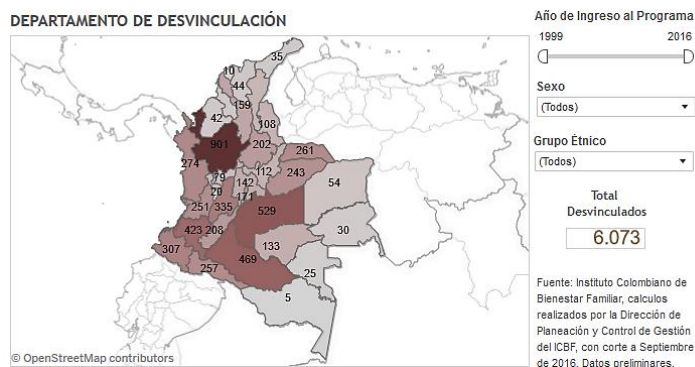
Mapa N° 1
Número de niños, niñas y adolescentes que se desvincularon, según el departamento, 1999*2013



Mapa N° 2
Número de niños, niñas y adolescentes que se desvincularon, según el departamento, 2014



A septiembre de 2016, la cifra es de 6.073 menores desvinculados.



Estas gráficas también muestran las zonas en las que más se efectúan las desvinculaciones, en su mayoría coinciden con las zonas donde se mantiene el reclutamiento forzado de menores, teniendo tal conocimiento el Estado podía entrar a tomar las medidas pertinentes para su prevención, o porque no para su recuperación.

De otra parte, de acuerdo a las investigaciones las edades entre los 12 a los 18 años definen procesos importantes en el desarrollo integral y estructura de la personalidad de los NNA. Los cuales se ven interrumpidos cuando se incorporan a los grupos armados al margen de la ley, como son los procesos escolares, de capacitación laboral y de recreación; que son reemplazados por el entrenamiento militar y el adoctrinamiento político. Circunstancias que hacen difícil la recuperación de los menores, pero a pesar de ello, según lo referido por menores entrevistados por la Defensoría, el Programa de atención a los desvinculados ha tenido una buena percepción. Pues consideran se les brinda un buen trato, así como logran satisfacer sus necesidades básicas y enseñanzas, con el único descontento es estar alejados de su familia. Pero lo más alentador es que los menores expresaron su deseo de estudiar y prepararse para trabajar estar con su familia. Por ello, la intervención con NNA desvinculados debe tener como propósito el fortalecimiento y preparación del joven para la autonomía, la independencia, la ciudadanía y la convivencia familiar y social dentro del marco legal para cumplir así con su debida reincorporación en la sociedad¹⁵¹.

Finalmente, respecto a la recuperación de los menores en el **Comunicado Conjunto No 70/2016** entre el gobierno y las FARC, se da un acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y su rehabilitación respecto de del cual se destaca las siguientes condiciones¹⁵²:

- a) La priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la opinión y el interés superior del menor de edad,
- b) Atención en salud,
- c) Educación para los menores de edad (básica, media, técnica y tecnológica, y becas y facilidades de acceso a educación universitaria para quienes alcancen y deseen acceder a dicho nivel académico),
- d) Garantía de inclusión de sus familias en la oferta estatal y de cooperación internacional de proyectos productivos y de vivienda digna, para contribuir a su estabilización social.

En el Programa se incluye a todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de las FARC-EP.

¹⁵¹ Defensoría del Pueblo Colombia. *La Niñez en el Conflicto Armado... Óp. Cit.*, págs. 13, 17 y 21.

¹⁵² Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). *Comunicado Conjunto #70 "Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención"*, La Habana -Cuba, 15 de mayo de 2016.

Si bien estos criterios son amplios e integrales, se han evidenciado dos cosas negativas del acuerdo: la primera, es que se suscribió sin conocer las cifras reales de menores vinculados a las FARC, no se sabe con certeza, o no se ha dicho públicamente, el número total de NNA que actualmente se encuentran vinculados con esta organización guerrillera; y la segunda, es que no se haya incluido al ICBF como institución a cargo de los menores, a pesar de que ha sido esta la que ha llevado a cabo el programa de atención a menores víctimas y es la única entidad nacional con competencia en el tema¹⁵³.

En el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, apartado 3.2.2.5 se refiere a la reincorporación para los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC-EP, y en el cual se establece:

Los menores de edad que hayan salido de los campamentos de las FARC-EP desde el inicio de las conversaciones de paz, hasta la finalización del proceso de la dejación de armas, serán objeto de medidas de especial atención y protección que se discutirán en el Consejo Nacional de Reincorporación en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y que incluirán los principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad y los lineamientos para el diseño del Programa Especial conforme a lo establecido en el Comunicado Conjunto No. 70 de fecha 15 de mayo de 2016 para garantizar la restitución de sus derechos con enfoque diferencial, priorizándose su acceso a la salud y a la educación. El seguimiento a estos programas se efectuará por el Consejo Nacional de Reincorporación en articulación con las entidades del Estado competentes y con el apoyo de organizaciones sociales o especializadas encargadas de hacer la veeduría en los términos del Comunicado Conjunto No. 70. Una vez aprobado el Programa, el Gobierno Nacional tramitará los ajustes normativos que sean necesarios para garantizar su implementación, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño y el DIH.

El Programa deberá garantizar la reincorporación integral del menor y su acompañamiento psicosocial, con la veeduría de las organizaciones sociales o especializadas, así como también su ubicación en lugares transitorios de acogida en municipios cercanos a las ZVTN, garantizando el derecho a la información de todos los participantes, en especial a los niños, niñas y adolescentes.

Con lo cual se ratifica y regula lo establecido en el ya referido Acuerdo del Comunicado Conjunto. Como desarrollo de este la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos lideró el diseño y puesta en marcha del Programa *Camino Diferencial de Vida para la acogida y atención especial de las personas menores de edad que salen de los campamentos de las FARC*, el cual está compuesto por cuatro procesos: (i) la salida de los menores de edad; (ii) el restablecimiento de sus derechos (iii) su reparación integral y su (iv) reincorporación e inclusión social. Cabe resaltar que esta ha sido la medida de recuperación de los menores reclutados, la cual se espera sea efectiva y se entreguen todos los NNA que se vincularon estén o no registrado su reclutamiento, pero al mismo tiempo

¹⁵³ NIETO, C. *Lo bueno y lo malo del acuerdo de desvinculación de menores de las FARC*. 26 de junio de 2016. Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9537-lo-bueno-y-lo-malo-del-acuerdo-de-desvinculaci%C3%B3n-de-menores-de-las-farc.html>

dependerá de cómo se desarrolle este programa es que se podrá establecer si el estado cumple con su obligación de recuperación y rehabilitación.

3. Investigación, juzgamiento y sanción.

Al respecto de esta obligación es importante conocer el pronunciamiento de la Corte IDH en el caso Santo Domingo¹⁵⁴ en el cual aclaró:

[...] si bien ha establecido que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa” o como una mera gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares¹⁵⁵. Es responsabilidad de las autoridades estatales realizar una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos¹⁵⁶.

Teniendo como base esta consideración, ahora se mencionarán los instrumentos que han se han pronunciado frente a esta obligación y específicamente para el caso en concreto. El Convenio 182 de la OIT en su artículo 7.1 impone el deber de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivo de las disposiciones del Convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o, según proceda, de otra índole. De igual forma lo contempla el artículo 6.1 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos, el cual establece que los Estados deben adoptar todas las medidas jurídicas, administrativas y de otra índole necesarias para garantizar la aplicación efectiva y la vigilancia del cumplimiento efectivo de las disposiciones del Protocolo dentro de su jurisdicción.

A su vez, el Estatuto de Roma en su apartado 8.2.e.vii, establece como crimen de guerra el reclutar menores de 15 años en las fuerzas o grupos para participar activamente en las hostilidades; y siendo el objetivo de este instrumento poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y al mismo tiempo contribuir a la prevención de su comisión, es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de estos crímenes internacionales.

Si bien se conoce que el reclutamiento forzado de menores inicia en 1975, dentro de la normatividad colombiana no existía una norma que sancionará estos hechos y en la expedición del Decreto 2737 de 1989 (Código del Menor), aún no se reconocía como

¹⁵⁴ Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 157.

¹⁵⁵ Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras.* Óp. Cit., párr. 177, y *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador*, Óp. Cit., párr. 248.

¹⁵⁶ Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.* Óp. Cit., párr. 143; y *González Medina y familiares Vs. República Dominicana*, Óp. Cit., párr. 204.

condición de vulnerabilidad los niños el que sean víctimas de reclutamiento por parte de alguno de los grupos al margen de la ley que participan en el conflicto armado interno.

Es a partir de 1991 con lo estipulado en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia, que los tratados internacionales de Derechos Humanos hacen parte del Bloque de Constitucionalidad y son de obligatorio cumplimiento para todos los organismos del Estado. Seguido de ello, se ha implementado normatividad interna para la sanción del reclutamiento forzado de menores desde la Ley 418/1997 prorrogada por la ley 548/1999, y a la fecha, con la vigente ley 599/2000 que incluye el título delitos contra personas y bienes protegidos por el DIH entre los cuales se incluye el reclutamiento ilícito.



Fuente: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1000744>

Investigaciones y juzgamientos respecto del delito de reclutamiento de menores no se tiene conocimiento, es hasta junio de 2003, que se anuncia que un Tribunal de Bogotá había condenado en rebeldía a Manuel Marulanda, cabeza de la organización, por el delito de reclutar menores. El cual se basó en las acusaciones presentadas por las Fuerzas Armadas Colombianas. No obstante, esta condena nunca se ejecutó debido a que el Comandante Jefe de las FARC nunca fue capturado y fallece el 26 de marzo de 2008.

El reclutamiento de menores es un crimen invisible (las denuncias no superan el 2% de los casos en todo el territorio). No hay un sistema de alerta temprana efectivo y esforzado en proteger e inmunizar a la niñez en situación de riesgo y vulnerabilidad que impida la evolución del fenómeno. Tampoco se encuentra una revisión satisfactoria de la cantidad de niños y niñas muertos en combate. Tan solo se identifican exitosamente entre el 25% y el 45% de los cuerpos recuperados; otros no se recuperan y apenas en el 2009 se ha venido implementando un protocolo especializado que preserva datos de identificación de los cadáveres de individuos dados de baja en el marco de una confrontación armada, antes de su sepultura¹⁵⁷.

¹⁵⁷ SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos*., Óp. Cit., párr. 93.

Respecto a la investigación de estos hechos a inicios del 2016, se conoce un informe de la FGN el cual a partir de los estatutos de las FARC, así como la información extraída de los ordenadores incautados a líderes como el "Mono Jojoy" y "Alfonso Cano", fallecidos en operaciones militares, dispositivos electrónicos y documentos de la tercera y séptima conferencia y plenos del Secretariado y el Estado Mayor; se tiene conocimiento de los posibles responsables de este delito dentro de las FARC. Respecto del cual la misma Fiscalía¹⁵⁸ señala:

Los mayores reclutadores dentro de las FARC son:

- Isaías Trujillo
- Alias Iván Márquez
- Rubín Moro.
- Alias el Sargento Pascuas y alias Cancharina

Los casos de reclutamiento en las estructuras son los siguientes:

- Bloque Sur: con 845 menores.
- Comando Conjunto Central: 430 menores
- Bloque José María Córdoba: 960 menores
- Bloque Caribe: 172 menores
- Bloque Occidental: 1.003 menores
- Bloque Magdalena Medio: 279 menores
- Bloque Oriental: 7.867

Para un total de 11.556 menores reclutados

“Todos estos análisis realizados durante un año de trabajo, le permite a la Fiscalía asegurar que el Secretariado de las FARC, con sus 7 comandantes, y los 32 jefes de frentes y bloques regionales, o Estado Mayor, **son responsables** de reclutamiento forzado de menores, como un crimen de guerra”, dijo el Fiscal Perdomo.

Menores Pisa Suave

Dentro de la investigación se destaca la referencia a la creación de la unidad militar “Pisa Suave”, integrada por menores de edad que representan el 2.5 del total de reclutados con 257 casos documentados. Los Pisa Suave son menores de edad entrenados militarmente en emboscadas, expertos en manejo de explosivos, rifles de asalto y armas cortas, enmascarados y ligeros de ropa. Departamentos como Antioquia (207 casos), Meta (336 casos), Guaviare (136 casos) y Cauca (130 casos), son las regiones con mayor número de menores reclutados.

La Zona de Distensión

Uno de los mayores picos de reclutamiento de menores ocurrió entre los años 1998 y 2002, correspondientes al período de la llamada “Zona de Distensión”, con la finalidad de incrementar el pie de fuerza:

- 1998: 123 menores reclutados
- 1999: 183 menores reclutados
- 2000: 206 menores reclutados
- 2001: 121 menores reclutados
- 2002: 108 menores reclutados

Desde 1979, las FARC adelantaron tres tipos de prácticas de reclutamiento de menores:

1. Persuasión: 47 por ciento

¹⁵⁸ Fiscalía General de la Nación. *Las FARC reclutaron ilícitamente a 11.556 menores desde 1975*: Fiscal Jorge Perdomo. 16 de mayo de 2016. <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/las-farc-reclutaron-ilicitamente-a-11-556-menores-desde-1979-fiscal-e-jorge-perdomo/>

2. Engaño: 23 por ciento
3. Forzado: 30 por ciento

Adicional a ello, se podrá tener conocimiento de quienes fueron las personas que reclutaron a cada uno de esos menores, pues conforme al formato de hoja de vida para ingreso de las FARC, el cual también era diligenciado para los menores de edad, se dispone dicha información; y por tanto, se podrá obtener de manera individualizada quién fue reclutador de cada menor¹⁵⁹.

En cuanto a ello, cabe resaltar lo manifestado por Springer a saber: “el establecimiento pleno de la autoría de estos hechos no exime de manera alguna al Estado, no mengua sus responsabilidades ni lo libera de sus obligaciones. Por el contrario, la vulnerabilidad generada por la ofensiva desigualdad que mantiene a una fracción de la población en los límites de la supervivencia y el hambre es lo que facilita la comisión de estos graves crímenes”¹⁶⁰

Indagando específicamente por las investigaciones llevadas a cabo por el Estado respecto al reclutamiento forzado por las FARC, nos encontramos que al interior del ente encargado, la Fiscalía General de la Nación, no hay una coordinación de sus estadísticas, pues desde la Dirección Nacional de Políticas Públicas se nos remite la siguiente información¹⁶¹:

1. El sistema de información del Sistema Penal Oral Acusatorio de la ley 906 de 2004 y la ley 1098 de 2006 –SPOA-, el cual registra hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que ocurrieron a partir de enero del año 2005, reporta la siguiente información:
 - El número de indiciados por NUNC¹⁶² registrados con alguna actuación de acusación es de **22**.
 - El número de indiciados por NUNC registrados con alguna actuación de condena o sanción es de **12**.
 - El número de indiciados en NUNC es de **1.203**.
2. En lo que respecta al Sistema de Información de la ley 600 de 2000 –SIJUF-, el cual registra hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que ocurrieron antes de enero del año 2005, reporta la siguiente información:
 - El número de sindicados por radicado registrados con alguna actuación de acusación es de **72**.
 - El número de sindicados por radicado registrados con alguna actuación de condena es de **27**.
 - El número de sindicados por radicado es de **1.439**.

Lo anterior refleja que en total entre los dos Sistemas en etapa de acusación se encuentran 94, con condena 39 y en investigación 2.642 casos. Datos que, relacionando

¹⁵⁹ FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas*, Óp. Cit., pág.130.

¹⁶⁰ SPRINGER, N., *Como corderos entre lobos*, Óp. Cit., párr. 10.

¹⁶¹ Anexo. No. 2. Respuesta a Derecho de Petición. Dirección Nacional de Políticas Públicas Fiscalía General de la Nación.

¹⁶² Número único de noticia criminal.

la proporción entre investigados y condenados es abrumadora, pues hay hechos que se investigan desde el año 2000 y a la fecha, 17 años después no se han culminado, excediendo así el plazo razonable sin resultados por parte del Estado.

Por otro lado, la Dirección de Análisis y Contexto-DINAC de la Fiscalía General de la Nación, encuentra los siguientes registros a 01 de mayo de 2017¹⁶³:

LEY PROCEDIMENTAL	No. INVESTIGACIONES
LEY 600	724
LEY 906	1.568
LEY 975	1.927
TOTAL	4.219

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac con base a los registros de los sistemas de información de Sijuf, Spoa y Sijyp. Septiembre de 2016.

ACTUACIÓN	No. ACTUACIONES
CALIFICACION CON RESOLUCION DE ACUSACION	74
EJECUTORIA DE RESOLUCION ACUSACION	61
TOTAL GENERAL	135

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac con base a los registros del sistema de información de Sijuf. Mayo de 2017.

Instancia	Tipo Decisión	Fecha Sentencia	Nombres y Apellidos	Tiempo en Meses	Sanción Pecuniaria
Primera	Condenatoria	3/06/2003	Luis Edgar Devia Silva	164	1380 SMLMV
			Miltón de Jesús Toncel Perdomo		
			Ezequiel Huelguía Cruz		
			José Benito Cabrera		
			Floresmiro Burbano		
			Pedro Antonio Marín		
			Luciano Marín Arango		
			Guillermo León Saenz Vargas		
			Noel Mata Mata		
			Jorge Briceño Suarez		
Primera	Condenatoria	9/07/2009	Elda Neyis Mosquera García	240	1.050 SMLV
Primera	Condenatoria	4/12/2009	Wilmar Antonio Marín Cano	121	1.012,5 SMLMV
			Pedro Antonio Marín		
Primera	Condenatoria	3/05/2010	Pedro Luis Pino Valderrama	39	300 SMLMV
Primera	Condenatoria	23/09/2010	José Aquileo Herrera Tellez	121	1012,5 SMLMV
			Guillermo León Saenz Vargas		
			Luciano Marín Arango		
			Noel Mata Mata		
			Rodrigo Londoño Echeverry		
			Jorge Briceño Suarez		
			Janer Godoy Uribe		
Primera	Condenatoria	12/05/2011	Edilberto Londoño Arguello	39	\$92,950,000
Segunda	Apelación	20/10/2011	Edilberto Londoño Arguello	39	\$92,950,000

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac

¹⁶³ Anexo No 3. Respuesta Derecho de Petición. Dirección de Análisis y Contexto-DINAC de la Fiscalía General de la Nación.

De estas 4.219 investigaciones, 135 señalan que se encuentra en resolución de acusación, 6 con sentencias condenatorias en primera instancia y 1 en segunda instancia. Registros que resultan preocupantes respecto a la efectividad de las investigaciones frente a un delito tan grave como es el reclutamiento forzado de menores. Quedando en un alto grado de impunidad; incumpliendo su obligación de investigación, juzgamiento y sanción, y a su vez una de las finalidades de la medida legislativa como es, el restablecimiento del orden jurídico como coacción en la sociedad para prevenir que estos hechos vuelvan a cometerse.

Por su parte la Defensoría del Pueblo en su registro de datos sobre la conducta de reclutamiento de menores atribuida a las FARC de 01 de 2013 a 06 de junio de 2017, solo contemplan 35 violaciones¹⁶⁴.

A. Lo que incluye la Obligación de investigar según la Corte IDH

En relación a la protección del derecho a la vida la Corte IDH en el Caso Masacre de Pueblo Bello¹⁶⁵ ha sostenido que:

Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, por tanto, deben adoptar las medidas necesarias, no sólo a nivel legislativo, administrativo y judicial, mediante la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para [...]proteger a los individuos de actos criminales de otros individuos e **investigar** efectivamente estas situaciones, es decir, para garantizar efectivamente este derecho una de las condiciones es el deber de investigar las afectaciones al mismo.

Donde las investigaciones a las graves violaciones a los derechos humanos se deben iniciar *ex officio* y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva¹⁶⁶, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser **infructuosa**¹⁶⁷. La cual debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos¹⁶⁸.

La investigación debe ser asumida por el Estado como **un deber jurídico propio** y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad¹⁶⁹.

¹⁶⁴ Ver Anexo No 4. Respuesta a derecho de petición. Defensoría del Pueblo.

¹⁶⁵ Corte IDH. *Caso Las Palmeras Vs. Colombia*. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C 90., párr. 120, 143, 144; 145

¹⁶⁶ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párrs. 219 y 223; *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam* *Óp. Cit.*, párr. 145; y *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú*, *Óp. Cit.*, párr. 131.

¹⁶⁷ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 223; *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 61, y *Caso Bulacio*, *Óp. Cit.*, párr. 112.

¹⁶⁸ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 237; *Caso de la Comunidad Moiwana, Vs. Surinam* *Óp. Cit.*, párr. 203, y *Caso Hermanas Serrano Cruz*, párr. 170.

¹⁶⁹ Corte IDH. *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 219; *Caso Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador*, *Óp. Cit.*, párr. 61.

En este mismo caso el Tribunal considero que una investigación efectiva es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos que se ven afectados o anulados por esas situaciones, como lo son los derechos a la libertad e integridad personal y vida. Apreciación válida sea cualquiera el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, **aun los particulares**, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, **auxiliados por el poder público**, lo que comprometería la **responsabilidad internacional del Estado**¹⁷⁰. Y por tanto, determinó en ese caso que si bien los actos fueron cometidos por particulares, la responsabilidad por aquéllos actos es atribuible al Estado en razón del **incumplimiento por omisión de sus obligaciones convencionales** *erga omnes* de garantizar la efectividad de los derechos humanos en dichas relaciones interindividuales. (Subrayado fuera del texto)

En relación con la garantía efectiva de los derechos a la vida y a la libertad e integridad personales, la Corte IDH ha señalado que el Estado como parte de su obligación debe investigar las presuntas violaciones a dichos derechos, la cual se deriva del artículo 1.1 de la CADH en conjunto con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o garantizado¹⁷¹. De manera concreta, en casos de violaciones al derecho a la vida, estableció que el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judicial¹⁷².

Respecto al artículo 25 considera se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1(1) de la CADH, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes, por lo cual el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales¹⁷³. Recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1)¹⁷⁴.

El Tribunal también ha establecido que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares, a que

¹⁷⁰Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán"*, Colombia, *Óp. Cit.*, párrs. 137 y 232; *Caso Huilca Tecse*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 66; y *Caso 19 Comerciantes vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 153.

¹⁷¹ Corte IDH., *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia.*, *Óp. Cit.*, párr. 223; *Caso Servellón García y otros Vs. Honduras*, Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152.párr. 119; *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil*, Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. párr. 147; *Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 297; y *Caso Baldeón García vs Peru*, *Óp. Cit.*, párr. 92.

¹⁷² Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia*, *Óp. Cit.*, párr. 297.

¹⁷³ Corte IDH, *Caso de los "Niños de la Calle" vs Guatemala*, *Óp. Cit.*, párr. 237.

¹⁷⁴ Corte IDH., *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia.*, *Óp. Cit.*, párr. 145; *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.*, *Óp. Cit.*, párr.169; *Caso Goiburú y otros*, *Óp. Cit.*, párr. 110.

se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los eventuales responsables¹⁷⁵. Debido a que esa garantía de protección de los derechos de los individuos no supone sólo el resguardo directo a la persona vulnerada sino, además, a los familiares, quienes por los acontecimientos y circunstancias particulares del caso, son quienes ejercen la reclamación en el orden interno¹⁷⁶.

Al referirse la Corte al derecho a la verdad ha establecido que este se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o de sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la CADH¹⁷⁷.

Por otra parte, este Tribunal ha reconocido¹⁷⁸ las difíciles circunstancias por las que atravesaba Colombia durante el conflicto armado, en las que su población y sus instituciones hacían esfuerzos por alcanzar la paz. Sin embargo, consideró que las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado Parte en la CADH de sus obligaciones establecidas¹⁷⁹. Y por tanto, no investigarlas de manera adecuada y no sancionar efectivamente a los responsables, conlleva a que el Estado incumpla sus obligaciones de respetar y garantizar los derechos reconocidos por la Convención a la presunta víctima y sus familiares, impidiendo que la sociedad conozca lo ocurrido¹⁸⁰ y reproduce las condiciones de impunidad para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse.

En la Sentencia sobre el caso de los "*Niños de la Calle*", la Corte señaló que, para la determinación de la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones de los derechos humanos, debía efectuar "un examen del *conjunto* de las actuaciones judiciales internas para obtener una percepción *integral* de tales actuaciones, y establecer si resulta o no evidente que dichas actuaciones contravienen los estándares sobre el deber de investigar

¹⁷⁵ Corte IDH., *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 146; *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 289; *Caso del Penal Miguel Castro*, Óp. Cit., 8, párr. 382; *Caso Vargas Areco vs Paraguay*, Óp. Cit., párr. 101.

¹⁷⁶ Corte IDH., *Caso Las Palmeras Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 58; *Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala*, Óp. Cit., párr. 196.

¹⁷⁷ Corte IDH., *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 147; *Caso Almonacid Arellano y otros*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 148; y *Caso Gómez Palomino vs Perú*. Óp. Cit., párr. 78.

¹⁷⁸ Corte IDH., *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 146; *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia.*, Óp. Cit., párr. 300.

¹⁷⁹ Corte IDH., *Caso García Asto y Ramírez Rojas, Vs. Perú*, Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 170; *Caso de la "Masacre de Mapiripán" vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 238.

¹⁸⁰ Corte IDH., *Caso de la "Masacre de Mapiripán", vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 238; *Caso de la Comunidad Moiwana vs Surinam* Óp. Cit., párr. 153; y *Caso Juan Humberto Sánchez vs Perú.*, párr. 134.

y derecho a ser oído y a un recurso efectivo que emergen de los artículos 1(1), 8 y 25 de la Convención"¹⁸¹.

Cuando se menciona la obligación de investigar con debida diligencia, la Corte ha sido enfática al señalar que el órgano que investiga una alegada violación de derechos humanos debe utilizar **todos los medios disponibles** para llevar a cabo, dentro de un **plazo razonable**, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue¹⁸². Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante **la gravedad de los delitos** cometidos¹⁸³ y la naturaleza de los derechos lesionados¹⁸⁴. En este sentido, tienen que adoptarse todas “las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos”¹⁸⁵.

En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de **evitar y combatir la impunidad**, la cual ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la CADH”¹⁸⁶. Al respecto, advierte que el Estado tiene la obligación de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares¹⁸⁷.

Conforme a todos estos criterios esgrimidos a través de su jurisprudencia, se considera que es obligación del Estado investigar cada uno de los casos de reclutamiento forzado de menores que realizó las FARC y que estas investigaciones deben iniciarse de oficio; utilizando todos los medios disponibles; se desarrolle conforme al debido proceso, en un plazo razonable; la cual permita la persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables. Así la comisión de este grave delito no quede impune.

¹⁸¹ Corte IDH., *Caso de los “Niños de la Calle” vs Guatemala*. Óp. Cit., párrs. 223-224.

¹⁸² Corte IDH., *Caso Gómez Palomino Vs. Perú*. Óp. Cit., párr. 80; y *Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana*, Óp. Cit., párr. 220.

¹⁸³ Corte IDH., *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 156; y *Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala*, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253, párr. 230.

¹⁸⁴ Corte IDH., *Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala*, Óp. Cit., párr. 230; *Caso La Cantuta Vs. Perú*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162, párr. 157.

¹⁸⁵ Corte IDH., *Operación Génesis vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 372; *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 156.

¹⁸⁶ Corte IDH., *Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 237; *Caso de la Comunidad Moiwana*, Óp. Cit., párr. 203; y *Caso de las Hermanas Serrano Cruz*. Óp. Cit., párr. 170.

¹⁸⁷ Corte IDH., *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia*, Óp. Cit., párr. 299; *Caso Baldeón García*, Óp. Cit., párr. 168; *Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 266.

De allí, se debe tener en cuenta una determinación del Tribunal en el caso la Rochela, donde manifestó que si bien existen algunas investigaciones y condenas por los hechos, subsiste la impunidad, en la medida en que no ha sido determinada toda la verdad de los hechos ni la totalidad de las responsabilidades por los mismos¹⁸⁸.

Con las investigaciones llevadas hasta el momento se puede determinar que el Estado Colombiano no ha cumplido con su obligación de investigación, juzgamiento y sanción, debido a que en su mayoría no han pasado la primera etapa de investigación y las condenas de los responsables son muy pocas. Ahora bien, con el proceso de paz que se desarrolla con las FARC el Estado plantea una alternativa para llevar a cabo este proceso de investigación, y ello es a través de la justicia restaurativa, la cual se basa en el reconocimiento de responsabilidad otorgando beneficios a los responsables de estos actos tan graves. Por ello se entrará a analizar los planteamientos del Proceso de Paz, y poder verificar si con ellos el Estado estaría cumpliendo o no con sus obligaciones internacionales.

B. Proceso de paz en Colombia

Este apartado pretende resaltar lo establecido en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, el cual señala “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. En dado caso de incumplimiento de las obligaciones contraídas, el Estado no podría alegar disposiciones como el Acuerdo de paz para justificarse. Por ello, se analizará lo que se busca con el Acuerdo, por qué algunas de sus disposiciones podrían generar que el Estado colombiano no cumpla con sus obligaciones internacionales.

La búsqueda de la solución negociada al conflicto armado interno en Colombia se ha hecho a través de fases sucesivas de negociación política con grupos guerrilleros y paramilitares a lo largo de las últimas tres décadas. Un acuerdo que ponga fin definitivo al conflicto armado interno que vivía el país requiere de un arreglo de justicia transicional. Por tanto, en el Decreto 2897 de 2011 se crea La Dirección de Justicia Transicional como parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, adscrita al Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, la cual tiene como función diseñar, coordinar e implementar políticas, planes, programas y proyectos de justicia transicional propiciando la participación de distintos sectores sociales y con enfoque diferencial¹⁸⁹.

¹⁸⁸ Corte IDH., *Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 178.

¹⁸⁹ Ministerio de Justicia. Justicia transicional en Colombia. Disponible en: <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colombia>

¿Por qué la justicia transicional? Para el Centro Internacional para la Justicia Transicional¹⁹⁰ es el conjunto de medidas judiciales y políticas que se utilizan como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales. No es un tipo especial de justicia sino una forma de abordarla en épocas de transición desde una situación de conflicto. Los elementos para que se dé una justicia transicional integral son:

- Las acciones penales, sobre todo contra los criminales considerados de mayor responsabilidad.
- Las reparaciones que los Gobiernos utilizan para reconocer los daños sufridos y tomar medidas para abordarlos. Esas iniciativas suelen tener un componente material (como los pagos monetarios o los servicios sanitarios), así como aspectos simbólicos (como las disculpas públicas o los días del recuerdo).
- La reforma de instituciones públicas (si se requiere)
- Las comisiones de la verdad u otras formas de investigación y análisis de pautas de abuso sistemáticas, que recomiendan cambios y ayudan a comprender las causas subyacentes de las violaciones de derechos humanos graves.

a. Antecedentes en Colombia

En el Caso La Rochela¹⁹¹ la Corte IDH analizó la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz¹⁹², una ley según la Corte Constitucional Colombiana de justicia transicional¹⁹³ que buscaba facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley que se hayan desmovilizado individual o colectivamente, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Por tanto, esta regulaba la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley que decidan desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional y a garantizar los derechos de las víctimas.

Si bien a la fecha de la sentencia de este caso apenas iniciaba la aplicación de esta ley, existía una incertidumbre sobre el contenido y alcance preciso de la misma, debido a que se encontraban en desarrollo los primeros actos del procedimiento penal especial que podría permitir la concesión de beneficios penales para personas que han sido señaladas de tener alguna vinculación con los hechos del caso y que por solicitud de las partes, la Corte estimó oportuno indicar con base en su jurisprudencia, algunos aspectos sobre

¹⁹⁰ Centro Internacional para la Justicia Transicional. La Justicia transicional. Disponible en: <https://www.ictj.org/es>

¹⁹¹ Corte IDH. *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia*. Óp. Cit., párr. 181-198.

¹⁹² Ministerio de Justicia. Justicia transicional en Colombia. Disponible en: <http://www.justiciatransicional.gov.co/ABC/Ley-de-Justicia-y-Paz>

¹⁹³ Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370/06. 18 de mayo de 2006, fundamento 4.2 y 5.

principios, garantías y deberes que debe observar la aplicación del referido marco jurídico de desmovilización. Asimismo, indicó que los funcionarios y autoridades públicas tienen el deber de garantizar que la normativa interna y su aplicación se adecúen a la CADH¹⁹⁴. Y estimó lo siguiente:

193. Para que el Estado satisfaga el deber de garantizar adecuadamente diversos derechos protegidos en la Convención, entre ellos el derecho de acceso a la justicia y el conocimiento y acceso a la verdad, es necesario que cumpla su deber de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos. Para alcanzar ese fin el Estado debe observar el debido proceso y garantizar, entre otros, el principio de plazo razonable, el principio del contradictorio, el principio de **proporcionalidad de la pena**, los recursos efectivos y el **cumplimiento de la sentencia**.

194. Los Estados tienen el deber de iniciar *ex officio*, sin dilación y con debida diligencia, una investigación seria, imparcial y efectiva, tendiente a **establecer** plenamente **las responsabilidades** por las violaciones¹⁹⁵. En tal sentido, **son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación y eventual sanción de los responsables de estas graves violaciones**¹⁹⁶.

195. En casos de graves violaciones a los derechos humanos, las obligaciones positivas inherentes al derecho a la verdad exigen la adopción de los diseños institucionales que permitan que este derecho se realice en la forma más idónea, participativa y completa posible y no enfrente obstáculos legales o prácticos que lo hagan ilusorio. Exige la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la **determinación judicial de los patrones de actuación conjunta** y de todas las personas que de diversas formas participaron en dichas violaciones y sus correspondientes responsabilidades. Se debe garantizar la participación de las víctimas¹⁹⁷.

196. En cuanto al referido principio de proporcionalidad de la pena, la Corte estima oportuno resaltar que la respuesta que el Estado atribuye a la conducta ilícita del autor de la transgresión debe ser proporcional al bien jurídico afectado y a la culpabilidad con la que actuó el autor, por lo que se debe establecer en función de la diversa naturaleza y gravedad de los hechos¹⁹⁸. La pena debe ser el resultado de una sentencia emitida por autoridad judicial. Todos los elementos que incidan en la efectividad de la pena deben responder a un objetivo claramente verificable y ser **compatibles** con la Convención.

197. Asimismo, es necesario señalar que el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad de una sentencia sólo cuando se llega a ésta respetándose el debido proceso de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal en la materia. Por otro lado, si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada¹⁹⁹. (Subrayados fuera del texto)

¹⁹⁴ Corte IDH., *Caso La Cantuta vs Perú*, Óp. Cit., párr. 173; *Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile*, Óp. Cit., párr. 124.

¹⁹⁵ Corte IDH., *Caso Vargas Areco vs Paraguay*, Óp. Cit., párrs. 76 y 77; *Caso Ximenes Lopes vs Brasil*, Óp. Cit., párr. 148; y *Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 296.

¹⁹⁶ Corte IDH., *Caso Molina Theissen vs Guatemala*. Reparaciones. Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108, párr. 84; y *Caso Barrios Altos vs Perú*. Fondo., Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75, párr. 41.

¹⁹⁷ Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes vs Brasil*, Óp. Cit., párr. 193; *Caso de las Masacres de Ituango vs Colombia*, Óp. Cit., párr. 296; y *Caso Baldeón García vs Perú*, Óp. Cit., párr. 146.

¹⁹⁸ Corte IDH. *Caso Vargas Areco vs Paraguay*, Óp. Cit., párr. 108; *Caso Raxcacó Reyes vs Guatemala*. Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133, párrs. 70 y 133; y *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs Trinidad y Tobago*, Óp. Cit., párr. 102.

¹⁹⁹ Corte IDH., *Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile*, Óp. Cit., párr. 154.

b. Acuerdo Final de para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera

El gobierno colombiano con el fin de alcanzar la paz en agosto de 2012 en la Habana (Cuba) suscribe una agenda con las FARC-EP sobre los puntos de Acuerdo General; después de discutir los 5 puntos durante 4 años, el 23 de junio de 2016 se firma un Acuerdo del cese del fuego y dejación de armas en la Habana (Cuba); posteriormente, el 26 de septiembre de 2016 se firma en Cartagena (Colombia) el Acuerdo final, el cual debía pasar por las urnas colombianas a través de un Plebiscito el 02 octubre de 2016.

Los resultados fueron un NO por parte del pueblo colombiano; no obstante, de conformidad con lo establecido la sentencia de la Corte Constitucional C-379/2016 el Presidente de la Republica continuaba con las competencias y facultades para mantener el orden público, “incluso a través de la negociación con grupos armados ilegales, tendiente a lograr otros acuerdos de paz”; se hacen algunas renegociaciones con la oposición y el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá (Colombia) se firma el Nuevo Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto. El cual fue ratificado por el Congreso de la República el 29 y 30 de noviembre de 2016.

El nuevo Acuerdo Final alega que recoge y cumple todas las normas de la Constitución Nacional, de los principios del DI, del DIDH, del DIH (Convenios y Protocolos), de lo mandado por el Estatuto de Roma (DPI), de los fallos proferidos por la Corte IDH relativos a los conflictos y su terminación, y demás sentencias de competencias reconocidas universalmente y pronunciamientos de autoridad relativos a los temas suscritos. Y a su vez, acepta que las normas de DI consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones relacionadas con derechos fundamentales no mencionados en el nuevo Acuerdo Final, incluyendo el mandato imperativo que ordena que “en los casos no previstos por el derecho vigente, la persona humana queda bajo la salvaguardia de los principios de humanidad y de la exigencias de la conciencia pública”; y que es un Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, para efectos de su vigencia internacional.

La importancia del Acuerdo respecto al reclutamiento forzado de menores, es que por ser una conducta de las FARC-EP dentro del desarrollo del conflicto armado los hechos estarán de conocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz que se incluye en el Acuerdo. Y conforme a la ley 1820 de 30 de diciembre de 2016, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones; los desarrollos normativos que requiera el Acuerdo Final que correspondan al Congreso de la República se adelantarán a través de los procedimientos establecidos

en el Acto Legislativo número 01 de 2016, esto es, una habilitación legislativa extraordinaria y excepcional para expedir decretos con fuerza material de ley.

A continuación, se resaltarán diferentes disposiciones del Acuerdo, especialmente las del punto 5.2.1 sobre Justicia, que se consideran contienen una relevancia en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano.

Se alega que el Estado tiene autonomía para conformar jurisdicciones o sistemas jurídicos especiales, derivado de lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas sobre la soberanía y libre autodeterminación de las naciones, y de lo establecido en los Principios del DI, incluido el DIH, el DIDH y el DPI. En el ejercicio de dicha autonomía, el Estado puede apreciar y evaluar la complejidad, duración y gravedad del conflicto armado interno con el fin de diseñar y adoptar los mecanismos de justicia para lograr la paz dentro del respeto a los parámetros establecidos en el DI, en especial la garantía de los DDHH. **En el cual se tomarán en cuenta como ejes centrales los derechos de las víctimas y la gravedad del sufrimiento infligido por las graves infracciones al DIH y las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante el conflicto. Tales violaciones causan daños graves y de largo plazo a los proyectos de vida de las víctimas²⁰⁰.**

Esto lo hará a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante SIVJRNR), el cual parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; del reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH; del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, sobre la premisa de **no intercambiar impunidades**, teniendo en cuenta además los principios básicos de la JEP.

El componente de justicia del SIVJRNR es la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-. Para cumplir con este propósito y avanzar en la lucha contra la impunidad, el SIVJRNR combina mecanismos judiciales que **permiten la investigación y sanción** de las graves violaciones a los DDHH y las graves infracciones al DIH, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros²⁰¹.

Estas disposiciones tienen gran relevancia respecto a lo que ya se mencionó ha establecido la Corte IDH; pues bajo ninguna circunstancia, ni en el caso de conflicto armado, el Estado debe dejar de cumplir con sus obligaciones, entre ellas la falta de investigación y sanción de las graves violaciones a los DDHH, pues se estaría generando impunidad y no garantía de los derechos de las personas que están sujetas a su jurisdicción. Y se ha establecido todo un Sistema de Justicia especial veamos la JEP.

La Jurisdicción Especial para la Paz, estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una Sala de Amnistía e Indulto, y un Tribunal para la Paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los DDHH y las graves infracciones al DIH. La JEP se ocupa exclusivamente y de manera transitoria de las conductas relacionadas directa e

²⁰⁰ Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Bogotá. 24 de noviembre de 2016, pág. 144. Puntos 4-6, JEP.

²⁰¹ *Ibidem.*, pág. 127.

indirectamente con el conflicto armado, la cual **no implica la sustitución de la jurisdicción ordinaria**²⁰².

Frente a esta última mención difiero ya que dentro del Acuerdo se ha manifestado reiteradamente que la JEP es preferente y **PREVALECE** sobre las demás actuaciones hasta la justicia ordinaria, siendo que esta ha sido la considerada la acorde para investigar las graves violaciones a los DDHH, a continuación se mencionan estos apartados.

La JEP, es una jurisdicción especial que ejerce funciones judiciales de manera autónoma **y preferente** sobre los asuntos de su competencia, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al DIH o graves violaciones de los DDHH. Se aplicará únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor. Son delitos cometidos por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, aquellas conductas punibles **donde la existencia del conflicto armado haya sido la causa de su comisión**, o haya jugado un papel sustancial en la capacidad del perpetrador para cometer la conducta punible, en su decisión de cometerla, en la manera en que fue cometida o en el objetivo para el cual se cometió²⁰³.

El componente de justicia del SIVJNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, **prevalecerá sobre las actuaciones penales**, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia **exclusiva** sobre dichas conductas²⁰⁴. En el supuesto de existir conflicto de competencia entre cualquier jurisdicción y la JEP, resolverá dicho conflicto una Sala Incidental, quien adoptará la decisión por mayoría simple y en caso de no alcanzarse, en aplicación del carácter preferente de la JEP, resolverá el Presidente de esta Jurisdicción.

Todas las sentencias del Tribunal para la Paz, así como las resoluciones de las Salas del componente de justicia que definan situaciones jurídicas o concedan amnistía o indulto, **harán tránsito a cosa juzgada** cuando estén en firme **y se garantizará su inmutabilidad**. Dichas sentencias **sólo podrán ser invalidadas o dejadas sin efecto por el mismo Tribunal por las causales restrictivas expresamente determinadas en el reglamento**. Cualquier decisión adoptada por un órgano jurisdiccional u otra autoridad que pretenda dejar sin efecto la amnistía, el indulto u otra medida adoptada en el sistema, tendrá que ser sometidas al Tribunal para la Paz, para que este verifique si dicha decisión conculca los principios del SIVJNR²⁰⁵.

Una de las inquietudes de lo establecido en el párrafo precedente, es respecto a la mencionada inmutabilidad de las decisiones que harán tránsito a cosa juzgada. Ello por las posibles decisiones de los Tribunales Internacionales, llegado el caso que conozca de los de hechos analizados en la JEP y haga un control de convencionalidad frente a las mismas, ¿cómo admitirán este procedimiento?

Se resalta que en el mismo Acuerdo se ha establecido que las violaciones se hacen más graves cuando se cometen en contra de la población más afectada, como en el presente caso, el reclutamiento de NNA, quienes además cuentan con una especial

²⁰² *Ibidem.*, pág. 129.

²⁰³ *Ibidem.*, pág. 145. Punto 9, JEP.

²⁰⁴ *Ibidem.*, pág. 150. Punto 33, JEP.

²⁰⁵ *Ibidem.*, pág. 163. Punto 56 y 57, JEP.

protección. Siendo deber del Estado investigarlos conforme a los instrumentos internacionales, véase:

Las consecuencias de tales violaciones **son más graves** cuando son cometidas contra mujeres o cuando se trata de víctimas pertenecientes a los **grupos más vulnerables, sujetos de especial protección**, que merecen una reparación y protección especial, entre ellos los NNA²⁰⁶.

Para efectos del SIVJRNR, los marcos jurídicos de referencia incluyen principalmente el DIDH y el DIH. Las secciones del Tribunal para la Paz, las Salas y la Unidad de Investigación y Acusación, al adoptar sus resoluciones o sentencias harán una calificación jurídica propia del Sistema respecto a las conductas objeto del mismo, calificación que se basará en el Código Penal colombiano y/o en las normas de DIDH, DIH o DPI, siempre con aplicación obligatoria del principio de favorabilidad. La calificación resultante podrá ser diferente a la efectuada con anterioridad por las autoridades judiciales, disciplinarias o administrativas para la calificación de esas conductas, por entenderse aplicable como marco jurídico de referencia el DI²⁰⁷.

La variación de la calificación ya realizada, por ejemplo de la justicia ordinaria, puede ser uno de los hechos que vayan en contra de la justicia, pues le quita legitimidad a las actuaciones previas que son legales y deberían tener efectos jurídicos. A su vez, esta determinación deja abierta la posibilidad a una falta de independencia e imparcialidad del Tribunal, pues la nueva decisión puede ir en contravía de las investigaciones y enjuiciamientos anteriores, o no tenerlas en cuenta siendo estas acordes a los parámetros del DIDH sin que tenga incidencia alguna ni en la decisión ni en el Tribunal. Otro punto señala:

En materia de justicia, conforme al DIDH, el Estado colombiano tiene el deber de **investigar, esclarecer, perseguir y sancionar** las graves violaciones del DIDH y las graves infracciones del DIH²⁰⁸.

La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos. Hay delitos que no son amnistiables ni indultables como los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Entre ellos el reclutamiento forzado de menores²⁰⁹. No serán objeto de amnistía ni indulto **ni de beneficios equivalentes** los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra -esto es, toda infracción del DIH cometida de forma sistemática -, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del **reclutamiento de menores**, todo ello conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma²¹⁰.

Por tanto, de ninguna manera pueden ser amnistiables o indultables, los delitos que a nivel internacional se han considerado como los más graves, como el reclutamiento forzado, ni tampoco deben de gozar de beneficios equivalentes. Argumentos que si bien se señalan dentro del Acuerdo, al momento de establecer las sanciones no están igual de

²⁰⁶ *Ibidem.*, pág. 144. Punto 7, JEP.

²⁰⁷ *Ibidem.*, pág. 147. Punto 19, JEP.

²⁰⁸ *Ibid.* Punto 22, JEP.

²⁰⁹ *Ibidem.*, pág. 148. Punto 24 y 25, JEP.

²¹⁰ *Ibidem.*, Pág. 151. Punto 40, JEP.

claros, pues por aplicación del principio de favorabilidad no debe dejarse a un lado el principio de proporcionalidad de la pena. Respecto a las sanciones indica:

Se distinguen las sanciones propias, las alternativas y las ordinarias. Las sanciones propias de la JEP, que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento, respecto a determinadas **infracciones muy graves**, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Siendo el periodo máximo, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, de ocho años. La JEP determinará las condiciones de restricción efectiva de libertad que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de la sanción, **condiciones que en ningún caso se entenderán como cárcel o prisión ni adopción de medidas de aseguramiento equivalentes.**

En el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante la Sala, las restricciones de los derechos y libertades serán menores que en el caso de reconocimiento de verdad y responsabilidad ante el Tribunal o que en el caso de no reconocimiento.

Las sanciones alternativas para infracciones muy graves que se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de 5 a 8 años. El periodo máximo de cumplimiento de sanciones alternativas, por la totalidad de las sanciones será de 8 años.

Las sanciones ordinarias se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, cumplirán las funciones previstas en las normas penales, sin perjuicio de que se obtengan redenciones en la privación de libertad, siempre y cuando el condenado se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, capacitación o estudio durante el tiempo que permanezca privado de libertad. En todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves. El periodo máximo de cumplimiento de sanciones ordinarias, por la totalidad de las sanciones impuestas, incluidos los concursos de delitos, será de 20 años. **Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento.**

El Acuerdo señala un listado de sanciones, las cuales podrán ser impuestas por el Tribunal para la Paz, de conformidad con el documento Jurisdicción Especial para la Paz, y deberán en cuenta: i) El grado de verdad otorgado por la persona, ii) La gravedad de la conducta sancionada, iii) El nivel de participación y responsabilidad, las circunstancias de mayor y menor punibilidad, y iv) Los compromisos en materia de reparación a las víctimas y garantías de no repetición.

De lo anterior, es fundamental comprender que dos personas que hayan cometido los mismos delitos (muy graves) pueden tener sanciones diferentes dependiendo de si reconocen o no responsabilidad y el momento en que lo hagan. Además que si en la Sala de reconocimiento admiten los hechos no accederán a penas efectivas restrictivas de libertad como prisión, sin importar la gravedad del o los delitos cometidos. Las únicas penas medianamente proporcionales a los delitos cometidos se impondrán cuando no reconozcan la responsabilidad. Por tanto, de estas consideraciones no es posible determinar si a las personas que hayan cometido alguno de los delitos establecidos en el Estatuto de Roma se les imponga las sanciones acordes a este instrumento y demás de DIDH como proporcionales, pues según como se encuentra establecido se puede dar

cabida a la subjetividad en la apreciación de la gravedad de la conducta y por tanto, en la consecuente sanción.

Al respecto, la Procuraduría General de la Nación ya ha resaltado lo establecido desde el Informe sobre las Actividades de Examen Preliminar de 2014 de la Corte Penal Internacional, en el cual se señala que entre los crímenes de guerra cometidos en Colombia, sobre los cuales tiene competencia ese organismo, está el “reclutamiento, alistamiento y utilización de niños para participar activamente en las hostilidades”²¹¹. En concordancia con ello, si el Estado no cumple con la obligación adquirida en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional de manera complementaria podrá entrar a analizar los hechos y condenar a los responsables de este delito.

Tampoco hay que olvidar que la Corte IDH ha estimado que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida²¹².

Conforme a lo establecido en el Acuerdo en la JEP, las personas integrantes de organizaciones rebeldes que hayan firmado un acuerdo de paz con el Gobierno, a efectos de reincorporación, **quedarán en efecto suspensivo las condenas derivadas de delitos competencia del Tribunal para la Paz puestas por la justicia ordinaria** o disciplinaria, hasta que estas condenas hayan sido tratadas por la Jurisdicción Especial para la Paz para lo de su competencia²¹³.

¿Por qué el suspenso?, por ser una decisión judicial conforme a las leyes colombianas no debe cumplir su efecto hasta que sea reemplazada por otro, o en dado caso, solo se podría suspender cuando este en conocimiento de un Tribunal y se dé un nuevo pronunciamiento. Pero lo preocupante es que a la fecha no se conformado el Tribunal Especial y ya están suspendiendo condenas.

La responsabilidad de los destinatarios del SIVJNR **no exime** al Estado de su deber de respetar y garantizar el pleno goce de los derechos humanos y de sus obligaciones, conforme al DIH y al DIDH²¹⁴. Por ejemplo:

²¹¹Procuraduría General de la Nación. Comunicado de Prensa 103. 12 de febrero de 2015. https://www.procuraduria.gov.co/portal/COMUNICADO-DE_PRENSA_DE_LA_PROCURADURIA_GENERAL_DE_LA_NACION__12_DE_FEBRERO_.new

²¹² Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez vs Guatemala*, *Óp. Cit.*, párrs. 191, 194 y 200; *Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”)*. *Óp. Cit.*, párrs. 228-230, 233 y 237.

²¹³ Gobierno Nacional de Colombia y FARC-EP, *Acuerdo Final...*, *Óp. Cit.*, pág. 69.

²¹⁴ *Ibidem.*, pág. 146. Punto 12, JEP.

Ordenan libertad de alias 'Martín Sombra', el carcelero de las Farc

Judicial 22 Jun 2017 - 3:38 PM
Por: Redacción Judicial

El complejo proceso contra el excomandante guerrillero será de conocimiento de la Justicia Especial para la Paz (JEP).



En contra de Mendoza existen seis condenas superiores a los 40 años cada una. Los fallos judiciales tienen relación con **homicidio agravado**, tentativa de homicidio, secuestro, extorsión, desplazamiento forzado, desaparición forzada, actos crueles e inhumanos, reclutamiento de menores, homicidio en persona protegida, terrorismo, rebelión, tortura, tratos crueles e inhumanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Fuente: <http://www.elspectador.com/noticias/judicial/ordenan-libertad-del-excomandante-guerrillero-martin-sombra-articulo-699601>

Que en casi de no realizarse con el Decreto 700/2017 se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017.

Respecto a lo dispuesto en el Acuerdo Final, ya Organismos se han manifestado, en el Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia por ejemplo se dijo:

El nuevo acuerdo de paz modifica y aclara el texto anterior. Si bien su conclusión fue muy bien acogida, los opositores siguieron insistiendo en que debían imponerse **penas más severas** a los dirigentes de las FARC-EP que hubiesen **cometido delitos graves** y en que esas personas no debían poder ocupar cargos políticos hasta que hubieran cumplido las sanciones impuestas por la jurisdicción especial para la paz. Las partes no aceptaron esos puntos. De allí, El 14 de diciembre se dio un paso decisivo hacia una **implementación más rápida** del acuerdo de paz cuando la Corte Constitucional aprobó **ampliar la autoridad** del Presidente para emitir decretos ley relativos a la implementación del acuerdo y un procedimiento acelerado “*fast-track*” para que el Congreso examinara y aprobara su programa legislativo²¹⁵.

El presidente de la República Juan Manuel Santos conforme a sus facultades extraordinarias del artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016 ha expedido una serie de Decretos Ley en mayo 2017 con el fin de implementar lo estipulado en el Acuerdo Final²¹⁶. La Corte Constitucional, mediante las Sentencias C-699 de 2016, y C-160 y C-174 de 2017, definió los criterios de validez constitucional que deben cumplir estos decretos leyes, los cuales son obligatorios, dada su trascendencia e importancia para el

²¹⁵ ONU. (2016) Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia. S/2016/1095. 23 de diciembre de 2016. Español, pág. 3.

²¹⁶ <http://www.acpaz.org/decretos-ley-de-mayo-2017-facultades-extraordinarias-del-articulo-2-del-acto-legislativo-01-de-2016/>

Estado Social de Derecho. Además a través del Acto Legislativo número 01 del 04 de abril de 2017 se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones, se incluye el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJNR) del cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz.

Actualmente, se encuentra en trámite de aprobación el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, pues la creación de la JEP y de los órganos que la componen ya cuenta con autorización constitucional dada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017, pero requiere de una regulación detallada mediante ley conforme al artículo transitorio 5 del mismo. El proyecto de ley contiene los principios que orientarán el funcionamiento de la JEP, su competencia material, temporal, personal y territorial, el derecho aplicable, la conformación de sus órganos y sus respectivas funciones, el régimen de sanciones y de extradición aplicable, así como las disposiciones sobre el gobierno y la administración de la JEP, y su respectivo régimen laboral, disciplinario y presupuestal.

Por su parte, la OACDDH en su informe de 2016²¹⁷ en el cual se refiere a los Acuerdos de Paz señala:

El 30 de diciembre se aprobó por vía rápida la Ley 1820, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistías, indultos y tratamientos penales especiales. La ley incluye referencias **abstractas** a los derechos de las víctimas, sin establecer mecanismos o procedimientos para asegurar su cumplimiento. También **presenta** disposiciones, **ambigüedades y vacíos que no cumplen con las normas internacionales** y socavan la centralidad que el Gobierno y las FARC-EP le habían dado previamente a los derechos de las víctimas. El Alto Comisionado está sumamente preocupado que estos factores, si no se abordan, pueden **favorecer la impunidad para los perpetradores de graves violaciones de DDHH y del DIH**. Si bien la Ley 1820 prohíbe el otorgamiento de amnistías o indultos en casos de graves violaciones de DDHH o del DIH. No obstante, prevé un programa de libertad condicional para funcionarios del Estado e integrantes de las FARC-EP que han estado privados de la libertad por cinco años o más, **sin tener en cuenta la gravedad de sus delitos**. El Alto Comisionado lamenta que, en un estado de derecho, no se haya asignado a una entidad independiente e imparcial, sin ninguna relación con los posibles beneficiarios, la tarea de postular los funcionarios públicos que serán considerados para la libertad condicional. Además, la ley no establece criterios objetivos y basados en derechos para evaluar la elegibilidad. Tampoco establece un sistema efectivo para el seguimiento y control de los miles de posibles beneficiarios, con el fin de evitar la obstrucción de la justicia y la intimidación de las víctimas y los testigos.

Esta preocupación mencionada por el Alto Comisionado es la que se comparte en este último capítulo, pues si bien el Acuerdo Final consagra que todas sus disposiciones se hacen conforme al DI es imprescindible que el desarrollo y ejecución de las actuaciones

²¹⁷OACNUDH., Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2016. A/HRC/34/3/Add.3, 16 de marzo de 2017, pág.7.

del Estado correspondan a las mismas. Es reiterada la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH y la manera como la ha establecido el Estado colombiano es *sui generis*, en caso que no cumpla lo requerido le puede conllevar a una responsabilidad internacional.

4. Adecuación

La adecuación del derecho interno a la CADH, conforme el artículo 2 de ésta, se debe realizar a la luz de la naturaleza misma de los derechos y libertades y de las circunstancias en las que se produce el ejercicio de adecuación, en forma que asegure la recepción, el respeto y la garantía de aquellos²¹⁸. Es razonable entender que la adecuación del derecho interno puede tomar al Estado cierto tiempo; sin embargo, dicho tiempo debe ser razonable²¹⁹.

El siguiente cuadro a través de una línea de tiempo, muestra el inicio del reclutamiento forzado, el que momento el Estado adquiere diferentes obligaciones internacionales del DIH, de DIDH, y del DPI, así como el momento en que el Estado empieza a tomar medidas. Reflejando así que por muchos años el Estado Colombiano no cumplió con su obligación de adecuación para garantizar los derechos a este grupo vulnerable; y que si posteriormente, poco a poco se ha ido adecuando, ahora dependerá de las medidas que tome conforme a la implementación del Acuerdo Definitivo para establecer si su normatividad es adecuada o no a los parámetros establecidos por el SIDH.

Finalmente, al determinar que el estado durante el transcurrir de los años ha incumplido diferentes obligaciones internaciones, y ha faltado a la debida diligencia se puede determinar hay un hecho ilícito internacional que puede conllevar a la responsabilidad internacional de Colombia.

²¹⁸ Corte IDH. *Caso Albán Cornejo y otros. Vs. Ecuador*. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 134.

²¹⁹ Corte IDH. *Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206, párr. 108.

Conclusiones

Dando respuesta a la pregunta problema de este trabajo ¿Se configura la responsabilidad internacional del Estado Colombiano en el SIDH por el reclutamiento forzado de menores realizado por la guerrilla de las FARC? se considera que el Estado si puede incurrir en responsabilidad internacional bajo el SIDH debido a que ha faltado a la debida diligencia al incumplir sus obligaciones internacionales de prevención, protección e investigación de este hecho. Sin embargo, respecto a la rehabilitación de los menores desvinculados si ha tomado medidas, por tanto, respecto a esta obligación no cabría responsabilidad. Finalmente, se determina que el Estado se encuentra en un momento crucial para hacer justicia respecto a este hecho tan grave: al infringir el DIH, vulnerar los DDHH y ser un crimen internacional, pues el conocimiento se le ha designado a un Tribunal Especial *sui generis*, con base a la justicia restaurativa, que en caso de no cumplir con los criterios ya establecidos tanto por la Corte IDH como por otros organismos internacionales puede generar también la responsabilidad internacional del Estado Colombiano.

Desglosando la conclusión general tenemos:

- Respecto al reclutamiento forzado de menores realizado por las FARC, de acuerdo a las consideraciones de la Corte IDH, el Estado Colombiano podrá ser declarado internacionalmente responsable, no por la comisión directa de los hechos si no por faltar a su deber de diligencia respecto a su obligación de prevenir y proteger a los menores de estos actos.
- Las FARC aunque no puedan ser responsables internacionalmente por la comisión de estos actos, pues no son actores del DI, a nivel interno faltaron al deber de respetar los Derechos Humanos de la población como en el caso del reclutamiento forzado y por tanto, deben ser investigados y responder por estos actos. En el caso que a nivel interno no se realicen las correspondientes investigaciones y se condene a los responsables de este delito, conforme a lo establecido en el DI: i) en el SIDH se puede generar una responsabilidad del Estado Colombiano por la falta de investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los Derechos Humanos; y ii) la CPI podrá de manera subsidiaria analizar la responsabilidad individual de quienes cometieron este crimen de guerra.
- Al iniciar el reclutamiento forzado de menores en 1975 y continuarse hasta el 2015, son 40 años en los cuales muchos niños fueron víctimas de graves vulneraciones a sus derechos y privados de su desarrollo en un entorno adecuado lo que demuestra que las posibles medidas de prevención tomadas por el Estado

no fueron efectivas. Pues si bien en 1997 se empezaron a tomar medidas, en los años de 1999-2000 los reclutamientos aumentaron; seguido de ello se crearon otras políticas de prevención pero se encontraron también altas cifras de reclutamiento entre 2012 y 2013. Ha sido únicamente hasta el 2016, con el Proceso de Paz con las FARC que han dejado de reclutar menores. Todas estas circunstancias permiten determinar que si bien el Estado delegó en algunas instituciones la obligación de tomar medidas para la prevención del reclutamiento, para que estas fueran efectivas se requería de una organización, colaboración y armonización entre los organismos del Estado, con el fin de llevar a cabo los proyectos, encontrar las causas y contrarrestar el reclutamiento.

- De las diferentes medias tomadas por el Estado no se ha podido determinar cuál sería el recurso adecuado y efectivo del que disponían las familias de los menores que eran reclutados por las FARC. Por tanto, es importante que el Estado adopte criterios claros sobre los procedimientos que deben seguir las víctimas o las familiares de las víctimas si en el futuro se presentan casos similares, que incluyan una determinación clara de las autoridades a las que se deban dirigir, y que el Estado establezca protocolos que permitan, entre otros, la identificación del lugar de la persona reclutada o desaparecida, en el menor tiempo posible.
- Respecto a las investigaciones, si bien en las bases de datos se encuentra un gran número bajo el conocimiento del ente encargado – La Fiscalía General de la Nación-, también se registra que la cifra de las mismas que se encuentra en etapa avanzada de juzgamiento o en ejecución de sanción es irrisoria. Además verificando las fechas de inicio de algunas de las investigaciones se encuentran que datan del año 2000, y a la fecha 2017 no hay sanción, excediendo el plazo razonable, requisito indispensable para las garantías judiciales.
- En cuanto a la obligación de rehabilitar y reintegrar, hasta este momento se puede determinar que esta ha sido efectiva, pues desde el inicio del programa del ICBF de atención a los menores desvinculados, a la fecha, se ha llevado a buen término. Ello se denota en que las necesidades de los menores se satisfacen y en que los menores que se encuentran en el proceso manifiestan lograr superar lo vivido y reintegrarse satisfactoriamente en la vida civil.
- Debido al gran lapso de tiempo en que se dio este fenómeno muchas víctimas del reclutamiento tuvieron que pasar toda su niñez dentro de este grupo guerrillero, sufriendo todas las vulneraciones a sus derechos que este hecho conlleva; quienes al desvincularse siendo adultos no se les podrá resarcir los daños causados. Pues

pasaron de víctimas a victimarios, dejando esta huella en sus vidas y en la historia, sin poder obtener una debida reparación de la misma.

- Las disposiciones del Acuerdo Final y las normas que lo desarrollen son de gran relevancia para el cumplimiento del Estado de sus obligaciones de protección, investigación y reparación de los menores víctimas del reclutamiento forzado y sus familias. Pues si no se cumplen los criterios establecidos no habrá una verdadera justicia, necesaria para estos hechos.
- De acuerdo con las diferentes investigaciones realizadas por diversas instituciones de carácter estatal o particular, se ha referido que la principal causa del reclutamiento es la falta de garantía de las necesidades básicas, en las zonas rurales donde son reclutados los menores, pues no tenían acceso a los derechos económicos, sociales y culturales como la alimentación, educación o trabajo. Siendo esta situación contraria a lo establecido en la CDN y en la OC-17/02 que señalan que el Estado debe realizar el mayor esfuerzo, de manera constante y deliberada, evitando retrocesos y demoras injustificadas para garantizarles estos derechos a los niños. Situación que si no se remedia, puede seguir generando graves vulneraciones.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS

- ANDRÉS SÁENZ DE SANTA MARÍA, P., *Sistema de Derecho Internacional Público*, Madrid, 2011.
- FAJARDO ARTURO, L., *Reclutamiento de niñas y niños como crimen internacional de las Farc en Colombia*, Ed Universidad Sergio Arboleda, Bogotá 2014.
- FERNÁNDEZ de CASA DEVANTE ROMANI, C. *Derecho Internacional de los Derechos Humanos*, Madrid, 2003.
- JIMÉNEZ PIERNAS, C., *Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea*. Ed. Tecnos, Madrid, 2011.
- MEDINA ARDILA, F., *La responsabilidad Internacional del Estado por actos de particulares: análisis jurisprudencial interamericano* (Colombia: Ministerio de Relaciones Exteriores).
- PASTOR RIDRUEJO J, A., *Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales*, Ed, Tecnos, Madrid, 2016.

PUBLICACIONES

- ABRAMOVICH, V. “Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. *Doctrina Corte IDH*. Buenos Aires, marzo 6 de 2013 - JA 2013-I, fascículo N° 10.

- CICR. *Derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos: Analogías y diferencias*. Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario, 01/ 2003.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA., *Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico.*, Informe Defensorial. Bogotá, 2014.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. *Reclutamiento ilícito en Buenaventura: caracterización de la situación de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes e indígenas, víctimas de reclutamiento ilícito*. Informe Defensorial., Bogotá, marzo 2014.
- DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA., *Justicia transicional: Voces y oportunidades para los niños, niñas y adolescentes en la construcción de la paz en Colombia*. Informe Defensorial. Bogotá, noviembre de 2014.
- GONZALVO, V. “Una reflexión en perspectiva jurídica internacional sobre la negociación entre las Farc-Ep y el Gobierno de Colombia”. *Instituto Español de Estudios Estratégicos*. Documento de Opinión 30/2015, 23 de marzo de 2015.
- HUMAN RIGHTS WATCH. “*APRENDERÁS A NO LLORAR*”: Niños Combatientes en Colombia. 17 de septiembre de 2003.
- MIJANGOS Y GONZÁLEZ. J., “La doctrina de la Drittwirkung Der Grundrechte en el jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, UNED, *Teoría y Realidad Constitucional*, núm. 20, 2007, pp. 583-608.
- MORENO FERNÁNDEZ, A., “La atribución al Estado de responsabilidad internacional por los hechos ilícitos de los particulares e intentos de flexibilización”. *REEI*. N°12, diciembre de 2006.
- FLORIANO ESCOBAR, R. “El reclutamiento ilegal de los menores en Colombia y su responsabilidad penal dentro del conflicto armado”. *Revista Principia Iuris*. Enero-Junio 2015, Vol. 12, No. 23 pp. 217-235.
- ONU. HR/PUB/11/01. *Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos Durante los Conflictos Armados*, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra, 2011.
- SPRINGER. N., *Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia*. Springer Consulting Services, Bogotá, 2012.
- UGARTE BOLUARTE, K. “La responsabilidad internacional de los Estados en materia de derechos humanos”. *Lex*, N° 17, Año XIV, 2016 – I.
- UNICEF, *Informe anual Colombia 2016*. UNICEF Colombia. 2017.
- USAID., OIM. *Abc sobre la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados*. 2007.
- WATCHLIST. *nadie en quien confiar. Los niños y el conflicto armado en Colombia*, abril de 2012.

INDICE DE LA PRÁCTICA

TRATADOS

- Convenios de Ginebra. I. *Para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña*. II. *Para aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar*. III. *Relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra*. IV. *Relativo a la Protección de la Población Civil*. Aprobados por la Conferencia Diplomática para

elaborar Convenios Internacionales destinados a proteger las víctimas de las guerras, 12 de agosto de 1949.

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos. “*Pacto de San José*”. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969.
- Protocolo Adicional (Protocolo II) relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (1977). Aprobado por la Conferencia Diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho humanitario aplicable en los conflictos armados, el 8 de junio de 1977.
- Convención sobre los Derechos del Niño. Adoptada por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.
- Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado por la 87ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, el 17 de junio 1999.
- Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. Aprobado por la Asamblea General el 25 de mayo de 2000.
- Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Roma, 17 de julio de 1988. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000.

JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

- ICJ., Judgment Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda), Reports 2005.
- TPIY. Causa Prosecutor v. Anto Furundžija, Causa N° IT-95-17/1-T, Sala de Primera Instancia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, fallo de 10 de diciembre de 1998.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

- ECHR., *Case Klass and others v. Germany*, Judgment of 6 September 1978, Serie A no. 28.
- ECHR., *Case Nachova and others v. Bulgaria [GC]*, Applications nos. 43577/98 and 43579/98 Judgment of 6 July 2005.
- ECHR., *Case Campbell and Cosans v. The United Kingdom*, Application no. 7511/76; 7743/76, Judgment of 25 February 1982, Series A, No. 48.
- ECHR., *Case of Engel and others v. The Netherlands*, Applications Nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72. Judgment of 8 June 1976.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- Corte IDH. *Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras.*, Fondo, Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.
- Corte IDH. *Caso Godínez Cruz Vs. Honduras.*, Fondo, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5.

- Corte IDH. *Caso Caballero Delgado y Santana vs. Colombia.*, Fondo, Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22.
- Corte IDH. *Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de enero de 1997. Serie C No. 30.
- Corte IDH. *Caso Loayza Tamayo Vs. Perú.*, Fondo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33.
- Corte IDH. *Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs Guatemala.*, Fondo, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
- Corte IDH. *Caso Las Palmeras Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Sentencia de 4 de febrero de 2000, Serie C No. 67.
- Corte IDH. *Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala.*, Fondo, Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70.
- Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.
- Corte IDH. *Caso Barrios Altos Vs. Perú.*, Fondo, Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.
- Corte IDH. *Caso Las Palmeras Vs. Colombia.*, Fondo, Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90.
- Corte IDH. *Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94.
- Corte IDH. *Caso Cantos vs Argentina.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97.
- Corte IDH. *Caso "Cinco Pensionistas" vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98.
- Corte IDH. *Caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras.*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99.
- Corte IDH. *Caso Bulacio Vs. Argentina.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100.
- Corte IDH. *Caso Maritza Urrutia vs Guatemala.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103.
- Corte IDH. *Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá.*, Competencia, Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104.
- Corte IDH. *Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107.
- Corte IDH. *Caso Molina Theissen Vs. Guatemala.*, Reparaciones y Costas, Sentencia de 3 de julio de 2004. Serie C No. 108.
- Corte IDH. *Caso 19 Comerciantes vs Colombia.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109.
- Corte IDH. *Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.
- Corte IDH. *Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111.
- Corte IDH. *Caso "Instituto de Reeducción del Menor" Vs. Paraguay.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112.
- Corte IDH. *Caso Tibi Vs. Ecuador.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.
- Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.*, Excepciones Preliminares, Sentencia de 23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118.
- Corte IDH. *Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119.

- Corte IDH. *Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120.
- Corte IDH. *Caso Huilca Tecse Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121.
- Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay.*, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125.
- Corte IDH. *Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124.
- Corte IDH. *Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 133.
- Corte IDH. *Caso de la "Masacre de Mapiripán" Vs. Colombia.*, Fondo, Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134
- Corte IDH. *Caso Gómez Palomino Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136.
- Corte IDH. *Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú.*, Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137.
- Corte IDH. *Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.
- Corte IDH. *Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaya Vs. Paraguay.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de marzo de 2006. Serie C No. 146.
- Corte IDH. *Caso Baldeón García Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147.
- Corte IDH. *Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia.*, Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148.
- Corte IDH. *Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil.*, Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149.
- Corte IDH. *Caso Servellón García y otros Vs. Honduras.*, Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152.
- Corte IDH. *Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153.
- Corte IDH. *Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.
- Corte IDH. *Caso Vargas Areco Vs. Paraguay.*, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 155.
- Corte IDH. *Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160.
- Corte IDH. *Caso La Cantuta Vs. Perú.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. 162.
- Corte IDH. *Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163.
- Corte IDH. *Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador.*, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170.
- Corte IDH. *Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador.*, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C No. 171.
- Corte IDH. *Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192.
- Corte IDH. *Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206.

- Corte IDH. *Caso Familia Barrios Vs. Venezuela.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. 237.
- Corte IDH. *Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240.
- Corte IDH. *Caso Furlán y familiares Vs. Argentina.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246.
- Corte IDH. *Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador.*, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 25 de octubre de 2012. Serie C No. 252.
- Corte IDH. *Caso Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") Vs. Guatemala.*, Fondo Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 noviembre de 2012. Serie C No. 253.
- Corte IDH. *Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones, Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259.
- Corte IDH. *Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia.*, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 20 de noviembre de 2013. Serie C No. 270.

Medidas Provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Corte IDH. *Asunto de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó respecto Colombia.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002.
- Corte IDH. *Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002.
- Corte IDH. *Asunto Comunidades del Jiguamiandó y del Curvaradó respecto Colombia.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003.
- Corte IDH. *Asunto Pueblo Indígena Sarayaku respecto Ecuador.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de julio de 2004.
- Corte IDH. *Asunto Pueblo Indígena Kankuamo respecto Colombia.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 5 de julio de 2004.
- Corte IDH. *Asunto de las Penitenciarías de Mendoza respecto Argentina.* Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2005.

OPINIONES CONSULTIVAS

Corte Interamericana de Derechos Humanos

- Corte IDH. *Opinión Consultiva. OC-6/86.* La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6.
- Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-16/99.* El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del debido proceso legal. 1 de Octubre De 1999. Serie A No.16.

- Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-17/02*. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17.
- Corte IDH. *Opinión Consultiva OC-18/03*. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18.
- Corte IDH. *Opinión Consultiva OC 19/05*. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41 y 44 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). 28 de noviembre de 2005. Serie A No. 19.

Corte Internacional de Justicia

- ICJ., Advisory Opinion, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Reports 1996.
- ICJ., Advisory Opinion, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Reports 2004.

OBSERVACIONES COMITÉS NACIONES UNIDAS

- ONU. Comité de los Derechos del Niño. *Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño: Colombia.*, CRC/C/15/Add.137, 16 de octubre de 2000, 25º periodo de sesiones.
- ONU. Comité de Derechos Humanos. *Observación general N° 29*, sobre los estados de excepción, (artículo 4), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 de agosto de 2001 durante la 1950ª reunión.
- ONU. Comité de Derechos Humanos. *Observación general N° 31*, sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el Pacto, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 de mayo de 2004 durante la 2187ª sesión.

RESOLUCIONES NACIONES UNIDAS

- ONU. S/RES/1379 (2001), *Resolución 1379*. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 4423ª sesión, celebrada el 20 de noviembre de 2001.
- ONU., A/RES/56/83 (2002), *Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos*. Resolución aprobada por la Asamblea General, 28 de enero de 2002.
- ONU. S/RES/1894 (2009), *Resolución 1894*. Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6216ª sesión, celebrada el 11 de noviembre de 2009.

INFORMES

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

- CIDH., *Caso Juan Carlos Abella c. la Argentina*, caso 11.137, Informe N° 55/97, 18 de noviembre de 1997.

Naciones Unidas

- ONU. Asamblea General de Naciones Unidas. A/54/430. *Informe del Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en los conflictos armados*, 1 de octubre de 1999. Español.
- ONU. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2000/11. *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colombia 1999*, 9 de marzo de 2000.
- ONU. Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2001/15. *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*, 20 de marzo de 2001.

- ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/4/48. *Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2006*, 5 de marzo de 2007.
- ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/10/032. *Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2008*, 19 de febrero de 2009.
- ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/25/19/Add.3. *Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Adición Situación de los derechos humanos en Colombia 2013*, 24 de enero de 2014.
- ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/11/31, *Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General. Resultados de la consulta de expertos sobre la cuestión de la protección de los derechos humanos de la población civil en los conflictos armados*, 4 de junio de 2009.
- ONU. Consejo de Derechos Humanos. A/HRC/34/3/Add.3. *Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia 2016*, 16 de marzo de 2017.
- ONU. Consejo de Seguridad. S/2016/1095. *Informe del Secretario General sobre la Misión de las Naciones Unidas en Colombia*. 23 de diciembre de 2016. Español.

NORMATIVIDAD INTERNA

- Constitución Política de la República de Colombia. Gaceta Constitucional número 114 del 7 de julio de 1991.
- Ley N° 12/1991. Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Diario oficial. Año CXXVII. N. 39640. 22, enero, 1991.
- Ley N° 418/1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Año CXXXIII. N. 43201. 26, diciembre, 1997.
- Ley N° 548/1999. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997 y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Año CXXXV. N. 43827. 23, diciembre, 1999.
- Ley N° 599/2000. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial. Año CXXXVI. N. 44097. 24, julio, 2000.
- Ley N° 704/2001. Por medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Diario oficial. Año CXXXVII. N. 44628. 27, noviembre, 2001.
- Ley N° 782/2002. Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas de sus disposiciones. Diario oficial. Año CXXXVIII. N. 45043. 23, diciembre, 2002.
- Ley N° 833/2003. Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados". Diario oficial. Año CXXXIX. N. 45248. 14, julio, 2003.
- Ley N° 1.098/2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Diario oficial. Año CXLII. N. 46446. 8, noviembre, 2006.
- Ley N° 1450/2011. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. Diario oficial. Año CXLVII. N. 48102. 16, junio, 2011.
- Ley N° 1820/2016. Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones. Diario oficial. Año CLI. N.50.102. 30, diciembre, 2016.

- Acto Legislativo N° 01/2016. Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Diario oficial. Año CLI. N. 49927. 7, julio 2016.
- Acto Legislativo N° 01/2017. Por medio del cual se crea un título de disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Año CLII No. 50196, 4 abril, 2017.
- Decreto N° 2737/1989. Por el cual se expide el Código del Menor. Diario oficial. Año CXXVI. N. 39080. 27, noviembre, 1989.
- Decreto N° 1137/1999. Por el cual se organiza el Sistema Administrativo de Bienestar Familiar, se reestructura el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones. Diario oficial. Año CXXXV. N. 43623. 29, junio, 1999.
- Decreto N° 4690/2007. Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por grupos organizados al margen de la ley. Diario oficial. Año CXLIII. N. 46831. 3, diciembre, 2007.
- Decreto N° 2897/2011. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica, las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integra el Sector Administrativo de Justicia y del Derecho. Diario oficial. Año CXLVII. N. 48158. 11, agosto, 2011.
- Decreto N° 4138/2011. Por el cual se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas y se establecen sus objetivos y estructura. Diario oficial. Año CXLVII. N. 48242. 3, noviembre, 2011.
- Decreto N° 1649/2014. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Diario oficial. Año CL. N. 49262. 2, septiembre, 2014.
- Decreto N° 1569/2016. Por el cual se modifica el Decreto número 4690 de 2007. Diario oficial. Año CLII. N. 50015. 03, octubre, 2016.
- Decreto N° 700/2017. Por el cual se precisa la posibilidad de interponer la acción de hábeas corpus en casos de prolongación indebida de la privación de la libertad derivados de la no aplicación oportuna de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto-ley 277 de 2017. Diario oficial. Año CLII. N. 50221. 2 mayo, 2017.

JURISPRUDENCIA NACIONAL

Corte Constitucional Colombiana.

- Sentencia C-225/95. Revisión constitucional del "Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II)" hecho en Ginebra el 8 de junio de 1977, y de la Ley 171 del 16 de diciembre de 1994, por medio de la cual se aprueba dicho Protocolo. Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero. 18 de mayo de 1995.
- Sentencia C-370/06. Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005 "Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios", y contra la ley en su integridad. Magistrado ponente: Manuel José Cepeda Espinosa. 18 de mayo de 2006.

- Sentencia C-379/16. Revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria No. 94/15 Senado – 156/15 Cámara “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva. 18 de julio de 2016.
- Sentencia C-699/2016. Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 y 2 (parciales) del Acto Legislativo 01 de 2016 ‘Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’. Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa. 13 de diciembre de 2016.
- Sentencia C-160/2017. Revisión de constitucionalidad del Decreto Ley 2204 de 2016 “Por el cual se cambia la adscripción de la Agencia de Renovación del Territorio”. Magistrada ponente: Gloria Stella Ortiz Delgado. 9 de marzo de 2017.
- Sentencia C-174/2017. Revisión constitucionalidad del Decreto ley 121 de 2017 ‘por el cual se adiciona un capítulo transitorio al Decreto 2067 de 1991’. Magistrada ponente: María Victoria Calle Correa. 22 de marzo de 2017.

OTRAS DISPOSICIONES A NIVEL INTERNO

- Defensoría del Pueblo Colombia. *La Niñez en el Conflicto Armado Colombiano*. Informe 2002. Disponible en: <https://www.unicef.org/colombia/pdf/boletin-8.pdf>
- República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación. Consejo Nacional de Política Económica y Social. *Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados*. Documento Conpes 3673., Bogotá, 19 de julio de 2010.
- CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Secretaría Técnica Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley. *Prevenir el reclutamiento una tarea de todos: Adaptación para niños, niñas y adolescentes*. Documento Conpes 3673 de 2010. Bogotá, agosto de 2013.
- CONSEJERIA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Secretaría Técnica Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes por Grupos Organizados al Margen de la Ley. *Las rutas para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados: Cuaderno No 1: Guía para la implementación de la ruta de prevención en protección*. Bogotá, diciembre 2013.
- ICBF., Programa de Atención Especializada para el restablecimiento de derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley., Observatorio del Bienestar de la Niñez. 2014.
- ICBF., Programa de atención para el restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) Julio-Diciembre 2015. Observatorio del Bienestar de la Niñez. Septiembre 2016.
- Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). *Comunicado Conjunto #70 “Acuerdo sobre la salida de menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los*

demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”, La Habana -Cuba, 15 de mayo de 2016.

- Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). *Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*. Bogotá. 24 de noviembre de 2016.

PRENSA

- SOCIAL WATCH: erradicación de la pobreza y justicia de género. *Colombia: Persiste el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes*. 15 de febrero de 2012. Disponible en: <http://www.socialwatch.org/es/node/14315>
- SEMANA. *Los niños y el conflicto armado en Colombia: el retrato de la infamia*. 5 de marzo de 2012. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/los-ninos-conflicto-armado-colombia-retrato-infamia/257431-3>
- EL ESPECTADOR. *Unos 3.000 niños reclutaron las Farc*. 15 Septiembre de 2013. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/unos-3000-ninos-reclutaron-farc-articulo-446581>
- EL ESPECTADOR. *Se agudiza el reclutamiento forzado de menores en Cauca*. 18 de septiembre de 2013. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/se-agudiza-el-reclutamiento-forzado-de-menores-cauca-articulo-447204>
- EL ESPECTADOR. *Advierten riesgo de reclutamiento forzado de menores en Bolívar*. 21 de marzo de 2014. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-riesgo-de-reclutamiento-forzado-de-menores-bo-articulo-482162>
- SEMANA. *El 47 % de los integrantes de las FARC fue reclutado en la niñez*. 29 de octubre 2014. Disponible en: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-47-de-los-integrantes-de-las-farc-fueron-reclutados-siendo-ninos/407422-3>
- Defensoría del Pueblo de Colombia., *Cada mes 10 niños, niñas y adolescentes son reclutados por los grupos armados ilegales*. 15 de diciembre de 2014. Disponible en: <http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/2993/Cada-mes-10-ni%C3%B1os-y-adolescentes-son-reclutados-por-los-grupos-armados-ilegales-reclutamiento-forzado-ni%C3%B1os-conflicto-armado-.htm>
- Procuraduría General de la Nación. Comunicado de Prensa 103. 12 de febrero de 2015. Disponible en: <https://www.procuraduria.gov.co/portal/COMUNICADO-DE-PRENSA-DE-LA-PROCURADURIA-GENERAL-DE-LA-NACION-12-DE-FEBRERO-.news>
- EL TIEMPO. *Las Farc aún guardan silencio frente a niños que tienen en sus filas*. 13 de febrero de 2015. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15240435>
- Fiscalía General de la Nación. *Las FARC reclutaron ilícitamente a 11.556 menores desde 1975*: Fiscal (e) Jorge Perdomo. 16 de mayo de 2016 <http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/destacada/las-farc-reclutaron-ilicitamente-a-11-556-menores-desde-1979-fiscal-e-jorge-perdomo/>
- RTVE. *La Fiscalía colombiana denuncia que las FARC reclutaron a 11.556 menores desde 1975*. 17 de mayo de 2016. Disponible en: <http://www.rtve.es/noticias/20160517/fiscalia-colombiana-denuncia-farc-reclutaron-11556-menores-desde-1975/1351423.shtml>

- EL ESPECTADOR. *Las cifras sobre los niños y la guerra*. 08 de junio de 2016. Disponible en: <http://colombia2020.elespectador.com/pais/las-cifras-sobre-los-ninos-y-la-guerra>
- NIETO, C. *Lo bueno y lo malo del acuerdo de desvinculación de menores de las FARC*. 26 de junio de 2016. Disponible en: <http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/9537-lo-bueno-y-lo-malo-del-acuerdo-de-desvinculaci%C3%B3n-de-menores-de-las-farc.html>
- Séptima División del Ejército Nacional. *Ejército previene reclutamiento forzado y utilización de menores en el Chocó*. 24 de octubre de 2016. Disponible en: <http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=404545>

SITIOS WEB

- ACNUR. Pobreza infantil y reclutamiento forzoso. Comité Español. Derechos y valores. Disponible en: <https://eacnur.org/blog/pobreza-infantil-reclutamiento-forzoso/>
- Oficina del Representante Especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados. *Causas fundamentales del reclutamiento de niños*. Disponible en: <https://childrenandarmedconflict.un.org/es/efectos-del-conflicto/causas-fundamentales-del-reclutamiento-de-ninos/>
- Centro Internacional para la Justicia Transicional. La Justicia transicional. Disponible en: <https://www.ictj.org/es>
- Instituto de Estudio para el Desarrollo y la Paz – Indepaz-. *Decretos Ley de mayo 2017 – Facultades extraordinarias del artículo 2 del Acto Legislativo 01 de 2016* <http://www.acpaz.org/decretos-ley-de-mayo-2017-facultades-extraordinarias-del-articulo-2-del-acto-legislativo-01-de-2016/>
- Ministerio de Justicia. Justicia transicional en Colombia. <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colombia>

ANEXOS

1. Recortes de Prensa.
2. Respuesta a Derecho de Petición. Dirección Nacional de Políticas Públicas Fiscalía General de la Nación.
3. Respuesta Derecho de Petición. Dirección de Análisis y Contexto-DINAC de la Fiscalía General de la Nación.
4. Respuesta a derecho de petición Defensoría del Pueblo.
5. Respuesta a derecho de petición de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos de la Secretaría Técnica Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.

ANEXO No. 1 RECORTES DE PRENSA

COLOMBIA: PERSISTE EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Published on Wed, 2012-02-15 07:39



Foto: Radio Caracol

inminente riesgo de reclutamiento".

Entre 8.000 y 14.000 niños, niñas y adolescentes revistan en los diversos bandos del conflicto armado colombiano, según el Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes, punto focal de Social Watch en ese país), exigen a las autoridades estatales proteger a aquéllos "en

Fuente: <http://www.socialwatch.org/es/node/14315>

Semana 35 años | IDEAS QUE LIDERAN

NACIÓN | 5/3/2012 12:00:00 AM

Los niños y el conflicto armado en Colombia: el retrato de la infamia



En su segundo informe sobre la situación de los niños y el conflicto armado en Colombia, durante enero del 2009 y agosto del 2011, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se refirió a las "graves violaciones de las que son objeto los niños en Colombia", como el reclutamiento y la utilización por grupos armados, las muertes y las mutilaciones, los actos de violencia sexual, los secuestros, los ataques contra escuelas y hospitales y la denegación del acceso humanitario.

En el documento la ONU realiza unas **recomendaciones al Gobierno** para reforzar las medidas de protección de los niños afectados por el conflicto armado. Se exige al Gobierno avanzar más en la "separación efectiva y sistemática de los niños de los grupos armados no estatales" y dar prioridad a este punto en un posible diálogo de paz.

Fuente: <http://www.semana.com/nacion/articulo/los-ninos-conflicto-armado-colombia-retrato-infamia/257431-3>

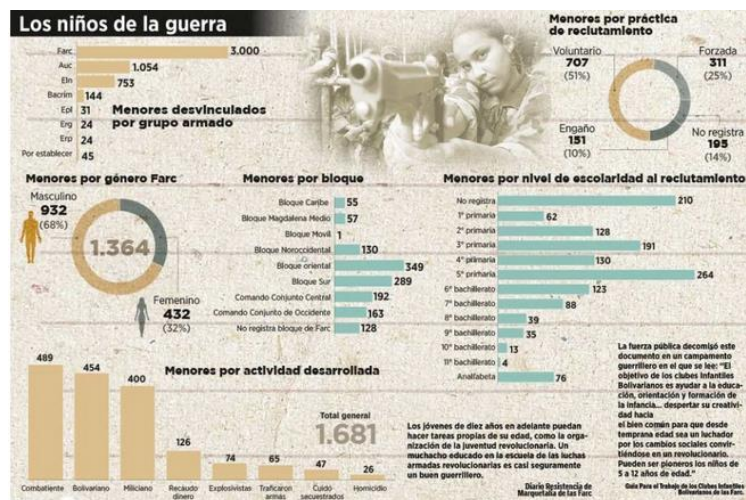
EL ESPECTADOR

Unos 3.000 niños reclutaron las Farc

Judicial 15 Sep 2013 - 9:00 PM
Por: JUAN DAVID LAVERDE PALMA /

El Espectador revela un informe de la Fiscalía sobre cómo la guerrilla utilizó a menores de edad para perpetrar decenas de delitos.

[...]En el denominado 'Diario resistencia de Marquetalia' las Farc señalaron lo siguiente: "Los jóvenes **de 10 años en adelante** pueden hacer tareas propias de su edad, como la organización de la juventud revolucionaria. Un muchacho educado en la escuela de las luchas armadas revolucionarias es casi seguramente un buen guerrillero".



Fuente: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/unos-3000-ninos-reclutaron-farc-articulo-446581>

EL ESPECTADOR

Se agudiza el reclutamiento forzado de menores en Cauca

Política 18 Sep 2013 - 3:02 PM

La advertencia la hizo la Defensoría del Pueblo y responsabilizó a las Farc.

La Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades nacionales por el incremento del fenómeno del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales que operan en el norte del departamento del Cauca, particularmente de la guerrilla de las Farc.

[...]El informe destaca que dicho grupo guerrillero, ha incrementado las milicias, buscando desestabilizar los tejidos sociales, fracturar las urdimbres comunitarias y obstaculizar los procesos organizativos. De la misma forma, destaca que durante 2012 se denunció el reclutamiento de otros 8 menores de edad [...]

Fuente: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/se-agudiza-el-reclutamiento-forzado-de-menores-cauca-articulo-447204>

Las Farc aún guardan silencio frente a niños que tienen en sus filas

Más de 8.000 desmovilizados de la guerrilla fueron reclutados en la niñez.



Por: JUSTICIA | 13 de febrero de 2015, 02:20 am

Aunque por primera vez en su historia **se comprometen a restringir** una de sus prácticas más crueles en el conflicto, el reclutamiento de menores, las Farc siguieron guardando silencio frente a la entrega de todos los niños y adolescentes que tienen en sus filas.

[...]La guerrilla no explicó por qué determinó los 17 años y no los 18 –la mayoría de edad en Colombia– para aplicar la ‘veda’. En una de sus directrices internas, en los 90, ese grupo fijó como edad mínima de reclutamiento los 15 años (la edad límite fijada por el DIH), pero nunca la cumplió.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15240435>

EL ESPECTADOR

Advierten riesgo de reclutamiento forzado de menores en Bolívar

Política 21 Mar 2014 - 7:26 AM

Así lo advierte un completo informe de la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio realizó durante cuatro días una visita humanitaria al municipio de Achí (Bolívar), en la cual pudo verificar las quejas de la comunidad en relación con las presión que ejercen los grupos armados ilegales, particularmente para reclutar a menores de edad.

[...]Situación similar a la de estos tres municipios y de Achí enfrentan los habitantes de Tiquisio y Norosí, advierte la Defensoría del Pueblo Regional Magdalena Medio y asegura que la falta de educación es uno de los factores que aumenta el riesgo de ser víctimas de reclutamiento forzado y utilización por parte de estructuras ilegales.

Fuente: <http://www.elespectador.com/noticias/politica/advierten-riesgo-de-reclutamiento-forzado-de-menores-bo-articulo-482162>

El 47 % de los integrantes de las FARC fue reclutado en la niñez

Así lo dice un revelador estudio de la Universidad Sergio Arboleda.

Un revelador y dramático informe muestra que el 47 % de los integrantes actuales de la guerrilla de las FARC fueron reclutados siendo niños. El estudio busca ser un "llamado de atención" sobre esta práctica, considerada como el crimen más grave de los producidos durante el conflicto armado en Colombia.

Atendiendo a datos aportados por los propios desmovilizados de este grupo subversivo y documentos oficiales, casi la mitad de los cerca de 8.000 guerrilleros actuales que conforman las FARC entraron al grupo armado siendo menores, dijo en una entrevista con la agencia de noticias EFE el responsable de la investigación, Luis Andrés Fajardo.

Fuente: <http://www.semana.com/nacion/articulo/el-47-de-los-integrantes-de-las-farc-fueron-reclutados-siendo-ninos/407422-3>

EL TIEMPO

ICBF ha atendido en 15 años a 5.708 niños desvinculados del conflicto

Estos sobrevivientes lograron huir de sus reclutadores o fueron recuperados por las Fuerzas Armadas.



Por: VIDA | 12 de febrero de 2015, 03:23 pm

La gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF entre noviembre de 1999 y enero del 2015 han ingresado al programa de Atención Especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En total se han atendido **5.708 víctimas de reclutamiento que han sobrevivido porque lograron huir o fueron recuperados por las Fuerzas Armadas de Colombia.**

Los más vulnerados han sido adolescentes entre 16 años (1.603 víctimas) y 17 años (2.129).

Sin embargo, se han atendido niños desde los 9 años y jóvenes que superan los 18. El 71 por ciento son hombres y el 29 por ciento mujeres.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15236761>

Por: CARLOS GUEVARA | 15 de febrero de 2015, 12:53 am

En medio del conflicto

Otra cara amarga de la violencia contra los niños es el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Se calcula que, entre 1985 y noviembre del 2014, más de 7.700 menores sufrieron este flagelo, especialmente en Antioquia, Meta, Caquetá y Cauca.

Investigaciones hechas con niños recuperados de esos grupos mostraron que siete de cada 10 sufrieron abusos sexuales antes de cumplir los 14 años, bien sea en su entorno familiar o, posteriormente, dentro de las filas de esas organizaciones.

El jueves, durante la conmemoración del Día internacional contra el reclutamiento y la utilización de menores en grupos armados ilegales, el ICBF reveló que se ha logrado recuperar a más de 5.600 de ellos, algunos con apenas 9 años de edad

[...] [Urge mayor inversión](#)

Esther Ruiz, especialista de Protección de Unicef, opina que Colombia tiene una legislación avanzada y programas fuertes en la protección de los derechos de los niños, pero aclara que no son suficientes: “Hay que invertir más en la niñez. Muchos países están demostrando que la inversión en educación y en equidad, para que los niños puedan comer bien todos los días o para tener una escuela de calidad, es realmente el medio de comenzar a romper el ciclo de la violencia”, afirma.

Fuente: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15249536>



PAÍS 8 JUN 2016 - 3:46 PM

Las cifras sobre los niños y la guerra

Hoy, 177 municipios del país tienen alta probabilidad de reclutamiento. Gobierno pide a la guerrilla compromiso de no reclutar más.

Por: Redacción Colombia2020



Según el Tribunal Internacional sobre la Infancia afectada por la Guerra y la Pobreza, entre 14 mil y 17 mil menores hacen parte de las filas de los grupos armados ilegales en Colombia, entre guerrillas y bandas criminales.

Archivo El Espectador

[...] Y la Defensoría del Pueblo reporta que desde 2004 hasta 2014 se han emitido 246 informes de riesgo, en los cuales se enumeran amenazas o casos de reclutamiento en 470 municipios de Colombia.

Fuente: <http://colombia2020.elespectador.com/pais/las-cifras-sobre-los-ninos-y-la-guerra>

rtve

Noticias Televisión Radio Deportes Infantil Alacarta El Tiempo

» Noticias » Mundo » Latinoamérica » Colombia



Dos niños en un colegio en Toribio (Colombia) junto a un cartel que indica la prohibición de llevar armas EFE

La Fiscalía colombiana denuncia que las FARC reclutaron a 11.556 menores desde 1975

- Denuncia que hubo una "política sistemática y generalizada" durante 40 años
- Atribuye esta política a los máximos jefes de la guerrilla, como Iván Márquez
- Se crearon grupos como "los clubes infantiles bolivarianos"

17.05.2016 | actualización 05h52

Por
RTVE.es | EFE

[...] El fiscal general ha mencionado entre los "mayores reclutadores" de las FARC al actual jefe negociador de esa guerrilla en La Habana, "**Iván Márquez**", alias de Luciano Marín, a quien le atribuyen "más de 180 casos". También ha citado a Isaías Trujillo, con más 200 casos, y Rubín Moro, señalado de unos 60 reclutamientos, entre otros.

"Pudimos establecer que esta política de reclutamiento ilícito es una política perfectamente atribuible al Secretariado y al Estado Mayor" de las FARC, ha apuntado Perdomo.

Fuente: <http://www.rtve.es/noticias/20160517/fiscalia-colombiana-denuncia-farc-reclutaron-11556-menores-desde-1975/1351423.shtml>

DIV07
SEPTIMA DIVISIÓN DEL
EJÉRCITO NACIONAL

Director comandado en el área web

EJÉRCITO
NACIONAL DE COLOMBIA

CONOZCANOS DERECHOS HUMANOS BRIGADAS SERVICIO AL CIUDADANO MEDIOS INFORMATIVOS FE EN COLOMBIA MULTIMEDIA

**SEPTIMA DIVISIÓN DEL
EJÉRCITO NACIONAL**

Ejército previene reclutamiento forzado y utilización de menores en el Chocó

24 de octubre de 2016

Con campañas de sensibilización como Basta Aquí Soy Libre del Ministerio de Defensa Nacional, el Estado colombiano busca hacer efectiva la política de Prevención de reclutamiento ilícito y utilización de menores de edad en el país, es por eso, que la Fuerza de Tarea Conjunta Titán con el apoyo del Grupo de Asesor de Comandante (GAC), el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado, el Grupo de Protección de la Infancia y Adolescencia de Policía Chocó y Comisarías municipales, viene realizando conversatorios sobre la prevención de reclutamiento forzado y utilización de menores en los municipios de Quibdó, Cértégui, Istmina, Unión Panamericana, Lloró y Condoto.

Fuente: <http://www.septimadivision.mil.co/?idcategoria=404545>

ANEXO NO. 2. RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN. DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.



Radicado No. 20179430001641

Oficio No.

21/06/2017

Página 1 de 2

DNPP

Bogotá, D.C.

Señora

MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA

Cra 118b No 23b 78 -

Bogotá - D.C.

ASUNTO: Respuesta a derecho de petición 20176110429062

Señora Meléndez,

De manera atenta me permito remitir la respuesta a su solicitud sobre el delito de Reclutamiento Ilícito art. 162 según el Código Penal Colombiano, por parte de los integrantes de las FARC.

1. El sistema de información SPOA¹ reporta la siguiente información:
 - El número de indiciados por NUNC² registrados con alguna actuación de acusación es de 22.
 - El número de indiciados por NUNC registrados con alguna actuación de condena o sanción es de 12.
 - El número de indiciados en NUNC es de 1.203
2. El sistema de información SIJUF³ reporta la siguiente información:
 - El número de sindicados por radicado registrados con alguna actuación de acusación es de 72.

¹ El SPOA es el sistema de información del sistema penal oral acusatorio de la ley 906 de 2004 y la ley 1098 de 2006. Este sistema registra hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que ocurrieron a partir de enero del año 2005.

² Número Único de Noticia Criminal.

³ El SIJUF es el sistema de información de la ley 600 de 2000. Este sistema registra hechos puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación que ocurrieron antes de enero del año 2005.



Radicado No. 20179430001641

Oficio No.

21/06/2017

Página 2 de 2

DNPP

- El número de sindicatos por radicado registrados con alguna actuación de condena es de 27.
- El número de sindicatos por radicado es de 1.439.

Cordialmente,

MIGUEL EMILIO LA ROTA
Director Nacional de Políticas Públicas y Planeación

Proyectó: Harbey Rodríguez Rincón

**ANEXO NO. 3. RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN. DIRECCIÓN DE
ANÁLISIS Y CONTEXTO-DINAC DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**



Radicado No. 20177710034151

Oficio No.

23/05/2017

Página 1 de 3

DINAC 00899

Bogotá, D.C. 31 MAY 2017

Señor (a)

MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA

Carrera 118b No 23b 78 -

Bogotá - D.C.

ASUNTO: Respuesta solicitud de información Reclutamiento Ilícito

Cordial saludo,

De manera atenta informo en relación con la solicitud de la referencia, según la cual requiere saber sobre investigaciones, acusaciones y juzgamientos adelantados por el delito de reclutamiento ilícito atribuido a las Farc-Ep.

Consultado los sistemas de información misionales se tienen registradas cuatro mil doscientos diecinueve (4.219) investigaciones por el delito de reclutamiento ilícito atribuido probablemente a las Farc-EP.

LEY PROCEDIMENTAL	No. INVESTIGACIONES
LEY 600	724
LEY 906	1.568
LEY 975	1.927
TOTAL	4.219

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac con base a los registros de los sistemas de información de Sijuf, Spoa y Sijyp. Septiembre de 2016.

El Sistema de Información Judicial (Sijuf) al 1 de mayo de 2017, se tienen registradas 135 actuaciones asociadas a resoluciones de acusación.



Radicado No. 20177710034151

Oficio No.

23/05/2017

DINAC

Página 2 de 3

ACTUACIÓN	No. ACTUACIONES
CALIFICACION CON RESOLUCION DE ACUSACION	74
EJECUTORIA DE RESOLUCION ACUSACION	61
TOTAL GENERAL	135

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac con base a los registros del sistema de información de Sijuf. Mayo de 2017.

Según registro consignado en el aplicativo de sentencias con que cuenta la Dirección de Análisis y Contextos, se identifican 6 sentencias condenatorias en primera instancia y 1 de segunda instancia.

Instancia	Tipo Decisión	Fecha Sentencia	Nombres y Apellidos	Tiempo en Meses	Sanción Pecuniaria
Primera	Condenatoria	3/06/2003	Luis Edgar Devia Silva	164	1380 SMLMV
			Miltón de Jesús Toncel Perdomo		
			Ezequiel Huelguia Cruz		
			José Benito Cabrera		
			Floresmiro Burbano		
			Pedro Antonio Marín		
			Luciano Marín Arango		
			Guillermo León Saenz Vargas		
			Noel Mata Mata		
			Jorge Briceño Suarez		
Primera	Condenatoria	9/07/2009	Elda Neyis Mosquera Garcia	240	1.050 SMLV
Primera	Condenatoria	4/12/2009	Wilmar Antonio Marín Cano	121	1.012,5 SMLMV
			Pedro Antonio Marín		
Primera	Condenatoria	3/05/2010	Pedro Luis Pino Valderrama	39	300 SMLMV
Primera	Condenatoria	23/09/2010	José Aquileo Herrera Tellez	121	1012,5 SMLMV
			Guillermo León Saenz Vargas		
			Luciano Marín Arango		
			Noel Mata Mata		
			Rodrigo Londoño Echeverry		
			Jorge Briceño Suarez		
			Janer Godoy Uribe		



Radicado No. 20177710034151

Oficio No.

23/05/2017

Página 3 de 3

DINAC

Instancia	Tipo Decisión	Fecha Sentencia	Nombres y Apellidos	Tiempo en Meses	Sanción Pecuniaria
Primera	Condenatoria	12/05/2011	Edilberto Londoño Arguello	39	\$92,950,000
Segunda	Apelación	20/10/2011	Edilberto Londoño Arguello	39	\$92,950,000

Fuente: Grupo de Gestión de Información de la Dinac

Las demás sentencias pueden ser consultadas a través del Consejo Superior de la Judicatura.

Cordialmente,

Martha Janeth Mancera

Directora Nacional de Análisis y Contextos

Anexo: SIN

Proyectó: - Alejandra Parra – Profesional de Gestión

Revisó y Aprobó: Leonardo Cabana – Coordinador

ANEXO NO. 4. RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO



Bogotá D.C., junio 6 de 2017



DEFENSORÍA DEL PUEBLO



Al contestar cite:
201700144023
Anexo: NO
Folios: 3

Fecha: 06/06/2017 05:07:21 Tipo Doc.: SOLICITUDES
Por ítem: 1 DEFENSORIA DELEGADA PARA LA INFANCIA
Destinatario: MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA
Destinatario: # 23 B - 78 FONTIBON

Doctora
MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA
Carrera 118 No. 23b - 78 Fontibón
Ciudad

Referencia: su solicitud de información de 22 de mayo de 2017

Respetada doctora:

En atención a su solicitud relacionada con información sobre reclutamiento forzado de menores de edad realizado por las FARC me permito informarle lo siguiente:


1. De conformidad con lo dispuesto tanto en la Constitución y en la Ley son funciones de la Defensoría del Pueblo exactamente aquellas que usted tuvo a bien mencionar en la solicitud, motivo por el cual es de su conocimiento que ni el registro de los menores de edad reclutados forzosamente por las FARC ni la implementación de las medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, ni las de rehabilitación o reintegración, ni el adelantamiento de investigaciones, procesos sancionatorios o aplicación de sentencias, son funciones que hayan sido asignadas a esta Institución.
2. Las anteriores funciones han sido asignadas como corresponde a instituciones de índole gubernamental como son las siguientes, a las que igualmente se puede dirigir para obtener información precisa sobre los ítems a que ha hecho referencia:
 - (i) La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, la Utilización y la Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados: para todo lo relacionado con el número de casos registrados en el país y para que se le informe de las medidas tomadas por el Estado colombiano para prevenir el reclutamiento de menores de edad. El Ministerio Público carece de las funciones propias para adelantar gestiones para la prevención del reclutamiento más allá de aquellas relacionadas a la promoción y divulgación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en cada una de las cuales se hace referencia al reclutamiento de menores de edad como una vulneración y una infracción respectivamente.
 - (ii) Las quejas presentadas ante la Defensoría del Pueblo por casos relacionados con el reclutamiento forzado surten el trámite pertinente ante la Fiscalía General de la nación, a fin de que se adelanten las investigaciones penales correspondientes; ante la fuerza pública, para que se tomen las previsiones para proteger a quienes son amenazados o proceder al respectivo rescate de quienes han sido víctimas del delito; ante el ICBF, como institución que puede tomar las medidas concernientes al restablecimiento administrativo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en riesgo de afectación de sus derechos; a las autoridades civiles de los territorios en los que se encuentran los menores de edad afectados a fin de que como autoridades de policía tomen las previsiones necesarias para proteger su vida e integridad. De todas las actuaciones se hace el correspondiente seguimiento

mediante el cual se verifica la intervención de las autoridades gubernamentales y de investigación a fin de establecer la continuidad y la preferente garantía de los derechos.

- (iii) La información relacionada con los procesos de investigación, acusación y juzgamiento por el delito en cuestión la puede obtener en la Fiscalía general de la Nación o en el Consejo Superior de la Judicatura. Igual ocurre con la cantidad de integrantes de la guerrilla de las FARC procesadas por el mismo delito. La defensoría del Pueblo carece de la misma.
- (iv) Finalmente, mediante la Ley 1448 de 2011 la responsabilidad de las medidas propias de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos victimizantes contemplados en la misma, entre los cuales se encuentra el reclutamiento ilícito, a la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado. Dicha unidad en su condición de coordinadora del SNARIF puede suministrarle la información relacionada con las acciones gubernamentales dispuestas para el cumplimiento de los objetivos antes mencionados y que tampoco corresponden al Ministerio Público.
- (v) El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene la función de adelantar los procesos administrativos de restablecimiento de los derechos de los menores de edad y en tal condición adelanta los pertinente respecto de aquellos que han sido víctimas del reclutamiento forzado mediante un programa especial y especializado en la atención de este tipo de hechos victimizantes.
- (vi) Por último me permito anexarle la información correspondiente a las quejas recibidas por la Defensoría del Pueblo y que hacen referencia a reclutamiento ilícito de menores de edad en los últimos cinco años. (Ver cuadro anexo).

Con lo anterior espero haber podido resolver las inquietudes planteadas en su derecho de petición.

Cordial saludo,



LUZ MILA CARDONA ARCE
DEFENSORA DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE
LA INFANCIA, LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR

Anexo: lo anunciado en un (1) folio.
Proyecto: Mario Suescun
Revisó: Luz Mila Cardona Arce
Archivado en
Consecutivo Dependencia

4010-084-

PRESUNTO RESPONSABLE FARC. (FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA)
EL RECLUTAMIENTO DE MENORES DE 18 AÑOS
1 DE ENERO DE 2013 A 6 DE JUNIO DE 2017

PRESUNTO RESPONSABLE	CONDUCTA	No. VIOLACIONES
FARC. (FUERZAS ARMADA REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA)	EL RECLUTAMIENTO DE MENORES DE 18 AÑOS	35

ANEXO NO 5 RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE LA CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA INTERSECTORIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL RECLUTAMIENTO, UTILIZACIÓN Y VIOLENCIA SEXUAL CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES POR GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY Y POR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS.



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA



OFI17-00092959 / JMSC 100160

Bogotá D.C. lunes, 31 de julio de 2017

Ciudadana

MARIA ISABEL MELENDEZ SALAMANCA

Carrera 118 b # 23 b – 78 Fontibón

Isabel_melendez912@hotmail.com

Bogotá D.C.

Al contestar citar este número OFI17-00092959 / JMSC 100160

Asunto: Respuesta Derecho de Petición – Solicitud de Información

Respetada Ciudadana Meléndez Salamanca:

Reciba un cordial saludo,

De acuerdo al Decreto 1569 de 2016, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados tendrá por objeto “orientar, coordinar, articular y hacer seguimiento a las acciones que adelanten las entidades estatales tanto en el nivel nacional como en el territorial, en un marco de respeto por la descentralización administrativa, las agencias de cooperación internacional y las organizaciones sociales nacionales e internacionales son sujeción a los acuerdos marcos de cooperación para prevenir la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el de ser protegidos contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados”.

Respecto a su petición, "(...) Específicamente en el desarrollo de mi investigación requiero conocer cuál es el registro de los menores reclutados forzosamente por las FARC, las medidas que se han adoptado para la prevención del reclutamiento de menores, así como las de rehabilitación y reintegración de los menores que hayan sufrido el reclutamiento forzoso por parte de este grupo guerrillero, cuantas investigaciones procesos sancionatorios y sentencias se han llevado a cabo y/o se encuentran en trámite ante la justicia colombiana por el reclutamiento forzado de menores realizado por parte de la guerrilla de las FARC (Fuerzas Revolucionarias

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia

PBX (57 1) 562 9300

Código Postal 111711

www.presidencia.gov.co



Armadas de Colombia) y sus integrantes" Las preguntas: 1. La cifra de casos registrados sobre reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC en el país durante todo el transcurso del conflicto armado. 2. Todas las medidas (jurídicas, administrativas y de otra índole) tomadas por parte del Gobierno Colombiano o de las cuales tenga conocimiento para prevenir el reclutamiento forzado de menores. 3. Cuántos procesos de investigación, acusación y juzgamiento por el reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla de las FARC o sus integrantes existe. 4. Cuántas personas integrantes de esta guerrilla han sido investigadas juzgadas y sancionadas por este delito sobre menores. 5. Si tiene conocimiento de que se han tomado medidas de rehabilitación, reintegración y asistencia a los menores que hayan sufrido reclutamiento forzado".

Me permito dar respuesta a cada una de sus preguntas, así:

1. *La cifra de casos registrados sobre reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC en el país durante todo el transcurso del conflicto armado.*

Entre 2013 y 2014 se registraron un total de 170 casos de reclutamiento y amenaza de reclutamiento por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Entre 2015 y 2016 se registraron 112 casos de reclutamiento y amenaza de reclutamiento. En lo corrido de 2017 se ha registrado 8 casos de reclutamiento o amenaza de reclutamiento.

Esta información es sustraída de los casos o noticias conocidas por esta Secretaría en el marco de colaboración armónica entre entidades, de casos conocidos por parte de la Defensoría del Pueblo, ICBF, Ministerio del Interior, Unidad Nacional de Protección y UARIV.

2. *Todas las medidas (jurídicas, administrativas y de otra índole) tomadas por parte del Gobierno Colombiano o de las cuales tenga conocimiento para prevenir el reclutamiento forzado de menores.*

Al hablar de la evolución normativa que regula la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso y Violencia Sexual en contra de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y grupos delictivos, es necesario empezar por la normatividad internacional y su obligatoriedad para el Estado Colombiano, siguiendo con la normativa nacional e implementación.

Normativa Internacional:

Los instrumentos internacionales creados para la prevención y protección de los menores de edad en un estado de guerra e indefensión, entre otros, han sido:

- i) Convenios de Ginebra 1949, Artículo 15, Artículo 24 (protección de civiles en el marco de guerras y la protección de los menores de 15 años);

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



- ii) Protocolos Adicionales a los convenios de 1977, Artículos 77.2, 2 y 4.3, artículo 6 numeral 3 (amplía y explicita la obligación de protección, restablecimiento de derecho y reparación integral de los menores);
- iii) Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, artículo 39;
- iv) Protocolo facultativo de 2000 de la Convención y el Protocolo II;
- v) Convenio 182 de la OIT – Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, artículo 3;
- vi) Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción 1997;
- vii) Convención sobre Municiones en Racimo de 2008;
- viii) Corte Penal Internacional en 1998, artículo 8.2 b) xxvi) en tratándose de conflictos internacionales, 8.2 e) vii) en casos de conflicto interno;
- ix) Res. 1261 de 1991 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Las obligaciones de los Estados y actores de conflictos armado internos e internacionales entre otras son: poner fin a la impunidad y enjuiciar a los responsables de violaciones graves, asegurar la protección de los niños en situaciones de conflicto armado, adoptar medidas especiales para proteger a los niños y niñas (violaciones y otras formas de abuso sexual y de la violencia basa en el género en situaciones de conflicto armado), facilitar el desarme, la desmovilización, la rehabilitación y la reintegración de los niños utilizados como soldados en violaciones del derecho internacional).
- x) El Sistema universal de Derecho Internacional Humanitario diseñó los “*Los Principios y Directrices Sobre Niñez Vinculada Con Fuerzas o Grupo Armados*” – *Declaración de París 2007*, UNICEF complementa este producto con una guía para los principios, denominándolos los “*Principios y Guías sobre Niñez vinculada a Grupos y Fuerzas Armadas*”. De una lectura de los principios se intuye que es menor: “*Todo niño o niña menor de 18 años de edad de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño; menor vinculado a grupo armado o fuerza armada como cualquier persona menor de 18 años que esté o haya sido reclutada o utilizada por un grupo o fuerza armada en cualquier condición, incluyendo pero no limitándose a niños, niñas usadas como combatientes, cocineras, vigías, mensajeras, espías o para propósitos sexuales*”, así mismo se plantea una etapa posterior a la reinserción infantil la cual se “*alcanza cuando se han asegurado las condiciones políticas, legales, económicas y sociales requeridas para que estos niños y niñas mantengan sus vidas, su sostenimiento y dignidad*”.

De acuerdo al artículo 93¹ de la Constitución Política de Colombia, todos los tratados y convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Congreso de la república, es decir que hayan pasado por el

¹ **ARTICULO 93.** Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución. La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



proceso de revisión de constitucionalidad y favorabilidad para el Estado Colombiano, en las cuatro cámaras del Senado y Cámara de la República, que reconozcan los derechos humanos y que prohíban la limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. (Subrayado fuera del texto)

En este sentido, de los convenios y protocolos ya enunciados el Estado Colombiano tiene obligación en su cumplimiento. Así entonces se han creado y dispuesto de una normativa nacional, que en el caso de la protección y prevención de abusos de los niños en estado de guerra e indefensión, son:

Normativa Nacional:

- i) Artículo 44 de la Constitución Política de 1991: Protección a la niñez y catálogo de derechos fundamentales, ha dicho la Corte Constitucional: *“los menores gozan de una garantía reforzada dentro del marco constitucional, (...) sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, traducido en la obligación del Estado y todos sus funcionarios en preservar el bienestar integral de los menores (...)”*;
- ii) Artículo 14 de la Ley 418 de 1997: *“Quien reclute a menores de edad para integrar grupos insurgentes o grupos de autodefensa, o los induzca a integrarlos, o los admita en ellos, o quienes con tal fin les proporcione entrenamiento militar, será sancionado con prisión de tres a cinco años. PARAGRAFO. Los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley, que incorporen a las mismas, menores de 18 años, no podrán ser acreedores de los beneficios jurídicos de que trata la presente ley”*;
- iii) Artículo 162 de la Ley 599 de 2000 – Código Penal: *“El que, con ocasión y en desarrollo del conflicto armado, reclute menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas, incurrirá en prisión de 6 a 10 años y multa de 600 a 1000 SMLMV”* La ley 890 de 2004 modificó este artículo dejando la pena entre 8 a 15 años;
- iv) Ley 704 de 2001. Acoge el Convenio 182 de la OIT relativo a las peores formas de trabajo infantil;
- v) Ley 1098 de 2006. Código de la infancia y la adolescencia. Contiene normas sustanciales y procesales para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, así como las obligaciones de la familia, la comunidad y el Estado (artículo 10) frente a su reconocimiento como sujetos de derechos, el deber de prevenir, garantizar y restablecer sus derechos, con el fin de asegurar el desarrollo pleno y armonioso de los más pequeños.

Aunado a lo anterior, en el artículo 20, se dispone la necesidad de protección en “4) la violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la

por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. * **Modificado por el Acto Legislativo 2/2001. Fueron agregados inciso 3º y 4º.**

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



persona menor de edad; 6) las guerras y los conflictos armados; y 7) el reclutamiento y la utilización por parte de los grupos organizados al margen de la ley”.

- vi) Decreto 3043 de 2006 el reclutamiento ilícito de menores, es una conducta que implica, además de la violación del derecho a la libertad personal, la vulneración, al menos como tendencia, de otros derechos, como la integridad sexual – especialmente en el caso de niñas y mujeres-; la integridad física – por los tratos crueles y degradantes- y la libertad de trabajo – al ser sometidos a una de las peores formas de trabajo-.
- vii) Ley 1448 de 2011. Ley de víctimas y restitución de tierras. Título VI Protección Integral a los niños, niñas y adolescentes víctimas, artículo 190, considera a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento como sujetos de reparación integral considerando medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantías de no repetición.

Jurisprudencia Nacional:

- viii) Auto 251 de 2008: Obligación del Estado de actuar sobre las causas de reclutamiento forzado de menores, como mecanismos de prevención y evitar la repetición de esa violación a las normas internacionales de los conflictos armados.
- ix) Auto 092 de 2008 la Corte “La violencia sexual contra las mujeres, jóvenes y niñas que son reclutadas forzosamente por los grupos armados al margen de la ley, violencia sexual que incluye en forma reiterada y sistemática: (i) la violación, (ii) la planificación reproductiva forzada –a través de distintos medios, pero principalmente mediante la colocación de dispositivos intrauterinos y el uso de otros métodos anticonceptivos, en contra de su voluntad y sin información sobre las consecuencias de su implantación, en tanto “orden” de obligatorio cumplimiento-, (iii) la esclavización y explotación sexuales, (iv) la prostitución forzada, (v) el abuso sexual, (vi) la esclavización sexual por parte de los jefes o comandantes, (vii) el embarazo forzado, (viii) el aborto forzado y (ix) el contagio de infecciones de transmisión sexual.

Normativa Secretaría Técnica:

- x) Decreto 4690 de 2007 crea la Comisión intersectorial de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por Grupos Armados al Margen de la Ley y grupos delictivos.
- xi) CONPES 3673 de 2010 Política de prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos, en general contiene el marco jurídico aplicable para los casos de reclutamiento.
- xii) Decreto 0552 de 2012. Modifica la estructura de la Comisión Intersectorial en los siguientes aspectos: incluyó la variable de violencia sexual; amplió la participación de los miembros permanentes con voz y voto de 9 a 22; y, asignó la Secretaría Técnica al Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



- xiii) Decreto 1649 de 2014. Modifica la estructura del DAPRE, artículo 26, entrega las funciones del antiguo Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Así mismo, se estipula que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ejercerá la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, por grupos organizados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.
- xiv) Decreto 1569 de 2016. Con este se modifica el Decreto 4690 de 2007, otorgándole más funciones a la Comisión Intersectorial, a saber: *“Artículo 4. Numeral 10. Impulsar mecanismos e instrumentos de acceso a la justicia como estrategia de prevención de los delitos relacionados con reclutamiento, utilización y violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, que conduzca a la efectiva gestión de los casos remitidos, al cumplimiento de las sentencias relacionadas y facilite a la Fiscalía General de la Nación adelantar las acciones en investigación y judicialización que le competen a esta entidad judicial”.*

En el marco de esta normatividad es que el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Utilización y Violencia Sexual en contra de niños, niñas y adolescentes ha creado mecanismos y programas de intervención en terreno evitando el reclutamiento.

Sin embargo y como bien se puede leer de los decretos ley y marco en el tema, la Comisión está conformada por otras entidades del orden nacional, para lo cual recomendamos acudir a las mismas en los temas de prevención de reclutamiento.

Dentro de la oferta de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento también se encuentra el informe de gestión, tarea que se adelanta anualmente desde 2016.

Así entonces, La Secretaría Técnica ha venido desarrollando distintas acciones para cumplir con este propósito: **i)** Impulsar el monitoreo de las dinámicas de riesgo asociadas al reclutamiento, la utilización y la violencia; **ii)** fortalecer el seguimiento a la política pública; **iii)** promover la gestión del conocimiento para fortalecer el enfoque, principios, marco conceptual y operativo de la política; **iv)** consolidar el componente de Fortalecimiento Local; **v)** orientar la formulación de acciones para la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley; y, **vi)** promover acciones que visibilicen la niñez en el actual proceso de terminación del conflicto con las Farc y acompañar la salida de niños y niñas que están reclutados por esta guerrilla.

Con relación al **i) impulso del monitoreo de las dinámicas de riesgo asociadas al reclutamiento, la utilización/uso y la violencia sexual**, la Comisión Intersectorial contó para 2016 con dos priorizaciones; con el propósito principal de brindar instrumentos para que las entidades tomen decisiones orientadas a las intervenciones municipales. La primera priorización se refiere a la probabilidad de ocurrencia de casos de reclutamiento/ utilización y la segunda, a la probabilidad de ocurrencia de casos de violencia sexual contra de niños, niñas y adolescentes. A partir de ambas priorizaciones las entidades de la Comisión Intersectorial cuentan con un instrumento que permite focalizar las acciones, planes, proyectos y programas que han

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co





diseñado para prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual así como la construcción de entornos protectores para los niños, niñas y adolescentes.

Atendiendo a la segunda línea de trabajo, la cual se refiere a **ii) fortalecer el seguimiento a la política pública**, y en el marco del monitoreo y seguimiento a la implementación de la política que realiza el Observatorio de la Secretaría Técnica, se han identificado las estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas que contribuyen a prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual por parte de las entidades que conforman la Comisión Intersectorial.

Entre enero y diciembre de 2016 se reportaron 28 planes, estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas orientadas a la prevención de las mencionadas vulneraciones, de las cuales, algunas se caracterizan por su carácter temporal mientras otras, se han configurado de manera permanente dentro del desarrollo misional de las entidades.

Estos 28 planes, estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas fueron reportados por 12 entidades que conforman la Comisión Intersectorial, encontrándose presentes en un total de **998 municipios**, en los cuales se pueden ubicar entre 1 y 16 estrategias de prevención. Esta concentración de oferta corresponde a procesos internos de focalización de cada una de las entidades que pueden asociarse con algunas variables relacionadas con el conflicto armado.

Sobre este punto, desde el Observatorio de la Secretaría Técnica se ha contrastado esta información de oferta institucional con la probabilidad de que ocurran casos de reclutamiento y utilización en los municipios, y en sus diferentes niveles, lo que ha permitido entregar insumos a la toma de decisiones de las entidades de la Comisión Intersectorial.

Al respecto, avanzó en la construcción de un documento que analiza la actuación de las entidades de la Comisión Intersectorial a lo largo de un periodo de observación correspondiente a los últimos cuatro años. Así las cosas, ha sido posible identificar que entre 2013 y 2016 las entidades han reportado un total de 85 planes, estrategias, programas, proyectos y/o acciones estratégicas orientadas a la prevención del reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y han estado presentes **en al menos 1082 municipios**, donde se pueden ubicar **entre 1 y 64 estrategias para la prevención en los cuatro años del seguimiento**.

Para este tiempo de observación, el promedio nacional de la oferta se encontró indicado por 11 estrategias municipales, destacando que durante cuatro años y en **40 municipios, no se reportó alguna estrategia para la prevención del reclutamiento, la utilización y/o la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes**. De todos ellos, tres se encuentran en los niveles más altos de probabilidad de ocurrencia de casos de reclutamiento y utilización, a saber: **Concepción (Santander), La Victoria (Amazonas) y Tenza (Boyacá)**.

En cuanto a la promoción de la **gestión del conocimiento para fortalecer el enfoque, principios, marco conceptual y operativo de la política**, la Secretaría Técnica ha producido varias publicaciones de consulta para las entidades de la Comisión Intersectorial y las autoridades locales, con el fin de orientar el diseño de acciones de prevención y que atiendan el enfoque de garantía de derechos, niñez y adolescencia y promoción de entornos

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA



protectores. Estas publicaciones pueden ser consultadas en <http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/publicaciones/Paginas/2016.aspx>

Por otra parte, con relación a la **consolidación del componente de Fortalecimiento Local**, la Secretaría Técnica, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones- OIM, desarrolla un modelo de asistencia técnica y acompañamiento a través de asesores del nivel nacional y territorial. Este modelo está enfocado en el fortalecimiento de capacidades institucionales locales en los departamentos y municipios priorizados, para el diseño de acciones que prevengan el reclutamiento, la utilización y violencia sexual; así como, apoyar al nivel territorial con el fin de dar una respuesta oportuna, idónea y pertinente, en casos de riesgo y/o amenaza concreta.

Este trabajo se adelanta mediante un enfoque de gestión pública, que hace énfasis en la interrelación entre los actores o agentes, los instrumentos de gestión (políticas, planes o programas) y las instancias territoriales para prevenir el reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.

Bajo este enfoque, para el período analizado, la Secretaría Técnica asistió y acompañó a las autoridades territoriales en:

- Fortalecer el diseño, implementación y evaluación de la política de prevención de reclutamiento, utilización/uso y violencia sexual mediante la incidencia en los instrumentos e instancias territoriales de gestión de la política de prevención.
- La construcción y fortalecimiento de redes locales de prevención y protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes.
- El fortalecimiento de los procesos de búsqueda activa de casos de amenaza de reclutamiento, reclutamiento y desvinculaciones.
- La gestión de los casos de reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.

Esta asistencia técnica se realizó en 17 departamentos y 81 municipios:

Departamento	Municipios	Total
Tolima	Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Ibagué, Espinal, Planadas, Ataco, Chaparral, Rioblanco,	6
Nariño	Tumaco, Magüi Payán, Roberto Payán, Barbacoas, Ricaurte, Mallama, Samaniego, Ipiales y Pasto.	9
Meta	Departamento, Villavicencio, La Macarena, Uribe, Mesetas, Vistahermosa, Puerto Rico, y Mapiripán.	8
Cundinamarca	Medina y Cabrera	2
Huila	Pitalito, Campoalegre, Acevedo, Neiva y Algeciras	5
Antioquia	Departamento, Medellín, Turbo, Apartado, Ituango, Zaragoza, y El Bágre.	7

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co





Arauca	Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Pto Rondon, y Cravo Norte.	7
Chocó	Departamento, Quibdo, Tado, Bajo Baudó, Medio Baudó, Alto Bauda, Itsmina, Riosucio, y Unguía.	9
Norte de Santander	Cúcuta, El Tarra, Tibú y Ocaña.	4
Santander	Bucaramanga y Barrancabermeja.	2
Bogotá	Bogotá	1
Córdoba	Departamento	1
Cauca	Departamento, Jambalo y López de Micay.	3
Valle del Cauca	Departamento, Cali, Tuluá, B/ventura, Florida, Trujillo, Jamundí y Pradera.	8
Guaviare	Miraflores	1
Vaupés	Taraira, Caruru y Buenos Aires	3
Caquetá	Florencia, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguan, Puerto Rico y La Montañita	5
Total		81

Considerando el escenario de postconflicto y de construcción de paz, la Consejería Presidencial en el ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial ha venido promoviendo la articulación de distintos sistemas desde el nivel territorial. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, se viene agenciando la articulación de los tres grandes sistemas relacionados con la gestión de la política pública de prevención de reclutamiento, a saber SNBF, SNARIV, SNDDHH, a la vez que se pretende incidir en la definición de los Planes Operativos Anuales de Inversión de los municipios focalizados.

En los municipios de la región Pacífico Sur se propone una experiencia innovadora para la socialización e implementación de la política pública de prevención de reclutamiento con comunidades y funcionarios locales, mediante actividades que posibilitan el acercamiento institucional a las organizaciones comunitarias de los municipios priorizados (por ej. cine foros sobre reclutamiento y utilización/uso); a través de los cuales, se difunden los principios de la política, al tiempo que las comunidades pueden acceder a algunos bienes y servicios de los gobiernos e instituciones locales.

En otros territorios se plantean acciones de incidencia directa en las políticas públicas de infancia y adolescencia, especialmente en municipios de relevancia histórica del conflicto, en donde se planea asesorar directamente la elaboración de la política y/o apoyar la formulación de planes de trabajo de las Mesas de Infancia. También se busca incluir acciones de prevención de reclutamiento en los planes de las instancias asesoradas con un horizonte temporal del 2017.

En otros municipios se adelanta un ejercicio de identificación de la oferta nacional y local para la prevención del reclutamiento, con el propósito de hacer la oferta nacional más adecuada, pertinente y complementaria de

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia

PBX (57 1) 562 9300

Código Postal 111711

www.presidencia.gov.co



Certificado
No. SC5672-1



Certificado
No. GP055-1

los planes, proyectos y programas del nivel local. También se proponen actividades novedosas para la socialización de la política pública de prevención con alcaldes y personeros municipales de los municipios focalizados en articulación con las Mesas de Prevención del Departamento, donde estas últimas se encuentran constituidas.

3. *Cuántos procesos de investigación, acusación y juzgamiento por el reclutamiento forzado de menores por parte de la guerrilla de las FARC o sus integrantes existe.*

Se recomienda acudir al ente acusador destinado para tal fin por parte del Estado Colombiano, a saber, la Fiscalía General de la Nación. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento no cuenta con una cifra exacta o precisa respecto el número de investigaciones o noticias criminales iniciadas en contra de presuntos responsables por la comisión del delito de reclutamiento.

4. *Cuántas personas integrantes de esta guerrilla han sido investigadas juzgadas y sancionadas por este delito sobre menores.*

Se recomienda acudir al ente acusador destinado para tal fin por parte del Estado Colombiano, a saber, la Fiscalía General de la Nación. La Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento no cuenta con una cifra exacta o precisa respecto el número de investigaciones o noticias criminales o investigaciones cursadas respecto al delito de reclutamiento.

5. *Si tiene conocimiento de que se han tomado medidas de rehabilitación, reintegración y asistencia a los menores que hayan sufrido reclutamiento forzado*

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos lideró el diseño y puesta en marcha del **Programa Camino Diferencial de Vida para la acogida y atención especial de las personas menores de edad que salen de los campamentos de las FARC.**

Tal como fue convenido en el Acuerdo final suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el Consejo Nacional de Reincorporación aprobó el programa especial “Camino Diferencial de Vida”, que contempla especiales medidas para la reincorporación de los menores de edad que salgan de las FARC-EP hasta la finalización de la dejación de armas. Este programa tiene por propósito garantizar que todos los menores de 18 años que salgan de las FARC-EP cuenten con las herramientas necesarias para la reconstrucción y consolidación de sus proyectos de vida en el marco del restablecimiento pleno de sus derechos, la reparación integral, la reincorporación y su inclusión social, mediante la articulación institucional y la participación activa de estos, sus familias, comunidades y organizaciones sociales de sus comunidades de origen.

El programa está compuesto por cuatro procesos: (i) la salida de los menores de edad; (ii) el restablecimiento de sus derechos (iii) su reparación integral y su (iv) reincorporación e inclusión social.

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co





La salida y traslado hacia los lugares transitorios de acogida, en donde estos adolescentes dan inicio al Camino Diferencial de Vida, es liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja –CICR–, en compañía de dos delegados de la sociedad civil. Una vez en estos lugares, adecuados y puestos en funcionamiento gracias a la unión de esfuerzos entre el Gobierno Nacional y la cooperación internacional a través de UNICEF y OIM, los niños quedan bajo la protección de los defensores de familia, autoridad nacional en materia de niñez.

En ese marco, la Consejería Presidencial, en coordinación con el Defensor de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de la vigilancia de los lugares transitorios, articula la oferta para el restablecimiento de los derechos de los niños, especialmente su derecho a la identidad (Registraduría Nacional), a la salud (acceso y afiliación), a la educación (nivelación y certificación para gestión de cupos), a tener una familia (encuentros y reincorporación familiar, en los caso en que ello sea posible) y a la reparación integral.

Estos niños y niñas son considerados víctimas del conflicto armado, por lo que en los lugares transitorios se garantiza la presencia del Ministerio Público para la toma de las declaraciones sobre los hechos victimizantes que hayan sufrido con ocasión del conflicto para que una vez incluidos en el Registro Único de Víctimas, sean reparados integralmente.

Luego de analizado cada caso en particular, se adopta una medida de protección para estos adolescentes, en aras de garantizar el adecuado restablecimiento de sus derechos, esta medida puede consistir en que regresen a sus familias o sean llevados a familias tutoras, o que, en aquellos casos en los que la reincorporación familiar no sea posible, sean trasladados a hogares de protección.

La consolidación del proyecto de vida de cada uno de los adolescentes tiene lugar en el proceso de reincorporación que, dando continuidad al Camino Diferencial de Vida, contempla un enfoque diferencial que será desarrollado por el Consejo Nacional de Reincorporación.

Sin otro particular y agradeciendo su gentil atención,

Atentamente,

PAULA GAVIRIA

Consejera Presidencial para los Derechos Humanos

Secretaría Técnica Intersectorial para la prevención del reclutamiento, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.

OFICIO INFORMACIÓN PÚBLICA

Calle 7 No. 6-54, Bogotá, Colombia
PBX (57 1) 562 9300
Código Postal 111711
www.presidencia.gov.co



Certificado
No. SC5672-1



Certificado
No. GP055-1